

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BALESTRINI (M.A.)

Informe complementario referido al Orden del Día
Nº 359, sobre Carta Orgánica del Banco Central
de la República Argentina y modificación
de la legislación financiera

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación se apresta a tratar un tema crucial para el futuro de la Argentina: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y cambios en la Ley de Entidades Financieras. Es crucial porque todos y cada uno de los argentinos se verá afectado en forma directa por lo que esta asamblea decida; de ahí la importancia de este tema y los más de seis meses que lo estuvieron tratando en forma intensiva estas tres comisiones.

A través del manejo de los instrumentos monetarios y financieros a los que, por sus características, tienen acceso los bancos centrales, se puede promover o desincentivar alguna industria o producción, favorecer o perjudicar a algún grupo o sector, redistribuir ingresos entre los distintos sectores, financiar al gobierno, lograr estabilidad o precios o producir hiperinflación, crear las condiciones para el surgimiento de un genuino mercado de capitales o promover el cortoplacismo, hacer de los billetes un medio de cambio, patrón de medida y

reserva de valor o simplemente papeles pintados, recaudar impuestos no legislados, etcétera. Estos son algunos ejemplos de los resultados que puede producir a través del Banco Central de la República Argentina, mediante su potestad de emitir dinero y su carácter de rector del sistema financiero. El dinero es un instrumento utilizado por todos los habitantes ya sea para realizar transacciones, para fijar el monto de deudas o acreencias, o para conservar su riqueza. Es por ello que las decisiones que se tomen desde el Banco Central de la República Argentina (al que esta Cámara pretende otorgarle una carta orgánica que defina su papel operativo) penetran a todo el tejido social y económico. Pocas veces se tratan leyes que afecten en forma directa y casi inmediata a todos los argentinos. Semejante poder que abarca cuestiones sociales, culturales, económicas y financieras no puede quedar en manos de los funcionarios de turno, dependiendo el bienestar de toda la nación de la buena voluntad de un reducido número de personas. El Congreso debe tomar cartas en el asunto, porque así lo establece la Constitución.

El tema cobra mayor importancia debido a que la actual Carta Orgánica es imprecisa en cuanto a los objetivos del Banco, generosa en cuanto a las atribuciones discrecionales que otorga al gobierno del Banco y per-

misiva en cuanto al financiamiento al gobierno. Por su parte, la Ley de Entidades Financieras tiene numerosos elementos que avalan y complementan las características mencionadas, e incluso impone fuertes responsabilidades a la sociedad vía Banco Central de la República Argentina. La deficiencia de la actual legislación queda de manifiesto en el hecho de que para llevar adelante la actual política económica fue necesario dictar leyes que "desde afuera" neutralizaran gran parte de la Carta Orgánica vigente y disposiciones de la actual Ley de Entidades Financieras.

Es necesario que dotemos al Banco Central de la República Argentina de una carta orgánica que defina claramente sus objetivos, funciones, atribuciones y limitaciones, de forma de dotar a nuestra Nación en forma permanente de una moneda estable y un sistema financiero sólido. Una moneda fuerte es la base sobre la cual se construyeron todas las potencias industriales del mundo. No existe un solo ejemplo de un país que tenga desarrollo económico y social sin tener un signo monetario estable. Por el contrario, la mayoría de los países que tienen graves problemas sociales y económicos se caracterizan por una alta volatilidad en el valor de su moneda.

En referencia a nuestro país, la posibilidad que tenía el Poder Ejecutivo de manejar con total discrecionalidad y sin control las políticas monetarias y financieras, explican gran parte de los procesos de alta inflación con su correlato de tasas negativas de crecimiento e inversión, y redistribución negativa del ingreso. El Banco Central de la República Argentina fue utilizado discrecionalmente por el poder político para financiar los déficit del sector público mediante el impuesto inflacionario, burlando incluso los principios constitucionales que exigen que los impuestos deben ser creados por ley. Esto no sólo permitió que los gobiernos prorrogaran indefinidamente el ajuste y cambios estructurales, rematando el presente e hipotecando el futuro, sino que además obligaba a los sectores más humildes a pagar los déficit que las malas gestiones generaban. Pero en realidad el gobierno sólo cobró menos de una cuarta parte de lo que recaudó con el impuesto inflacionario. Esto dio como resultado una doble redistribución negativa del ingreso: por un lado, las pérdidas del Banco Central de la República Argentina eran pagadas por la sociedad en proporción inversa a su nivel de ingresos (los sectores más humildes eran los que menos chance tenían de eludir el impuesto inflacionario) y los recursos fueron apropiados por un reducido grupo. Es decir, el impuesto inflacionario estaba privatizado y era distribuido en los distintos grupos según la capacidad de lobby. Estos beneficiarios han sido conocidos popularmente con el nombre de "patria financiera", "patria cambiaria", "patria contratista", "patria exportadora", etcétera, todos desarrollados al amparo de perversos mecanismos legales, que proponemos eliminar y modificar. Difícilmente pueda encontrarse en la historia económica argentina una injusticia social mayor a lo provocado por el proceso descrito. Todo esto debido a los mecanismos que introducía la legislación vigente al sistema financiero. Se llega así a una situación franca-

mente intolerable. Durante la década de los 80 la sociedad sufrió pérdidas por más de 100.000 millones de dólares. Sin duda otra sería la historia económica argentina si la legislación que vamos a aprobar hoy hubiese sido aprobada hace diez años.

Veamos los temas más relevantes contenidos en el dictamen de mayoría:

Objeto del Banco Central de la República Argentina

En la nueva Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina contenida en el dictamen, se le asigna en el artículo 3º el rol básico y fundamental de "preservar el valor de la moneda"; todos los demás objetivos del banco están subordinados a éste.

En la Carta Orgánica vigente se le asigna al Banco Central de la República Argentina numerosos objetivos que en muchos casos son contradictorios, sin fijar un orden de prioridades.

Creemos que la base de una economía fuerte, con justicia social y desarrollo, es una moneda estable; de ahí la necesidad de que en esa dirección se orienten todos los esfuerzos de la institución. Esta misión es la que justifica la creación del Banco Central de la República Argentina; así figura en su primera Carta Orgánica de 1935, que en su artículo 3º, inciso a) le asignaba, como primera función, preservar el valor de la moneda.

Independencia del Banco Central de la República Argentina

Al problema inflacionario emergente de la perversa combinación de control del gasto y control de su financiamiento vía emisión de dinero, con sus inevitables consecuencias inflacionarias, se le agrega el problema de la desestabilización que supone la alternancia de políticas económicas conceptualmente disímiles.

Cuando la alternancia de partidos en el control político, con distintas concepciones económicas, se produce en un medio en el que el control monetario no es independiente, el nivel de incertidumbre naturalmente se incrementa.

Esto provoca una agudización de los ciclos económicos de corto plazo y, al aumentar el nivel de riesgo de la economía, provoca una disminución en el nivel de inversión, por el aumento en la tasa de interés de la economía.

Además de ello, este tipo de alternancias sesga la inversión general hacia proyectos que supongan una corta maduración, de modo tal de cubrir los riesgos inherentes a una situación económica inestable.

La solución natural a este tipo de problemas a los que la mayor parte de los países desarrollados ha ido arribando consiste en independizar el control del Banco Central de las autoridades políticas circunstanciales y fijarle al mismo el objetivo primordial de "preservar el valor de la moneda". Recordemos que estos lineamientos ya estaban plenamente incorporados en la ley 12.155 que creó el Banco Central de la República Argentina.

Qué se entiende hoy en día por independencia del Banco Central de la República Argentina

La independencia del control del Banco Central, básicamente, se refiere a:

1. Independencia en cuanto a la política económica en general, a fin de "preservar el valor de la moneda".
2. Independencia en cuanto a estar relevado de la obligación de financiar automáticamente al gobierno.
3. Independencia en lo que se refiere a su propia organización y administración interna.

Estas tres cuestiones se encuentran ampliamente cubiertas en el proyecto de Carta Orgánica del Banco Central que se está tratando.

1. Independencia en cuanto a la política económica en general

En cuanto a la independencia institucional, la cobertura se alcanza por medio de varios artículos de la ley:

El artículo 39 no sólo fija la preservación del valor de la moneda como "misión primaria y fundamental" del Banco Central, sino que limita el accionar del Banco a la legislación que dicte el Honorable Congreso de la Nación, lo libera de cualquier tipo de instrucción que pueda provenir de otro ámbito de los poderes públicos y le prohíbe taxativamente "condicionar, restringir o delegar" facultades, sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación.

Como ya dijimos antes: "la función básica y primordial del Banco Central es "preservar el valor de la moneda", resulta obvio que la única dependencia que puede tener es la del Congreso, puesto que es este Parlamento al que la Constitución Nacional le atribuye la facultad de fijar el valor de la moneda.

El complemento de estas disposiciones se encuentra en:

— El artículo 79, que requiere el acuerdo del Senado de la Nación para la designación de los miembros del directorio del Banco Central de la República Argentina.

En este sentido bien vale recordar no sólo los antecedentes históricos y jurídicos locales a los que ya hicimos referencia. La muy reciente experiencia chilena en la materia adopta idéntico criterio. Nótese que, no obstante ello, la legislación chilena, al dotar al Banco Central de un status constitucional, convierte al mismo en —prácticamente— un cuarto poder, situación que desde luego no estamos enulando con este proyecto de ley. Este status prácticamente constitucional también está presente en la legislación alemana sobre el Bundesbank, donde habitualmente el público se refiere a él como "el cuarto poder".

El mismo requisito de acuerdo del Senado lo encontramos en la legislación de numerosos países. Notoriamente el de Estados Unidos.

— El artículo 89, que indica que no podrán ser miembros del directorio del banco aquellas personas que directa o indirectamente dependan de otros organismos públicos o que puedan tener vinculaciones con otras entidades, de modo tal que sobrevengan conflic-

tos de intereses que puedan condicionar la libertad de criterio de los directores de la institución. Además, por el artículo 69 se exige que las personas que desempeñen como directores no sólo tengan probada idoneidad sino que además gocen de reconocida solvencia moral. Sólo para las personas que sean argentinas por naturalización se les exige 10 años de ejercicio de la ciudadanía.

— El artículo 99, que fija un procedimiento de remoción para los directores del banco, que aunque en definitiva queda a cargo del Poder Ejecutivo nacional, requiere el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación integrada por miembros de las dos Cámaras.

— El artículo 10, que obliga al presidente del Banco Central de la República Argentina —al menos una vez por año— a presentar un informe sobre la política seguida por la institución, a comisiones de cada una de las dos Cámaras.

Dado que esta independencia no puede ser ejercida sin un adecuado control, los artículos 36 y 39 se encargan de reforzar la sindicatura del Banco Central de la República Argentina, incorporando un síndico titular y otro adjunto, que también deben contar con acuerdo del Senado y el requisito de una auditoría externa rotatoria para los balances del Banco Central de la República Argentina.

Coordinación con la política económica general

No obstante esta independencia del Banco Central en relación a la política económica de turno, el proyecto prevé una adecuada coordinación de la política monetaria con la política económica general.

Para ello, el artículo 79 fija la duración del mandato de los miembros del directorio por un plazo de 6 años, de modo tal que sus mandatos, de hecho, se superponen a distintos períodos de mandato del Poder Ejecutivo nacional.

El artículo 79, junto con el artículo 58, implica que la mitad de los miembros del directorio se renueva cada tres años. De este modo se combina la necesidad de preservar una razonable continuidad de las políticas, con la de producir cambios no violentos o traumáticos que puedan ocasionar consecuencias no deseadas en el valor de la moneda o en la estabilidad del sistema financiero.

Nuevamente puede ser ilustrativo en este punto referirnos a la situación de la hermana República de Chile, ejemplo muy reciente de transición democrática con estabilidad de precios y crecimiento de la economía, en donde el mandato de los directores del Banco Central se extiende durante 10 años, plazo superior a de cualquier autoridad elegida por votación popular. El reemplazo de los mismos se va sucediendo en forma parcial y escalonada, cada dos años.

Vale la pena también recordar la legislación norteamericana mediante la cual la duración de los períodos de los miembros del Board de la Reserva Federal es de 14 años, con acuerdo del Senado y renovación parcial escalonada. En este caso la duración del mandato del presidente de la Reserva Federal es de 7 años y en

la práctica hemos visto en los últimos años que el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, confirma en la dirección de la Reserva Federal a los conductores designados por la administración anterior.

Consideraciones similares caben con respecto a la legislación alemana con respecto al Bundesbank.

Asimismo, a fin de garantizar una necesaria coordinación de la política monetaria con la política económica general, el artículo 12 prevé la participación natural en las reuniones del directorio del Banco Central de la República Argentina, con voz pero sin voto, del ministro de Economía o su representante.

2. Independencia en lo referido al financiamiento del gobierno

El segundo de los aspectos antes mencionados, referido a la "independencia en cuanto a la obligación de financiar automáticamente al gobierno", también se encuentra cubierto en varios artículos de la ley.

El artículo 19 prohíbe expresamente conceder préstamos directos al gobierno nacional, a los bancos oficiales, provinciales o municipales. El mismo artículo tiene la prohibición de extender garantías a favor de tales entes.

El artículo 33 restringe el crédito total que el Banco Central puede extender a favor del gobierno nacional, fijando un máximo del 33 % para la tenencia de títulos públicos que pueden ser mantenidos "como prenda común" a los que se refiere la ley 23.928 (de convertibilidad).

El artículo 20 dice que el Banco Central sólo podrá financiar al gobierno a través de la compra —a precios de mercado (y no a su valor nominal)— de títulos públicos que sean negociables. Asimismo, este artículo fija un límite, del 10 %, al crecimiento anual que pueden experimentar las tenencias de títulos públicos en poder del Banco Central, restringiendo de este modo el monto de financiamiento que anualmente pueda extender la institución a favor del gobierno.

El artículo 60 interrumpe el financiamiento que el Banco Central podría extender a favor del gobierno, producto de los eventuales beneficios originados por las operaciones de cambio del banco.

Otra consideración aparte merece la prohibición de integrar encajes con otra cosa que no sea dinero, contenida en el artículo 28. Se evita de este modo la extensión de un financiamiento solapado al gobierno nacional, que existiría si se permitiera integrar los encajes de los bancos con títulos públicos.

Dicho sea de paso, a fin de preservar el control sobre la cantidad de dinero —cumpliendo con el objetivo primordial de preservar el valor de la moneda y mantenerse dentro de los lineamientos de la Ley de Convertibilidad— se prohíbe la remuneración de los encajes.

Sobre el particular sólo cabe recordar la costosa experiencia que en materia de pérdidas se origina en el pasado por la "Cuenta de regulación monetaria", la que queda derogada mediante el artículo 8º. Dicho sea de paso, esta prohibición de remunerar encajes también se encuentra presente en numerosos países (caso del Bundesbank).

3. Independencia administrativa del Banco Central de la República Argentina

El tercero de los aspectos a los que se refiere la independencia del Banco Central de la República Argentina, vinculado a su administración y organización interna se encuentra en los siguientes artículos:

El artículo 15 faculta al directorio a tomar todas las medidas de política administrativa que se requiriesen para el buen funcionamiento de la institución, permitiéndole incluso elaborar su propio presupuesto de funcionamiento, el que incluye las remuneraciones que perciben los miembros del directorio (artículo 7º). Este punto ya estaba presente en nuestra legislación en 1935.

El artículo 16 permite la remoción de los máximos miembros de conducción de la institución, "la línea" como diría el periodismo, de modo tal de preservar la independencia del Banco incluso en la ejecución de las políticas y evitando así que de la implementación de las mismas puedan surgir elementos que distorsionen los objetivos fijados al momento de decidirlas. Ese punto también ya se encontraba presente en la ley 12.153.

Otras funciones del Banco Central

De entre las otras funciones que se le asignan al Banco Central, permitásemos destacar un aspecto clave: en la medida en que se definen "otras funciones", significa que las mismas están subordinadas a "preservar el valor de la moneda".

Los incisos a) y b) del artículo 4º facultan al Banco Central a dotar de una adecuada liquidez al sistema. Ya veremos más adelante en extenso este punto, donde se fijan límites a las políticas del Banco Central de la República Argentina como "prestamista de última instancia", de modo de preservar el valor de la moneda.

También vale la pena destacar que, en el inciso e) de este mismo artículo 4º, al decir "propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales", implícitamente se distingue entre el concepto de "dinero", elemento que se encuentra en la órbita del Banco Central de la República Argentina y el concepto de "crédito", elemento que se encuentra en la órbita del mercado de capitales.

Se recoge en este inciso e) del artículo 4º la experiencia internacional en la materia. En todo el mundo durante los últimos años el financiamiento de la actividad productiva se realiza cada vez más vía *securitization*, es decir: emisión de deuda por parte de las empresas, que es finalmente suscrita por los ahorristas finales. Paralelamente a ello se va observando una disminución progresiva de la financiación directa de los bancos hacia las empresas, y un rol cada vez más activo de las entidades financieras en la intermediación entre terceros.

Esto implica que los riesgos vinculados al mercado de préstamos no se asumen en los bancos, sino que son transferidos a los tenedores de fondos prestables. Se asegura así una estructura bancaria mucho más sólida y estable.

La consecuencia de este crecimiento paulatino del mercado de capitales, junto con la disminución progresiva del financiamiento directo desde las entidades financieras, es que los bancos son más sólidos. Se disminu-

ven así los posibles efectos "dominó" originados por la caída de una entidad y —fundamentalmente— se preserva la estabilidad de la moneda: ante una crisis de solvencia en el mercado de préstamos lo que se afecta es el crédito y no el valor de la moneda.

Operaciones permitidas y prohibidas al Banco Central de la República Argentina

Sin estabilidad en el valor de la moneda, el sistema financiero local presenta obvias y notorias desventajas competitivas con respecto al resto del mundo. Existen dos condiciones fundamentales para que un sistema financiero se desenvuelva sin sobresaltos. Ellas son:

- Que exista demanda para sus depósitos.
- Que exista un prestamista de última instancia que asuma el riesgo del descalce de plazos del sistema financiero.

Las recientes experiencias hiperinflacionarias que hemos padecido en nuestro país muestran claramente que la demanda de australes depende de la tasa de inflación que el público percibe. Es más, en algún momento la demanda de dinero local, y por ende, de depósitos, puede virtualmente desaparecer.

Todos somos conscientes de que el sistema financiero puede llegar a funcionar recibiendo y prestando depósitos captados en otras monedas. De hecho, hoy por hoy, en nuestro país el sistema financiero local capta más recursos en dólares que en australes.

En la práctica esto significa que el público percibe más contingencias desfavorables sobre el valor de la moneda (o sea sobre los efectos de las políticas que definen las autoridades económicas y/o monetarias), que sobre la solvencia de las entidades financieras.

Un sistema de estas características debe acostumbrarse a funcionar con un banco central cubriendo un rol muy limitado como prestamista de última instancia. Básicamente porque el Banco Central no puede emitir otra cosa que no sea moneda local. Mucho más estando vigente la Ley de Convertibilidad, que sólo permite emitir contra el respaldo de divisas.

Queda claro entonces que preservar el valor de la moneda y actuar como prestamista de última instancia —los roles básicos que tradicional e internacionalmente se le asignan a un banco central— son dos aspectos estrechamente vinculados.

Por un lado un rol ilimitado de prestamista de última instancia constituye una fuente potencial de emisión que, aun considerando las restricciones fijadas por la Ley de Convertibilidad, puede afectar la estabilidad del valor de la moneda.

Por un lado, si por cualquier motivo la economía se encuentra fuertemente dolarizada, de hecho se restringe la capacidad del Banco Central como prestamista de última instancia en moneda local.

Es por ello que en este proyecto de ley se ha puesto especial cuidado en compatibilizar el objetivo de preservar el valor de la moneda con el rol de prestamista de última instancia. Esto hará posible el normal desenvolvimiento de la actividad financiera brindando mayor protección a las entidades que operan en moneda

local. Sin lugar a dudas, la principal beneficiaria de esta protección es la banca privada nacional.

Las corridas bancarias, con depositantes queriendo hacer líquidos sus depósitos, no es un hecho infrecuente, que puede obedecer a distintas causas. Causas que pueden ser razonables en ciertos momentos, y producto del pánico en otros.

La historia económica nos enseña que las corridas, en ciertas oportunidades, se convierten en avalanchas y, eventualmente, se llegan a transformar en crisis de gran envergadura.

Es aquí donde se requiere el auxilio de un prestamista de última instancia: para impedir las avalanchas y evitar las consecuencias de las corridas bancarias.

Un banco central puede tratar de evitar las consecuencias de una avalancha, pero difícilmente puede evitar las causas de las mismas.

Muchas de estas corridas están fuera de la órbita de un banco central: obedecen a acontecimientos fortuitos y aleatorios o responden a actos súbitos de desconfianza. Dicho de otro modo: la función de "prestamista de última instancia" está restringida, de hecho, porque el Banco Central no tiene poderes adivinatorios extraordinarios como para prevenir cualquier tipo de corridas.

Por otra parte, existen procesos que podrían estar asociados a corridas y que no deberían ser evitados. Por ejemplo, la previsible caída de un banco por la mala asignación de sus créditos o por el comportamiento irresponsable, doloso o aun delictivo de sus directivos. En este sentido, la función de "prestamista de última instancia" no debe confundirse con el financiamiento de situaciones de insolvencia.

Dicho de otro modo: el objetivo del Banco Central como "prestamista de última instancia" debe ser preservar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y no necesariamente preservar entidades individuales. Como complemento natural de ello, resulta que la función de "prestamista de última instancia" debe tender a solucionar los eventuales problemas de iliquidez y no los problemas de insolvencia.

Sobre estos fundamentos vemos que en el proyecto de ley de cara orgánica está adecuadamente contemplado el rol de "prestamista de última instancia" para corridas contra la moneda local, vía la Ley de Convertibilidad, que requiere una permanente disponibilidad de reservas en el Banco Central, de modo tal que permanentemente se puedan atender los cambios que podrían aparecer por la súbita recomposición de la relación moneda local/moneda extranjera que los ciudadanos desean.

Las corridas que aparecen en el momento en que el público, aun manteniendo toda su confianza en la moneda local, súbita e inesperadamente, con motivos o sin ellos, desconfía de un amplio conjunto de entidades financieras, tienen una solución automática que en principio no requeriría la intervención del Banco Central.

Por una parte, mantener el dinero en la casa o en los colchones no es seguro ni rentable. Por otra parte, los bancos reciben depósitos, bajan las tasas de interés que ofrecen y los que pierden depósitos la aumentan. El resultado natural de este proceso es que, en pocos días el público restablece su confianza en el sistema fi-

nanciero, con lo cual el sistema en su conjunto recupera el nivel de depósitos anterior a la crisis.

Esto de ninguna manera quiere decir que los bancos en los que el público desconfiaba recuperan inmediatamente y sin costos su credibilidad: los efectos de la corrida pueden representar una importante redistribución de depósitos.

Tampoco significa esto que los bancos que sufrieron la corrida deban cerrar: en la medida en que conserven la confianza de sus colegas, simplemente habrán reemplazado depósitos por préstamos interbancarios.

Para atender este tipo de situaciones que se corresponden con problemas de iliquidez y no de solvencia, en el proyecto de ley se cuenta con varios instrumentos.

El Banco Central puede comprar divisas o títulos públicos a las entidades con o sin problemas, incluso mediante pases que les aseguren a las entidades la cotización futura de esos papeles.

El Banco Central, asimismo, puede proveer liquidez modificando sin restricciones los efectivos mínimos.

Los problemas de detección de entidades insolventes son comunes a todos los regímenes: aun en los países más desarrollados en la materia se producen caídas de entidades que no son previstas por los entes de supervisión.

Por este motivo se restringen las operaciones que puede realizar el Banco Central de la República Argentina, de modo tal de no violentar el objetivo primario de "preservar el valor de la moneda".

El hecho de permitir operaciones de crédito de corto plazo a fin de proveer una adecuada liquidez al sistema financiero está condicionado al requisito de que esta liquidez se concrete contra la entrega de activos, preserve el patrimonio del Banco y evita así las contingencias del financiamiento a entidades insolventes.

Cabe recordar en este punto las inmensas pérdidas que la institución debió soportar en el pasado, que en definitiva se tradujeron en beneficio de pequeños grupos y que tuvieron que ser soportadas por toda la comunidad.

Otro aspecto que cabe destacar en lo que se refiere a proveer liquidez al sistema financiero se vincula con la prohibición de los "descubiertos" de las entidades en el Banco Central de la República Argentina. Estos "descubiertos" no son más que una de las deformaciones en que se ha incurrido localmente y en la práctica han significado el otorgamiento de un crédito automático y sin garantías, que las mismas entidades se han concedido con recursos que no les corresponden.

Vale la pena recordar que la magnitud del problema en algún momento no muy lejano llegó a significar que la oferta de dinero no estaba bajo el control del Banco Central de la República Argentina. Es decir: la cantidad de dinero quedaba determinada por el comportamiento de las mismas entidades.

La Superintendencia

La preservación de la solvencia patrimonial del sistema financiero requiere de una significativa cantidad de recursos destinados a su permanente monitoreo y seguimiento. Es por ello que se le ha otorgado a la Superintendencia la forma institucional de organismo

desconcentrado, de modo tal que pueda desarrollar su actividad con mucha más rapidez y eficiencia operativa que la demostrada hasta el momento.

La nueva forma del organismo le permitirá actuar con mucha más diligencia de la que ha venido actuando, bajo la conducción de un funcionario que tiene importantes facultades ejecutivas. Lo que se ha pretendido es detectar los problemas con mayor anticipación y acortar los tiempos entre la detección del problema y el establecimiento de una solución al mismo.

Mucho se ha hablado de estas facultades del superintendente y de los peligros que podría significar una excesiva concentración de poder en sus manos. Sin embargo, pareciera no haberse notado que, en primer lugar, el superintendente depende directamente del presidente del Banco Central de la República Argentina. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de apelar sus medidas ante el presidente del Banco Central de la República Argentina.

En segundo lugar, las facultades del superintendente se vinculan con la autonomía ejecutiva de las funciones de superintendencia, no con la fijación de las políticas a seguir con el sistema financiero, que están dentro de la competencia del directorio del Banco Central de la República Argentina.

En tercer lugar, las atribuciones ejecutivas más importantes, como la suspensión transitoria de operaciones y la revocación de la autorización para funcionar, no pueden ser adoptadas por el mismo, sino que requieren la previa y expresa conformidad del presidente y del directorio del Banco Central de la República Argentina. Cabe recordar que actualmente el presidente tiene las mismas atribuciones, mediante el artículo II de la Carta Orgánica.

Por otra parte, cabe agregar que el establecimiento de relaciones técnicas de liquidez y solvencia para las entidades financieras son competencia del directorio del Banco Central de la República Argentina.

Finalmente, obsérvese que a la Superintendencia se le fijan los mismos requisitos de idoneidad y capacidad que a los miembros del directorio del Banco Central de la República Argentina, aunque se limita su mandato en el tiempo (6 años los miembros del directorio vs. 4 años el superintendente). Asimismo, se debe hacer notar que nada impide que sean miembros del directorio del Banco Central de la República Argentina quienes ejerzan las funciones de superintendente y/o vicesuperintendente.

Modificaciones a la Ley de Entidades Financieras y sus modificatorias

Sobre la prohibición del Banco Central de la República Argentina para garantizar depósitos

En primer lugar permítasenos recordar que la ley 12.656, que fuera la primera Ley de Bancos discutida y aprobada en el Congreso en 1935, no preveía ningún sistema de garantía de depósitos. Si preveía en cambio que, en caso de liquidación de un banco, los depósitos menores a \$m\$n 5.000 tenían derechos de privilegio sobre la generalidad de los bienes muebles,

Después de las otras categorías de créditos privilegiados enumerados por los códigos Civil y de Comercio y por la Ley de Quiebras.

Era sabia la ley en este sentido.

La reciente experiencia de la década pasada nos indica que este régimen de garantía de depósitos —que se encontraba plenamente justificado cuando los depósitos se encontraban nacionalizados— al mantenerse en una situación en que los depósitos no poseían un encaje del 100 % ha provocado enormes y significativas pérdidas (que debieron ser afrontadas por toda la comunidad) merced a los malos negocios de algunos individuos.

Se llegó así al absurdo de lo que algunos economistas denominaron sistema de socialización de pérdidas con apropiación privada de eventuales beneficios.

También indica la experiencia que no han sido eficientes las limitaciones prácticas impuestas para restringir el volumen de las pérdidas que la comunidad debía asumir por la garantía de los depósitos.

Toda la comunidad está tan al tanto como inermemente impotente ante hechos tales como la fabricación de depósitos de último momento, el fraccionamiento de depósitos para cubrir montos alcanzados por la garantía, etcétera.

Por otro lado, resulta sumamente aleccionadora la evolución del mercado financiero local: sin garantía oficial de ningún tipo. Además vemos en los últimos tiempos que progresivamente las mismas entidades locales han ido abandonando el régimen de garantía oficial.

La experiencia internacional, de los Estados Unidos de América, por ejemplo, ha ido evolucionando sobre las siguientes pautas:

— La garantía de los depósitos no la realiza la autoridad monetaria a fin de evitar contingencias imprevistas sobre la base monetaria.

— Sistemáticamente se han venido reduciendo los montos garantizados.

— Se asiste a un permanente aumento de las primas que se cobran sobre los depósitos asegurados.

— Se ha verificado un importante trasvasamiento de operaciones financieras desde el segmento de depósitos bancarios al segmento de obligaciones emitidas por las empresas. Dicho sea de paso, estas operaciones, como en definitiva son intermediadas por las mismas entidades financieras, a largo plazo no inciden sobre la rentabilidad de las mismas, aunque sí disminuyen los riesgos que ellas deben afrontar.

— Progresiva desaparición del sector público de los entes que garantizan los depósitos y una evolución hacia la privatización del sistema.

Todos estos elementos y el progresivo crecimiento del mercado de capitales nos hacen confiar plenamente en lo positivo de la medida de eliminar la garantía de los depósitos. No obstante ello, creemos que el Banco Central o el Ministerio de Economía debería alentar la formación de fondos privados de garantía de depósitos, que vayan agrupando a las distintas entidades.

Función del sistema de protección de los depósitos

El dictamen contempla que la anterior garantía estatal sobre los depósitos sea reemplazada por un "sistema de protección de los depósitos".

Con este instrumento se busca crear un sistema de protección a los depósitos, como alternativa (no onerosa para la sociedad y que no introduce distorsiones al sistema financiero) a la garantía estatal y modificar el actual sistema de liquidación de entidades financieras.

En referencia al primer punto se prevé que en caso de quiebra o liquidación de una entidad financiera, los depositantes tengan ciertos privilegios de carácter especial y generales.

Se establece que los depositantes tendrán prioridad absoluta de cobro, sobre los fondos depositados por la entidad, en concepto de encaje sobre efectivo mínimo. A su vez se crea entre los depositantes un orden de prelación como sigue: depósitos hasta \$ 1.000, los depósitos de más de 180 días de constitución y el resto de los depósitos. Además se le otorga, siguiendo este orden de prelación, privilegio general sobre el total de los activos de la entidad.

Se les otorga prioridad a los depósitos desde los \$ 1.000, ya que los pequeños depositantes no pueden invertir las sumas necesarias para obtener información acerca de la solvencia de los bancos. Por otra parte, en no pocos casos esos depósitos representan el esfuerzo de varios años de trabajo. En cuanto a los depósitos de antigüedad mayor a 180 días, este privilegio busca eliminar los factores que alientan el cortoplacismo en los depósitos. Difícilmente se producirían sin estas normas colocaciones a largo plazo, ya que es casi imposible saber qué pasará con una institución más allá de un cierto horizonte.

Con la ley que proponemos se da una adecuada protección a los depositantes (cabe destacar que actualmente es nula), sin cargar sobre la espalda de la comunidad los quebrantos que producía la falencia de alguna institución. Por otra parte no se producen las distorsiones que ocasiona el sistema de garantía estatal, ya que los depositantes deberán sopesar adecuadamente, a la hora de decidir el destino de sus depósitos, los rendimientos ofrecidos y la solidez de los bancos, ya que lo que se le otorga es un privilegio de cobro y no una garantía absoluta. Eso además de una correcta evaluación del riesgo, lleva a las entidades a tener sólidas situaciones patrimoniales, lo que dotará al conjunto del sistema de gran estabilidad.

Judicialización del proceso de liquidación de las entidades financieras

Con el nuevo régimen de liquidación propuesto lo que se busca es que el Banco Central de la República Argentina se limite a conceder o revocar la autorización de funcionar como entidad financiera. Luego de ese momento la justicia determinaría si esa empresa puede auto liquidarse o si es procedente la liquidación judicial, o la quiebra.

De acuerdo a la legislación actual (que es una excepción a la Ley de Quiebras no justificada bajo el perfil que le da la nueva Carta Orgánica al Banco

Central de la República Argentina) es el Banco Central de la República Argentina quien debe llevar adelante, en la mayoría de los casos el proceso de liquidación de las entidades financieras. El Banco Central de la República Argentina lleva adelante actos que son propios del Poder Judicial; es por ello que son judiciales. Es decir, luego que el Banco Central de la República Argentina realiza una liquidación, tanto los dueños de las ex entidades como los depositantes, pueden cuestionarlo por vía judicial, en muchos casos varios años después. Como consecuencia de ello, y demás costos de la liquidación, el Banco Central de la República Argentina perdió entre 1980 y 1989 más de 5.500 millones de dólares, sin contar con innumerables juicios aún pendientes y los que aún pueden iniciarse. Como se ve claramente, realizar la liquidación de entidades financieras (que implica llevar adelante el proceso administrativo, realizar los activos, afrontar demandas judiciales de los sectores intervinientes, cubrir fuertes quebrantos, etcétera) es incompatible con la función principal de los bancos centrales: preservar el valor de las monedas.

Por otra parte, por la legislación actual, la revocación de la autorización para funcionar por parte del Banco Central de la República Argentina, implica la extinción como empresa. En el proyecto que promovemos se contempla que si no existen problemas de insolvencia, las empresas pueden continuar con otro objeto social.

Derogación de la ley 22.529 de consolidación de entidades financieras

Las leyes que rigen las actividades económicas de la Nación y en particular la vida y funcionamiento de las sociedades comerciales han tomado principios generales y universales, para regular las situaciones de insolvencia de una empresa en estado de cesación de pagos, tal cual jurídicamente se denomina. Estos principios y conceptos universalmente aceptados están contenidos en la Ley de Concursos y Quiebras. En general el tratamiento de estas situaciones extraordinarias, mediante disposiciones especiales específicas, como la ley mencionada, parten del presupuesto irrefutable y de reconocimiento universal, de que una empresa en estado de falencia produce daños a personas e instituciones, al Estado y a la sociedad en su conjunto.

Y que ante tales circunstancias es necesario contar con los instrumentos jurídicos de excepción que paren el deterioro, e impidan la profundización de los daños, protegiendo bienes jurídicos y sociales sustanciales.

Por esas circunstancias se prevén los mecanismos excepcionales de la quiebra y el desapoderamiento de los administradores de la empresa en estado de insolvencia.

En nuestra legislación todas las empresas comerciales están sometidas a estos preceptos legales, con excepción de los bancos e instituciones financieras, que tienen un régimen especial en la legislación específica que las contempla.

Existen fundamentos para sostener la existencia de particularidades legales en el tratamiento de las entidades financieras en estado de insolvencia, ligadas fundamentalmente a la alta vulnerabilidad de las mismas

por las características de las operaciones económicas que quedan involucradas en la intermediación financiera y también por los efectos que en el mercado financiero produce la caída de un banco.

No obstante todo ello, la existencia de la ley 22.529 (denominada de consolidación de entidades financieras) constituye una exageración inadmisible, que lejos de servir para contemplar situaciones particulares atendibles como las descritas, ha devenido en mecanismos aberrantes que impidieron el buen funcionamiento del sistema financiero, transformándose en verdaderos privilegios para proteger a los malos administradores y a los administradores fraudulentos de las entidades financieras.

La ley es aplicable, conforme lo establece su artículo 2º (título I), a las entidades financieras que se encuentren probadamente en estado de insolvencia, a las que hayan violado las normas sobre reservas de efectivo, a las que hayan intervenido en reiterados incumplimientos a las disposiciones del Banco Central de la República Argentina en materia de solvencia y a las que producto de los malos negocios o irresponsabilidad de los administradores hayan perdido la responsabilidad patrimonial mínima para funcionar normalmente. En la legislación general aplicable a todas las empresas que operan en el país, cualquiera sea la importancia social, económica o cultural que se le asigne, la sola verificación de cualquiera de los aspectos tipificados anteriormente determinará la automática entrada en vigencia de la ley de excepción de concursos y quiebras, que prevé el desapoderamiento de los administradores y la participación judicial.

En el caso de las entidades financieras esto no es así por cuanto resulta de aplicación la ley 22.529 (denominada de consolidación de entidades financieras), cuya derogación lisa y llana proponemos.

De las disposiciones de dicha ley surge que un banco o entidad financiera en las situaciones descritas no debe liquidarse sin antes intentar el Banco Central de la República Argentina ordenar la aplicación de la ley en un conjunto de mecanismos y medidas de salvataje que en la práctica juegan como un derecho de la entidad en situación de insolvencia y que constituyen objetivamente un obstáculo para proceder a la liquidación de la entidad en tiempo oportuno, para impedir que continúe produciendo daños a los clientes y a la sociedad en su conjunto.

Por imperio de estas disposiciones una entidad financiera irremediablemente quebrada, seguirá operando en el mercado financiero con protección del Banco Central de la República Argentina, percibiendo a cualquier tasa depósitos del público con garantía estatal y otorgando créditos con cualquier responsabilidad patrimonial. En síntesis, aun estando probada la situación de insolvencia absoluta, aun teniéndose total y absoluta conciencia del daño que el funcionamiento de la entidad producía, nada se podía realizar por el absurdo privilegio que otorgan las disposiciones de la ley cuya derogación proponemos. Ha sido la suma de los efectos negativos del sistema estatal de depósitos y la vigencia de las disposiciones de ley 22.529, las que provocaron las monstruosas pérdidas del Banco

Central de la República Argentina en última instancia terminamos pagando el conjunto de los argentinos.

Secreto bancario

En la legislación actual el secreto bancario se extiende al conjunto de las operaciones que realizan las entidades, o sea tanto a los depósitos como a los créditos o a cualquier otra actividad de las permitidas por la Ley de Entidades Financieras, con las excepciones previstas en la propia ley y las modificaciones introducidas por la ley 23.371 del 27 de septiembre del 85, que virtualmente levanta la totalidad del secreto bancario para las solicitudes de la Dirección General Impositiva (DGI).

Este sistema de secreto bancario integral, aunque discutible, encuentra fundamentos prácticos cuando coexiste con alguno de los sistemas de garantía estatal de depósitos, situaciones que se verifican en la actualidad sólo en los aspectos legales, por cuanto aún no se han derogado las leyes que faculta la citada garantía estatal. No obstante ello, en la actualidad y por imperio de la política que al respecto lleva adelante el Banco Central de la República Argentina, la garantía estatal no existe prácticamente. En cuanto al aspecto legal se encuentra en tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados el proyecto de reforma que la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argen-

tina, que prohíbe expresamente el otorgamiento de garantía de cualquier tipo, lo que hace además inevitable de derogación la Ley de Entidades Financieras sobre garantías de depósitos.

En síntesis, el sistema financiero marcha hacia un esquema de inexistencia de garantía estatal de depósitos, instituto éste que se transforma en total y absolutamente incompatible con el sistema de secreto bancario genérico e irrestricto.

La inexistencia de garantía estatal de los depósitos obliga al depositante o ahorrista a contemplar, como aspecto fundamental y de gravitación casi absoluta en la decisión, el nivel de solvencia de la entidad financiera donde colocará sus depósitos. Ant esta realidad los bancos se ven ante la necesidad de difundir los elementos informativos demostrativos de su solvencia.

Ni una ni otra cosa podrán realizarse si se mantienen las disposiciones que coloca bajo secreto las operaciones activas, o sea los préstamos que los bancos otorgan, que constituye desde ya el efecto central de su solvencia.

Todo ello hace necesario circunscribir el secreto bancario a las operaciones pasivas, o sea los depósitos, disposición que encuentra plena justificación tanto por existencia de los valores que se protege con la misma, como en la necesidad de equiparar el sistema financiero argentino con la legislación vigente casi universalmente.

COMUNICADO Nº 15.892

Información sobre algunos rubros del balance
al 31 de diciembre de 1991

(En australes)

ACTIVO

Oro, divisas y otros activos externos

Oro	14.441.389.340.000	
Menos:		
Previsión por fineza de oro	144.413.893.400	14.296.975.446.600
Divisas		3.088.320.980.000
Convenios ALADI		
Cuatrimestre en curso	5.724.448.160.000	
Menos:		
Previsión para cuatrimestre en curso		
Convenios de pago ALADI-Cuatrimestre en curso	541.497.960.000	
Compensaciones pendientes	2.530.981.512.361	
Menos:		
Previsión para compensaciones pendientes	2.530.981.512.361	
Convenios de pago ALADI-Compensaciones pendientes	0	5.182.950.200.000
Acuerdo técnico interbancario con Brasil ..	0	
Colocaciones realizables en divisas		
Valores públicos a corto plazo del exterior ..	18.541.610.480.000	
Depósitos a plazo fijo en divisas	32.370.345.520.000	
Depósitos a la vista en divisas	2.232.645.760.000	57.144.601.760.000

Reservas con afectación específica	8.345.355.840.000		
Créditos en moneda extranjera al sistema financiero	2.436.826.580.000		
Menos:			
Previsión sobre créditos en moneda extranjera a entidades financieras	94.050.000.000	2.342.776.580.000	
Otros créditos en moneda extranjera			
Letras de exportación	5.962.310.000.000		
Menos:			
Previsión sobre letras de exportación	832.590.000.000		
Líneas de crédito diversas	17.375.948.460.000		
Menos:			
Previsión sobre líneas de crédito diversas ...	13.193.730.000.000		
Divisas a ingresar	0	9.311.938.460.000	99.712.919.266.600
Aportes a organismos internacionales, por cuenta del gobierno nacional			
Aportes al Fondo Monetario Internacional			
En derechos especiales de giro	3.658.039.621.562		
En moneda nacional	830.239.024.050	4.488.278.645.612	
Aportes a otros organismos internacionales			
En divisas	2.688.176.174.367		
En moneda nacional	1.901.158.248.031	4.589.334.422.398	
Ajuste de valuación de los aportes a organismos internacionales		350.574.725.832	9.458.187.793.842
Créditos al gobierno nacional			
Valores públicos - Bónex	11.058.558.094.130		
Valores públicos - Otros	8.213.060.397.511	19.271.618.491.641	
Bonos Consolidados del Tesoro Nacional		8.815.921.143.637	
Bono Unificador de Deudas Consolidadas		92.024	
Bono Nacional de Consolidación de Deudas ..		14.001.655	
Saldo deudores de la cuenta Dirección Nacional de Recaudación Previsional al 15-2-90 ..		309.015.917.107	
Adelantos transitorios al gobierno nacional, Artículo 29 de la C. O.			
Recursos devengados sobre créditos al gobierno nacional		19.213.563.618.604	55.707.607.134.801
Adelantos para la cuenta regulación monetaria ..		0	
Menos:			
Previsión sobre adelantos - Cuenta regulación monetaria		0	0
Financiamiento externo al gobierno nacional			71.643.065.461.781
Créditos al sistema financiero del país	6.380.623.136.487		
Deudas de entidades financieras			
Recursos devengados sobre deudas de entidades financieras	69.145.055.269.496		
Menos:			
Previsión sobre créditos al sistema financiero del país	45.319.764.472.426	30.205.913.933.557	
Deudas de entidades financieras intervenidas	42.383.241		
Recursos devengados sobre deudas de entidades financieras intervenidas	104.092.978.170		
Menos:			
Previsión para quebrantos por intervención de entidades financieras	0	104.135.361.411	
Deudas de entidades financieras en liquidación	2.624.394.398.683		
Recursos devengados sobre deudas de entidades financieras en liquidación	145.287.016.672.798		
Menos:			
Previsión para quebrantos por liquidación de entidades financieras	91.702.812.304.647		
Fondo de garantía de los depósitos ley 21.526	51.964.950.202.112	4.243.648.564.722	
Deudas de patrimonios desafectados, en liquidación	594.959.255		

Recursos devengados sobre deudas de patrimonios desafectados, en liquidación	800.123.049.367		
Menos:			
Previsión para quebrantos por patrimonios desafectados en liquidación	141.346.822.297	459.471.186.325	
Cuenta regularizadora del rubro Créditos al Sistema Financiero del País, decreto 435/90-2-5-90	1.351.431.058.693	33.661.737.987.322	
PASIVO			
Circulación monetaria			68.961.386.966.480
Depósitos			
Depósitos de entidades financieras			
En cuenta corriente	9.212.774.298.913		
En cuentas corrientes especiales	54.686.038.594		
En cuentas especiales - Capitales	380.662.168.691		
En cuentas especiales - Compensación devengada	74.702.895.528	9.722.825.401.726	
Dirección Nacional de Recaudación Previsional		171.502.110	
Depósitos por cuenta y orden del BCRA	50.467.393.664		
Compensación devengada s/deposito por cuenta y orden del BCRA	569.175.824.888	619.643.218.552	
Depósitos del gobierno nacional		8	
Depósitos diversos		48.730.200.834	10.391.370.323.230
Depósitos del gobierno nacional en moneda extranjera			7.220.242.077.951
Otras obligaciones con el gobierno nacional			
Fondos del Bono Nacional de Consolidación Económico-Financiera		53.502	
Obligaciones por certificados de participación		18.277.755.124	
Fondos del canje de valores - decreto 36/90 ..		12.798.165.867	
Programa de saneamiento financiero y desarrollo económico de las provincias		25.091.850.000	
Fondos provenientes de la privatización de Entel		1.686.310.000.000	
Resultado de operaciones de cambio		898.494.223.426	5.640.972.047.919
Partidas a imputar sujetas a modificaciones legales			14.103.163.355.820
Obligaciones con el sistema financiero del país			
Obligaciones con entidades financieras			40.383.516.276
Obligaciones en el país por títulos del BCRA			
Títulos del BCRA en australes		6.295.683	
Intereses y actualizaciones devengados sobre títulos del BCRA en australes		12.548.353.316	12.554.650.990
Obligaciones con entes públicos no financieros ..			15.582.430
Organismos internacionales			
Fondo Monetario Internacional - Cuenta Nº 1			
Por compra de divisas	26.479.694.604.194		
Depósito	830.028.409.763	27.309.723.013.957	
Fondo Monetario Internacional - Asignaciones de derechos de giro		4.541.925.987.537	
Banco Interamericano de Desarrollo		689.357.476.692	
Otras cuentas de organismos internacionales ..		23.601.925.797	
Ajuste de valuación de las cuentas de organismos internacionales		2.374.239.925.621	34.941.848.329.604
Deudas por convenios			
Otros convenios de pago			46.793.160.000
Otras obligaciones en moneda extranjera			73.964.345.388.860

Nota: Esta información contable incorpora las revaluaciones y ajustes a la fecha. Se emite a efectos de cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42 de la Carta Orgánica y las cifras se encuentran sujetas a modificaciones atento a que el Balance General y Cuenta de Resultados correspondientes al Ejercicio 1991 se hallan pendientes de aprobación.

COMUNICADO Nº 16.361

Información sobre algunos rubros del balance
al 31 de mayo de 1992
(En miles de \$)

A C T I V O

Oro, divisas y otros activos externos			
Oro	1.458.832		
Menos:			
Previsión por fineza de oro	14.588	1.444.244	
Divisas		591.948	
Convenios ALADI			
Cuatrimestre en curso	12.515		
Menos:			
Previsión para cuatrimestre en curso	0		
Convenios de pago ALADI - Cuatrimestre en curso	224.392		
Compensaciones pendientes	263.648		
Menos:			
Previsión para compensaciones pendientes	263.648		
Convenios de pago ALADI - Compensaciones pendientes	0		
Acuerdo técnico interbancario con Brasil	235.150	23.273	
Colocaciones realizables en divisas			
Valores públicos a corto plazo del exterior	3.521.518		
Depósitos a plazo fijo en divisas	3.399.972		
Depósitos a la vista en divisas	246.700	7.168.190	
Reservas con afectación específica		849.342	
Créditos en moneda extranjera al sistema financiero	238.214		
Menos:			
Previsión sobre créditos en moneda extranjera a entidades financieras	9.405	228.509	
Otros créditos en moneda extranjera			
Letras de exportación	687.889		
Menos:			
Previsión sobre letras de exportación	119.481		
Líneas de crédito diversas	1.682.227		
Menos:			
Previsión sobre líneas de crédito diversas	1.319.373		
Otros	13.505	944.767	11.253.573
Aportes a organismos internacionales, por cuenta del gobierno nacional			
Aportes al Fondo Monetario Internacional			
En derechos especiales de giro	365.804		
En moneda nacional	83.024	448.828	
Aportes a otros organismos internacionales			
En divisas	266.472		
En moneda nacional	188.592	455.064	
Ajuste de valuación de los aportes a organismos internacionales		19.557	923.449
Créditos al gobierno nacional			
Valores Públicos - Bonex	1.115.733		
Valores Públicos - Otros	124.998	1.240.731	
Bonos Consolidados del Tesoro Nacional		881.592	
Bono Unificador de Deudas Consolidadas		0	
Bono Nacional de Consolidación de Deudas		1	
Saldo deudores de la cuenta "Dirección Nacional de Recaudación Previsional al 15-2-90"		30.902	
Adelantos transitorios al gobierno nacional - Artículo 29 de la Carta Orgánica			
Recursos devengados sobre créditos al gobierno nacional		809.747	
Financiamiento externo al gobierno nacional		3.869.620	6.832.583
Créditos al sistema financiero del país			7.320.317
Deudas de entidades financieras	637.545		
Recursos devengados sobre deudas de entidades financieras	6.928.015		

Menos:			
Previsión sobre créditos al sistema financiero del país	4.635.478	2.930.082	
Deudas de entidades financieras intervenidas	2		
Recursos devengados sobre deudas de entidades financieras intervenidas	10.446		
Menos:			
Previsión para quebrantos por intervención de entidades financieras	0	10.448	
Deudas de entidades financieras en liquidación	304.306		
Recursos devengados sobre deudas de entidades financieras en liquidación	15.631.996		
Menos:			
Previsión para quebrantos por liquidación de entidades financieras	11.634.678		
Fondo de Garantía de los Depósitos Ley 21.526	4.301.424	200	
Deudas de patrimonios desafectados, en liquidación	84		
Recursos devengados sobre deudas de patrimonios desafectados, en liquidación	60.012		
Menos:			
Previsión para quebrantos por patrimonios desafectados, en liquidación	14.135	45.961	
Cuenta Regularizadora del Rubro Créditos al Sistema Financiero del País - Decreto 435/90-2/5/90		(158.003)	2.828.698
Tipo de cambio: \$ 0.9900.			

PASIVO

Circulación monetaria			6.906.672
Depósitos			
Depósitos de entidades financieras			
En cuenta corriente	2.437.729		
En cuentas corrientes especiales	17.583		
En cuentas especiales - Capitales	35.326		
En cuentas especiales - Compensación devengada	2.499	2.493.137	
Dirección Nacional de Recaudación Previsional		315.378	
Depósitos por cuenta y orden del BCRA	5.031		
Compensación devengada sobre depósitos por cuenta y orden del BCRA	52.953	57.984	
Depósitos del gobierno nacional		100.000	
Depósitos diversos		4.232	2.970.731
Depósitos del gobierno nacional en moneda extranjera			231.827
Depósitos del sistema único de previsión social			0
Otras obligaciones con el gobierno nacional			
Fondos del Bono Nacional de Consolidación Económico-Financiera ..		0	
Obligaciones por Certificados de Participación		1.828	
Fondos del canje de valores - Decreto Nº 36/90		1.320	
Programamiento de saneamiento financiero y desarrollo económico de las provincias		2.993	
Resultado de operaciones de cambio		189.849	195.990
Partidas a imputar sujetas a modificaciones legales			1.540.332
Obligaciones con el sistema financiero del país			
Obligaciones con entidades financieras		5.442	
Obligaciones con entidades financieras en liquidación		224	5.666
Obligaciones en el país por títulos del BCRA			
Títulos del BCRA en australes		0	
Intereses y actualizaciones devengados sobre títulos del BCRA en australes		1.218	1.218
Obligaciones con entes públicos no financieros			2
Organismos internacionales			
Fondo Monetario Internacional - Cuenta Nº 1	2.441.276		
Por compra de divisas	83.003	2.524.279	
Depósito		437.226	
Fondo Monetario Internacional - Asignaciones de derechos de giro ..		72.873	
Banco Interamericano de Desarrollo			

Otras cuentas de organismos internacionales	8.418	
Ajuste de valuación de las cuentas de organismos internacionales ...	130.030	3.172.823
Deudas por convenios		
Otros convenios de pago		11.621
Otras obligaciones en moneda extranjera		7.298.613

NOTA. Esta información contable incorpora las revaluaciones y ajustes a la fecha. Se emite a efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 42 de la Carta Orgánica y las cifras se encuentran sujetas a modificaciones atento a que el Balance General y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio 1991 se hallan pendientes de aprobación.

Tipo de cambio: \$ 0,9910.

ANEXO

Activos en Moneda Extranjera y Pasivos Monetarios del Banco Central de la República Argentina *
(En millones de dólares)

Conceptos	Valor nominal 30-4-92 (A)*	Valor mercado 30-4-92 (B)**	Valor nominal 31-5-92 (C)*	Valor mercado 31-5-92 (D)**	Varia- ción (E) = (D)-(B)
I. Resolución ley 23.928	8.550,1	8.550,1	9.353,8	9.351,6	801,5
1. Oro ¹	1.454,5	1.454,5	1.458,8	1.458,8	4,3
2. Billetes	15,0	15,0	135,3	135,3	120,3
3. Depósitos cuenta corriente	306,4	306,4	461,9	461,9	155,5
4. Colocación a la vista	244,9	244,9	249,2	249,2	4,3
5. Colocación a plazo ²	6.529,3	6.529,3	6.991,4	6.991,4	462,1
6. ALADI neto	0,0	0,0	23,7	23,7	23,7
7. Obligaciones del gobierno en cartera ³	0,0	0,0	35,5	31,3	31,3
Bonex 89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bonex 87	0,0	0,0	35,3	31,1	31,1
Bonex 84	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
Bonex 82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Reservas excedentes	1.514,8	1.350,9	1.319,5	1.095,7	-255,2
1. Oro ¹	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Billetes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Depósitos cuenta corriente	6,1	6,1	0,9	0,0	-6,1
4. Colocación a la vista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Colocación a plazo ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. ALADI neto	176,2	176,2	0,0	0,0	-176,2
7. Obligaciones del gobierno en cartera ³	1.342,5	1.126,2	1.269,5	1.054,8	-71,4
Bonex 89	1.015,4	862,1	1.007,9	824,6	-37,5
Bonex 87	293,9	262,9	261,6	230,2	-33,7
Bonex 84	0,2	0,2	0,0	0,0	-0,2
Bonex 82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Otros	50,0	42,4	50,0	40,9	-1,5
III. Otros activos	3.730,8	2.005,1	3.758,9	2.029,7	24,6
1. Letras de exportación	683,1	562,4	694,9	574,2	11,8
2. Líneas de crédito país-país	1.701,1	368,4	1.699,2	366,5	-1,9
3. Crédito monetario externo al sistema financiero ..	240,6	231,1	240,6	231,1	0,0
4. Activo ALADI pendiente compensación	262,8	0,0	266,3	0,0	0,0

	Valor nominal 30-4-92 (A) *	Valor mercado 30-4-92 (B) **	Valor nominal 31-5-92 (C) *	Valor mercado 31-5-92 (D) **	Varia- ción (E) = (D) - (B)
5. Resultados afectación especial	843,2	843,2	857,9	857,9	14,7
IV. Pasivos monetarios 4	8.550,1	8.550,1	9.351,6	9.351,6	801,5
1. Circulación monetaria	6.654,6	6.654,6	6.906,7	6.906,7	252,1
2. Depósitos cuenta corriente	1.988,0	1.988,0	2.437,7	2.437,7	449,7
3. Depósitos cuentas corrientes especiales	17,9	17,9	17,6	17,6	- 0,3
4. Contrapartida de operaciones de pase 5	- 110,4	- 110,4	- 10,4	- 10,4	100,0

* Corresponde a los valores nominales registrados antes de ajustes por desvalorizaciones dado que contablemente estos rubros se valúan a precio de mercado.

** Corresponde a los valores de mercado para los rubros incluidos en los puntos I y II, en tanto que para el rubro "Otros activos en moneda extranjera" corresponde (punto III) al valor nominal neto de provisiones contables.

1 El oro es cotizado al 99 % del valor vigente en el Mercado de Londres al cierre del día de la fecha, a la que se refiere la información. El alza operada en el mes es consecuencia del aumento producido en su cotización, la cual ascendía a dólares 336 al 30-4-92 en tanto que al 31-5-92 a dólares 337.

2 El valor de mercado de las colocaciones incluye los intereses devengados hasta el día de la fecha a la que se refiere la información.

3 El valor corresponde al valor nominal residual.

4 Valuada a \$ 1 por dólar.

5 En el rubro "Pasivos monetarios" se ha computado con signo negativo el importe correspondiente a títulos públicos y divisas mantenidos por el BCRA originados en operaciones de pase.

Cifras provisionales.

Variación de los activos en moneda extranjera y pasivos monetarios del Banco Central de la República Argentina

Las reservas ley 23.928 y los pasivos monetarios aumentaron en dólares 801,5 millones en tanto que las reservas internacionales (puntos I y II) lo hicieron en dólares 546,3 millones.

La disminución verificada en las reservas excedentes de dólares 255,2 millones se debió principalmente a los pagos de obligaciones externas.

Por su parte las compras netas de divisas ascendieron a dólares 900,1 millones.

MONTO ESTIMADO DE LAS DEUDAS DE ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION AL 31-3-92

OBSERVACIONES:

1. La tarea llevada a cabo poseyó como objetivo la cuantificación de las deudas de todas las entidades financieras cuya liquidación hubiese dispuesto el Banco Central de la República Argentina, desde 1960 al presente.

No obstante, no pudieron obtenerse elementos de juicio que permitiesen evaluar el pasivo de las siguientes ex entidades cuyo proceso liquidatorio concluyó o está próximo a finalizar:

Nº	DENOMINACION ENTIDADES	Deudas en pesos al 31-3-92
1.	Banco Comercial de Rosario S.A.	12- 4-61
2.	Banco Argentino del Mediterráneo	20- 3-63
3.	Banco Israelita del Río de la Plata S.A.	29- 8-63
4.	Banco Regional de Baradero S.A.	27-12-63.
5.	Caja de Crédito Villa Devoto Cooperativa Limitada	2- 2-70
6.	Crédito Defensa S.A. de Crédito para Consumo	19- 4-70

7. Cooperativa Mariano Acosta de Crédito, Vivienda y Construcción Limitada	20- 5-70
8. Caja de Crédito Viamonte Sociedad Cooperativa Limitada	17- 6-70
9. Casimiro Polledo Compañía Financiera S.A.	6- 5-70
10. Caja de Crédito Congreso Sociedad Cooperativa Limitada	7-10-70
11. La Textilera Cooperativa de Crédito Limitada	30- 6-71
12. Su Cuadra Amiga Compañía Financiera	19- 3-72
13. Banco Argentino del Centro S.A.	15- 3-72
14. Caja Popular de Belgrano Sociedad Cooperativa de Crédito Limitado	15- 5-72
15. Banco Comercial de Buenos Aires S.A.	9- 6-72
16. Rodríguez Flores Limitada Compañía Financiera S.A.	26- 7-72
17. Mario A. Luque Compañía Financiera S.A.	21- 3-73
18. Sofinar Compañía Financiera S.A.	28- 3-73
19. Caja de Crédito Bermúdez Sociedad Cooperativa Limitada	7- 5-76
20. Crédito Quilmes S.A. de Crédito para Consumo	3- 1-77
21. Crédito Alberdi S.A. de Crédito para Consumo	16-11-77
22. Caja de Crédito Diamante Cooperativa Limitada	17- 3-78
23. Crédito Popular S.A. de Crédito para Consumo	3- 5-78
24. Caja de Crédito Dos de Mayo Cooperativa Limitada	19-10-78
25. Caja de Crédito San Antonio de Padua Nor-Sur	26- 1-79
26. Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada General Belgrano	29- 1-79
27. Caja de Crédito Villa Mercedes Cooperativa Limitada	5- 2-79
28. Caja de Crédito Santos Lugares Sociedad Cooperativa Limitada ..	2- 5-79
29. Cooperativa Mercantil Unida Sociedad Cooperativa Limitada ...	4- 6-79
30. Caja de Crédito Tolosa Sociedad Cooperativa Limitada	3-10-79
31. FICSA S.A. Compañía Financiera	3-10-79
32. Caja Popular de Lules Cooperativa de Crédito Limitada	16-11-79

2. Se encuentran en proceso de cálculo los pasivos relativos a las siguientes ex entidades:

- Banco Avellaneda S.A.
- Banco Español del Río de la Plata S.A.
- Banco Comercial del Norte S.A.
- Banco BIRCO Cooperativo Limitado.
- Formofin Compañía Financiera S.A.
- Banco Buenos Aires Building Society S.A.

3. Metodología de ponderación no convencional, a consideración del directorio.

Nº	DENOMINACION ENTIDADES	Deudas en pesos al 31-3-82
1.	Abaco Compañía Financiera S.A.	8.595.109
2.	Adrogué Compañía Financiera S.A.	9.276.683
3.	Afisa Compañía Financiera S.A.	60.223.199
4.	Agrovid San Juan Caja de Crédito Cooperativa Limitada	1.022.858
5.	Almagro Caja de Crédito Cooperativa Limitada	2.045.532
6.	Amersur Compañía Financiera S.A.	9.808.886
7.	Añascó Caja de Crédito Cooperativa Limitada	32.151.728
8.	Argos S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda	9.880.527
9.	Austral Cooperativa de Crédito Limitada	5.680.405
10.	ADELU Cooperativa de Crédito Limitada	1.816.333
11.	Ballester Compañía Financiera S.A.	18.505.294
12.	Banco Aconcagua Cooperativo Limitado	4.390.321
13.	Banco Agrario, Comercial e Industrial S.A.	105.834.012
14.	Banco Alianza Rosario Cooperativo Limitado	13.763.450
15.	Banco Alvarez Cooperativo Limitado	15.303.065
16.	Banco Ararat Cooperativo Limitado	1.281.989
17.	Banco Argenfé S.A.	69.776.087
18.	Banco Argentaria S.A.	3.521.093
19.	Banco Bamecoop Cooperativo Limitado	50.617.435
20.	Banco Boreal Cooperativo Limitado	33.667.201

Nº	DE NOMINACION ENTIDADES	Deudas en pesos al 31-3-92
21.	Banco Bragado Cooperativo Limitado	19.016.044
22.	Banco Buenos Aires del Plata S. A.	232.964
23.	Banco Cabildo S. A.	126.621.668
24.	Banco Cayastá Cooperativo Limitado	102.278.835
25.	Banco Comercial de La Plata S. A.	25.932.338
26.	Banco Comercial Finanzas S. A.	856.788
27.	Banco Comercial, Hipotecario y Edificador de Córdoba	41.058.174
28.	Banco Cooperativo Agrario Argentino Limitado	146.156.086
29.	Banco Coopereste Cooperativo Limitado	22.121.496
30.	Banco de Berisso Cooperativo Limitado	11.159.880
31.	Banco de Chivilcoy S. A.	43.142.357
32.	Banco de Coronel Pringles S. A.	61.759.608
33.	Banco de Crédito Rural Argentino S. A.	423.344.641
34.	Banco de Hurlingham S. A.	35.366.835
35.	Banco de Intercambio Regional S. A.	1.314.686.495
36.	Banco de Italia y Río de la Plata S. A. (3)	188.491.019
37.	Banco de la Empresa Cooperativo Limitado	14.068.418
38.	Banco de los Andes S. A.	2.745.783.131
39.	Banco de Río Negro y Neuquén S. A.	176.492.834
40.	Banco de Ultramar S. A.	88.704.928
41.	Banco del Acuerdo S. A.	209.945.387
42.	Banco del Centro Cooperativo Limitado	15.147.485
43.	Banco del Luján S. A.	186.284.512
44.	Banco del Oeste S. A.	1.104.771.086
45.	Banco Fabril de La Plata Cooperativo Limitado	7.407.319
46.	Banco Hispano Corfin S. A.	284.758.006
47.	Banco Ilex Cooperativo Limitado	5.028.941
48.	Banco Juncal Cooperativo Limitado	93.880.880
49.	Banco Latinoamericano S. A.	96.522.117
50.	Banco Libertador Cooperativo Limitado	55.727.442
51.	Banco Los Pinos Cooperativo Limitado	34.162.321
52.	Banco Mesopotámico Cooperativo Limitado	21.014.356
53.	Banco Oberri Cooperativo Limitado	21.938.952
54.	Banco Oddone S. A.	965.992.430
55.	Banco Patagónico S. A.	178.925.679
56.	Banco Peña S. A.	35.363.512
57.	Banco Poblador de Rosario S. A.	107.697.031
58.	Banco Profesional Cooperativo Limitado	30.689.504
59.	Banco Regional de Córdoba Sociedad Cooperativa Limitada	22.688.461
60.	Banco Regional del Norte Argentino S. A.	46.756.019
61.	Banco Regional del Salado S. A.	132.621.080
62.	Banco San Miguel Cooperativo Limitado	301.184.063
63.	Banco Sidesa S. A.	561.383.867
64.	Banco Sindical S. A.	58.241.713
65.	Banco Sirlihan Cooperativo Limitado	5.922.000
66.	Banco Udecrop Cooperativo Limitado	45.931.410
67.	Banco Unicoi Cooperativo Limitado	80.971.838
68.	Banco Unido de Inversión S. A.	29.528.863
69.	Banco Vicente López Cooperativo Limitado	16.305.790
70.	Banco Zonamor Cooperativo Limitado	10.971.982
71.	Buro de Crédito Cooperativa Limitada	448.708
72.	Caja de Crédito Aguirre Sociedad Cooperativa Limitada	1.336.511
73.	Caja de Crédito Alvear Cooperativa Limitada	32.907.384
74.	Caja de Crédito Bernasconi Cooperativa Limitada	19.207.759
75.	Caja de Crédito Charcas Cooperativa Limitada	7.940.347
76.	Caja de Crédito Cooperativa Correos Limitada	7.453.685
77.	Caja de Crédito Cooperativa Limitada América Latina	12.925.898
78.	Caja de Crédito Cooperativa Limitada "Argenta"	2.443.460
79.	Caja de Crédito Cooperativa Mire Limitada	243.295

Nº	DENOMINACION ENTIDADES	Deudas en pesos al 31-3-82
80.	Caja de Crédito Cooperativa 12 de Octubre Limitada	315.349
81.	Caja de Crédito Corrientes Cooperativa Limitada	24.935.364
82.	Caja de Crédito Escalada S. A.	16.473.107
83.	Caja de Crédito Flores Sud Sociedad Cooperativa Limitada	12.552.770
84.	Caja de Crédito General Roca Cooperativo Limitada	2.458.126
85.	Caja de Crédito Independencia Cooperativa Limitada	20.501.848
86.	Caja de Crédito Martínez Sociedad Cooperativa Limitada	56.936.710
87.	Caja de Crédito Paz Cooperativa Limitada	2.698.924
88.	Caja de Crédito Primavera Cooperativa Limitada	2.721.707
89.	Caja de Crédito San Fernando Cooperativa Limitada	1.593.706
90.	Caja de Crédito San Lorenzo Sociedad Cooperativa Limitada	3.635.495
91.	Caja de Crédito Sarandí, Domingo, Wilde Cooperativa Limitada	4.290.118
92.	Caja de Crédito Uruguay Cooperativa Limitada	64.305.366
93.	Caja de Crédito Versailles Cooperativa Limitada	53.711.317
94.	Caja de Crédito Díaz Vélez Cooperativa Limitada	81.879.882
95.	Caja de Crédito Cooperativa Prácticos del Río de la Plata Limitada ..	8.817.226
96.	Caja de Crédito de los Centros Comerciales Cooperativa Limitada ..	4.302.292
97.	Caja de Crédito de Profesionales de la Ingeniería, Arquitectura y Agri- mensura Limitada	5.787.039
98.	Caja de Crédito Barón Hirsch de Buenos Aires Cooperativa Limitada ..	1.625.147
99.	Caja Mutual Yatay 240 Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada	32.895.424
100.	Caja Murillo Cooperativa de Crédito Limitada	37.625.406
101.	Carfina Compañía Financiera S. A.	4.531.037
102.	Carlés Compañía Financiera S. A.	5.659.053
103.	Carlés de Ahorro y Préstamo para la Vivienda S. A.	1.721.166
104.	Cenfi Caja de Crédito Cooperativa Limitada	4.559.189
105.	Centro Financiero S. A. Compañía Financiera	127.953.877
106.	Cofi-Vent Compañía Financiera S. A.	0
107.	Coimpro Compañía Financiera	18.643.616
108.	Compañía Financiera Activa S. A.	708.653
109.	Compañía Financiera Boulogne S. A.	6.648.420
110.	Compañía Financiera Castelar S. A.	10.785.881
111.	Compañía Financiera Central para la América del Sud	2.868.626
112.	Compañía Financiera Congreso S. A.	2.317.684
113.	Compañía Financiera Corfar S. A.	6.468.914
114.	Compañía Financiera Cuyana S.A.	3.090.395
115.	Compañía Financiera de Concesionarios Ford-Finamfor	5.036.483
116.	Compañía Financiera del Estuario S. A.	19.068.188
117.	Compañía Financiera del Jardín S. A.	3.913.719
118.	Compañía Financiera del Plata S. A.	3.823.134
119.	Compañía Financiera Flores S. A.	150.997.498
120.	Compañía Financiera Maxfin S. A.	42.795.972
121.	Compañía Financiera Munro S. A.	60.015.880
122.	Compañía Financiera Plafin S. A.	81.163.590
123.	Compañía Financiera Prodiven S. A.	17.788.593
124.	Compañía Financiera Ramos Mejía S. A.	48.425.140
125.	Compañía Financiera Saladillo S. A.	28.201.587
126.	Compañía Financiera Sic S. A.	67.201.239
127.	Compañía Financiera Tesel S. A.	8.373.470
128.	Compañía Financiera Universal S. A.	10.975.259
129.	Condecor Compañía Financiera S. A.	6.960.276
130.	Confiar Compañía Financiera S. A.	715.784
131.	Cooperativa de Crédito Guaymallén Limitada	777.389
132.	Cooperativa de Crédito Limitada Renacimiento	1.099.005
133.	Cooperativa Sáenz Peña de Crédito Limitada	228.936.564
134.	Cooperativa de Crédito Zona Este de La Plata Limitada	2.510.724
135.	Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ruta del Sol Limitada ..	68.395.965
136.	Cooperativa del Foro de Crédito, Vivienda y Consumo Limitada ..	4.747.356

Nº	DENOMINACION ENTIDADES	Deudas en pesos al 31-3-92
137.	Cooperativa de Consumo y Crédito Liga de Padres de Familia de Avenida La Plata	2.858.000
138.	Corporación Financiera Santiaguense S. A. Compañía Financiera	34.769.660
139.	Creal S. A. Compañía Financiera	11.165.669
140.	Crear Crédito Argentino S. A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda ..	5.638.185
141.	Crediball S. A. Compañía Financiera	2.640.673
142.	Credibono S. A. Compañía Financiera	184.879.231
143.	Credicab Caja de Crédito Cooperativa Limitada	8.611.158
144.	Custodia Compañía Financiera S. A.	40.464.354
145.	Dar S. A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda u Otros Inmuebles ..	143.726.835
146.	Devoreal S. A. Compañía Financiera	15.661.745
147.	D'Amfin Compañía Financiera S. A.	11.426.217
148.	D'Amore y Compañía S. A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda	1.960.004
149.	El Trust Viviendas S. A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda	86.045.377
150.	Fideicom Compañía Financiera S. A.	14.173.483
151.	Finacord Compañía Financiera S. A.	4.847.307
152.	Finber Compañía Financiera S. A.	16.467.507
153.	Finrud Compañía Financiera S. A.	1.035.883
154.	Finur Compañía Financiera S. A.	71.938.948
155.	Foinco Compañía Financiera S. A.	87.964.685
156.	Fortaleza Caja de Crédito Sociedad Cooperativa Limitada	24.352.023
157.	Giménez Zapiola Viviendas S. A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda	25.516.978
158.	Ginversa Compañía Financiera S. A.	62.476.743
159.	Haedo S. A. Compañía Financiera S. A.	12.237.398
160.	Hercó Cooperativa de Crédito Limitada	2.287.331
161.	Inficor Sociedad de Ahorro y Préstamo para la Vivienda	45.966.402
162.	Instituto Financiero Obrero Cooperativa de Crédito Limitada	8.694.767
163.	Interplat S. A. Compañía Financiera	4.360.156
164.	Inverco S. A. Compañía Financiera	1.170.185
165.	Inverfin S. A. Compañía Financiera	4.740.371
166.	Iruzaingó Compañía Financiera S. A.	6.661.761
167.	La Agrícola Compañía Financiera S. A.	215.022.336
168.	La Argentina Caja de Crédito Cooperativa Limitada	1.138.032
169.	La Inversora Bahiense S. A. Compañía Financiera	3.326.169
170.	La Liberal Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada	21.841.501
171.	Labal S. A. Compañía Financiera	55.235.674
172.	Manquillán S. A. Compañía Financiera	18.440.776
173.	Nuevo Banco Santurce S. A.	304.494.184
174.	Occidente Compañía Financiera S. A.	79.337.679
175.	Orfina S. A. Compañía Financiera	9.884.200
176.	Pam S. A. Compañía Financiera	44.514.377
177.	Permanente S. A. Compañía Financiera	12.342.402
178.	Plaza Compañía Financiera S. A.	1.688.608
179.	Previmar S. A. Argentina Sociedad de Ahorro y Préstamo para la Vivienda	12.875.256
180.	Promosur S. A. Compañía Financiera	165.002.243
181.	Río Dulce S. A. Compañía Financiera	3.883.851
182.	Río Paraná Compañía Financiera S. A.	227.040.669
183.	San Fernando Compañía Financiera S. A.	11.985.280
184.	San Martín Compañía Financiera S. A.	4.335.608
185.	Simbolo Compañía Financiera S. A.	1.044.883
186.	Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada Carruchaga	810.761
187.	Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada Río de la Plata	27.302.540
188.	Sociedad Cooperativa de Crédito Mariano Moreno Limitada	53.313
189.	Taquini S. A. Compañía Financiera	72.991.069
190.	Tranfina S. A. Sociedad de Ahorro y Préstamo para la Vivienda	15.966.409
191.	Unífico Compañía Financiera S. A.	0
192.	Unión Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada	8.503.765

193. Veracruz Compañía Financiera S. A.	32.041.559
194. Viviendas Cenit Argentina S. A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda	4.128.727
195. Neofin S. A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda	8.040.723
196. Gimeza Compañía Financiera S. A.	139.162
197. Banco Marplatense Cooperativo Limitado	1.165.163
198. Banco Alas Cooperativo Limitado	289.734.361
199. Banco del Interior y Buenos Aires S. A.	180.751.468
TOTAL	15.375.857.485

2

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BAGLINI

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y modificación de la Ley de Entidades Financieras

En línea con nuestras ideas, queremos dejar aclarado que de aprobarse el proyecto de la mayoría, estaremos limitando fuertemente parte de las atribuciones del Banco Central de la República Argentina y a la vez confiriéndole poderes absolutos a sus autoridades.

Y esta contradicción es posible gracias a la curiosa alquimia que significa el proyecto en cuestión.

En efecto, se está inhibiendo la posibilidad de aplicar políticas monetarias al limitar las posibilidades de financiamiento al sector privado no financiero y financiero y al sector público, olvidándose que el origen de los bancos centrales se relaciona con el papel de banco emisor y de banco del gobierno.

Y es como consecuencia de estas dos funciones (emisor monopolístico de dinero y banco del gobierno), que los "bancos centrales" se convirtieron en bancos de bancos, esto es en prestamistas de última instancia y oferentes de servicios, básicamente vinculados al sistema de pagos, a la banca comercial.

Con el paso del tiempo y el abandono del patrón oro, el papel del Banco Central se extendió al manejo de la política monetaria como instrumento de política económica y en especial luego de la crisis de 1930, a la supervisión de las entidades financieras. En ese contexto la estabilidad y el buen funcionamiento de los mercados financieros pasaron a ser una responsabilidad primaria de los bancos centrales.

Por otra parte, no debemos olvidar que la ley sobre Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y la Ley de Entidades Financieras, conforman una unidad, donde la primera determina el accionar del Banco Central y la segunda de las entidades que forman el sistema.

El pasado reciente nos habla claramente que la reforma financiera de 1977, con sus leyes de entidades financieras y creación de la Cuenta Regulación Monetaria, provocaron de hecho la anulación de las facultades del Banco Central de la República Argentina sin necesidad de modificar su Carta Orgánica, de manera

tal que según estimaciones de las actuales autoridades del "Central" se produjo una pérdida de 67.476 millones de dólares.

De ello, unos 15.000 millones de dólares se debieron a las pérdidas producidas por la intervención y/o liquidación de entidades.

Lo que estamos diciendo es que antes de la reforma financiera de 1977, las pérdidas ocasionadas al Banco Central de la República Argentina por intervención y liquidación de entidades eran poco significativas, y que el problema por ende no debe verse solamente con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, sino también con la ley que rige a las entidades del sistema.

Por eso es que propusimos infructuosamente que se trate el proyecto enviado por el Senado, juntamente con la modificación de la ley 21.526/77 (de entidades financieras). Es más, en octubre de 1986, logramos hacer aprobar en Diputados un proyecto de ley de entidades financieras, que contemplaba a las entidades como empresas de servicios públicos, y por ende regidas, controladas y supervisadas por el Banco Central de la República Argentina y que fuera remitido con fecha 30 de octubre de 1986 al Senado de la Nación, y éste nunca se dignó tratarlo.

Ahora, resulta que el senador Juan Carlos Romero, que había presentado un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en 1990 que, como aclara en sus fundamentos, se basaba en las ideas del doctor Julio Olivera, presidente de la Comisión de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y miembro de la Academia de Ciencias Económicas, que tiene como fin el de propender el desarrollo económico, y que incluso prevía una división del Banco Central de la República Argentina por regiones para garantizar la liquidez y el crédito por zona, a fines de 1991, el senador Romero cambia radicalmente su proyecto para dar lugar al que nos remiten que es básicamente el mismo que sustentara en 1990 en ADEBA el doctor Roque Fernández.

Por eso es que nos preguntamos. ¿Cuál es el apuro en modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, si no se modifica la ley de enti-

¿Adónde financieras? Nada se gana realizando emiendas sobre el régimen financiero si no comprendemos que la reforma debe ser completa y con profundidad.

Si coincidimos también que otro de los problemas es el financiamiento del déficit fiscal por parte del Banco Central de la República Argentina y éste estará controlado en la actualidad (sin contar los financiamientos "bajo la mesa" del Banco de la Nación Argentina). Y que las propuestas del proyecto de la mayoría pasan por prohibir la financiación directa, contemplando solamente la compra de títulos públicos negociables emitidos por la Tesorería General de la Nación, a precio de mercado, y que la tenencia de títulos no se puede incrementar más del 10 % por año; que tampoco puede garantizar o endosar letras u otras obligaciones de los gobiernos nacional, provinciales y municipales. Con lo que creemos, ciertamente que se está cambiando el orden de los factores, porque primero debería garantizarse con un presupuesto nacional equilibrado, que no se incurre en déficit en las cuentas estatales, y luego limitar su financiación, y no al revés.

Con esto no desconocemos la utilización que se hizo del Banco Central de la República Argentina para financiar el déficit del sector público, lo que decimos es que tanto el Congreso de la Nación como el orden de los factores debe ser que el presupuesto nacional sea el que cumpla esa función, y no poner severos límites a su financiación a caballo de una situación coyuntural.

En la economía capitalista (que es la que vivimos), el dinero es el nexo que favorece el intercambio de bienes y servicios. Por lo tanto el dinero, que es un bien (un objeto material que satisface la necesidad de ser expresión de valor de los demás bienes y servicios), cumple el rol de planificador.

La relación monetaria es lo que sustituye en el sistema en que vivimos la planificación central. Por lo tanto, la existencia del dinero es el elemento central de cualquier economía capitalista, por el hecho que desempeña la función de informar a los diferentes productores de la viabilidad económica de su actividad anterior.

Crear que podemos dejar librado al ingreso de divisas del exterior la creación de dinero implica no comprender, por un lado, el poder que se le confiere a los que ingresan las mismas, y por el otro lado, dejar al mercado la asignación de recursos produce el fenómeno que estamos viviendo, en que los empresarios invierten pero no lo hacen en la producción de bienes transables (aquellos cuya producción puede ser exportada o sirva para sustituir importaciones); que es la forma en que debemos integrarnos al mundo, hecho que deja serias dudas con respecto al futuro del tipo de cambio.

Lo que estamos afirmando es que el cepo cambiario y el Plan de Convertibilidad, que esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina propuesta por el oficialismo corroboran, sirven como dique de contención en el mercado monetario siempre y cuando la demanda de dinero de la población continúe incrementándose en similar proporción en que

aumenta la base monetaria. Pero en el mercado real se están produciendo distorsiones que se demuestran en que no crecen las inversiones en la producción de bienes transables, con lo que, obviamente, no podemos pensar que la financiación externa de nuestro nivel de actividad será eterna.

Con este proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina se afirma el sentido que expresamos, dejando un margen muy reducido de acción a la política económica.

En efecto, a la imposibilidad de modificar la paridad cambiaria, a la necesidad de obtener permanentemente superávit en las cuentas fiscales para cumplir con las obligaciones externas, se le suma la prohibición de emitir redescuentos corroborables, controlables y recuperables por el Banco Central de la República Argentina. Y entendamos que en la economía moderna es la banca central la que genera el crédito, sabiendo que posibilita la producción y comercialización de su tomador, quien en determinado periodo está en condiciones de reintegrar dicho préstamo (con los ajustes e intereses correspondientes), lo que a su vez permitió aumentar la producción y relacionar dinámicamente la cantidad de medios de pagos con los bienes y servicios transados.

Esto es, por eliminar la posibilidad de que el Banco Central de la República Argentina conceda redescuentos en general, se elimina también con ello la posibilidad de que el Banco Central de la República Argentina otorgue redescuentos a la producción, a la promoción de exportaciones y a las economías regionales. Y lo más seguro es que estos sectores no obtengan los créditos imprescindibles para financiar su actividad.

Con este fundado temor es que cuestionamos el argumento de la "neutralidad de la política monetaria" que se pretende alcanzar con la reforma propuesta por el oficialismo. Para nosotros no es más que una muestra del "fundamentalismo liberal" que encubre el verdadero proceso por el cual el Estado nacional resigna su capacidad para emitir moneda autónoma en favor de los que ingresan capitales y de la banca extranjera.

Si a ello le sumamos, como lo dije en una breve intervención que tuve en el debate del pasado 8 de julio, que se independiza la Superintendencia de Entidades Financieras y Casas de Cambio del Banco Central de la República Argentina, consagrándola como "organismo desconcentrado" con el fin de mejorar su eficiencia, cuando, y tal como lo presenté en el pedido de informes 1.424-D. del 18-6-92, en el mes de junio, cerraron sus puertas dos casas de cambio (Eros S.A. y Aviacam S.A.), incluso una de ellas recibió un día antes de pedir su propia quiebra una transferencia del mismo Banco Central de la República Argentina por u\$s 200.000 y como siempre el Banco Central de la República Argentina fue el último en enterarse.

Tampoco nada se gana transfiriéndole el problema a la Justicia sin prepararla a ésta antes, creando un fuero especial en lo económico-financiero como proponemos, y que por supuesto va a llevar su tiempo for-

mar a los profesionales y expertos en la materia, porque de otra manera "la lentitud de los tribunales", el desconocimiento específico del tema y la cantidad de casos que lleva la Justicia, hará que lo que parece una salida fácil y elegante se convierta en un camino "empedrado de buenas intenciones".

Para demostrar la irracionalidad del proyecto del oficialismo es que en la Comisión de Finanzas nuestro partido propuso que se tome como muestra alguna de las intervenciones y liquidaciones del Banco Central de la República Argentina con el fin de aprender de la práctica concreta, por lo que solicitamos la presencia de algunos de sus delegados interventores y liquidadores para explicar el fenómeno. No hicieron lugar al pedido y presentaron el proyecto que estamos discutiendo.

Debemos repetir el llamado de atención de nuestra bancada, de lo que significa en la práctica la eliminación de un sistema de garantías de los depósitos por importes determinados (por ejemplo \$ 20.000 por persona física), obligatorio, oneroso y administrado por el Estado, que con todos sus déficit —y en ello estamos seguros que primero deben aceptarse los mecanismos de control de las entidades— cumple el rol de igualar las condiciones de operabilidad de las entidades; función que no cumple ni puede cumplir el sistema optativo y administrado por las entidades, como propone el proyecto de la mayoría.

Paralelamente se le otorga al presidente del Banco Central de la República Argentina el máximo poder sobre las entidades financieras, ya que de él depende la elección del superintendente y vicesuperintendente de entidades financieras y casas de cambio del Banco Central de la República Argentina, y todos podemos darnos cuenta en nuestro país lo que ello implica. Esto es que los funcionarios de la superintendencia son nombrados por el presidente del Banco Central de la República Argentina, sin contemplar su nombramiento ni el control del Senado de la Nación, como se pide en el caso de los directores de la autoridad monetaria, cuando sus funciones son de tanta responsabilidad como la de los directores de la entidad.

Deberíamos preguntarnos además, si las atribuciones del presidente del Banco Central de la República Argentina serán utilizadas como el 29 de mayo pasado, en que por nota expresa del presidente se suspendió a 21 trabajadores y 11 representantes gremiales que participaron en una asamblea realizada el 15 de mayo de 1992 de acuerdo a los estatutos de la Asociación Bancaria y de la ley 23.551. O por las medidas tomadas por nota de la presidencia del Banco Central de la República Argentina de aumentar el sueldo a un 30 % del personal, desoyendo las necesidades del resto de empleados y funcionarios del banco.

En síntesis, para dar señales a los mercados externos, se desprotege a las entidades nacionales, con lo que desde el punto de vista del sistema financiero Uruguay es un ejemplo, donde solamente hay entidades financieras privadas extranjeras y oficiales. Y desde

el punto de vista de la economía, se ata de pies y manos al Banco Central de la República Argentina asimilándolo al caso de Chile, pero en ese país en 1982 hubo una fuerte corrida bancaria, y el Banco Central de Chile dejó la postura ideológica de lado y emitió en más un 20 % de su producto, sofocando la crisis que fue cancelada en ejercicios posteriores.

El radicalismo ha propuesto siempre que las entidades financieras son prestadoras de un servicio público que deben asignar social y económicamente al menor costo, parte de los excedentes de un sector de la sociedad, para propender al desarrollo y al crecimiento de la producción y del consumo.

Paralelamente no ha cesado en promover el avance de la legislación financiera, con instituciones modernas y flexibles pero con control.

Al proyecto antedicho de ley de entidades financieras debemos sumarle entre otros los proyectos de Cortese-Baglini sobre eliminación a las restricciones de endoso del cheque; proyecto de ley penal-financiero de los mismos autores; aportes en la discusión de la reforma de la Ley de Obligaciones negociables; el proyecto Yuncz-Baglini sobre régimen del cheque diferido (que se fusionó con el que cuenta con la media sanción del diputado Tomasella); nuestro aporte al régimen de unificación en la legislación civil y comercial (vetado por el Poder Ejecutivo nacional); proyecto Seguí-Baglini, hoy Ley de Fondos Comunes de Inversión, etcétera.

Es posible que el oficialismo utilizando su mayoría relativa haga aprobar este proyecto, pero en ese caso nos cabe advertir el craso error que se está cometiendo. Sólo podemos aventurar más y mayores problemas, con graves repercusiones sobre el sistema financiero y por ende sobre la economía del país.

La reforma financiera de 1977 y esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina tienen el mismo signo ideológico: el culto al mercado, la sobrevivencia de los más aptos, la concentración y centralización de capitales, los efectos neutros en el programa monetario, etcétera, y hoy estamos pagando las consecuencias de dicha reforma, que se presentara en su oportunidad como la panacea para nuestro mercado monetario.

Con esa misma visión, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina propuesta por el oficialismo cree encontrar solución para todos los males, y lo único que va a ser beneficiar a un sector muy concentrado de nuestra economía en desmedro de los pequeños y medianos productores y comerciantes de la Argentina, de las economías regionales, de su Estado nacional, de los estados provinciales y municipales y de las entidades que le prestan servicios a los mismos.

Como diría Churchill: "Un fanático es aquél que no puede cambiar de mentalidad, ni quiere cambiar de idea", guay cuando se le confiere el poder para realizar lo que piensa.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ESTEVEZ BOERO

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y modificación de la Ley de Entidades Financieras

Hemos presentado un despacho en minoría en el tema de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Creemos necesario mencionar que consideramos insuficiente el tratamiento de la reforma Orgánica del Banco Central si no va acompañada del tratamiento y reforma integral de la ley 21.526 (de entidades financieras), dado que las reformas parciales de esta última constituyen débiles sustitutos de la discusión en profundidad de nuestro sistema financiero.

De todas formas se ha optado por impulsar la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y algunos aspectos del sistema financiero, fundamentalmente aquellos que hacen a los procedimientos respecto de la liquidación de las entidades financieras.

I. Introducción

El debate alrededor de este tema no es mínimo ya que, como no podía ser de otra forma, incorpora evaluaciones respecto del comportamiento de la economía durante las últimas décadas y los distintos proyectos realizan sus planteos de acuerdo con esas evaluaciones.

Creemos necesario no obviar el hecho de que cada propuesta es la resultante de una visión particular de las causas y de las consecuencias de las crisis que han sacudido periódicamente a nuestra Nación.

A este debate pretendemos aportar, desde nuestra óptica, soluciones que creemos posibles, y que parten de la base de una defensa irrestricta del espacio económico de nuestro país. Valoramos los importantes y creadores aportes de los proyectos preparados en su oportunidad por el doctor Julio H. G. Olivera y por la Asociación Bancaria y recogemos parte de ellos.

En el debate notamos una tendencia a simplificar en demasía las causas de nuestra crisis. Pareciera que el problema económico argentino se resume en la inflación, y en su aceleración llamada hiperinflación, y que los orígenes de ésta se encontrarían únicamente en la creación de moneda sin respaldo por parte del Banco Central. De allí que una estructura burocrática como es el Banco Central, en cuanto a ente administrativo, sería la única responsable de la crisis económica. Entonces la solución surgiría sin esfuerzo: con sólo modificar las reglamentaciones en cuanto a atribuciones y funciones del Banco Central se superaría la crisis económica actual y se evitarían futuras.

Las cifras dadas a conocer en su momento por el Banco Central sobre sus pérdidas de 67.476 millones de dólares en una década impulsan dicho razonamiento, más cuando se dice que esa pérdida sólo en un 19 % fue destinada al déficit estatal de la Tesorería y que el resto fue aprovechado por grupos económicos privados.

Nuestro análisis de las cifras es aún más riguroso puesto que planteamos que también ese 19 % fue a

parar a poder de los grupos económicos privados a través de la utilización del gasto público, y que existen otras formas de exponer la información donde adquirieran su verdadera relevancia los pagos externos motivados por la deuda, y los mecanismos financieros especulativos tales como los créditos *on lending* y la capitalización de la deuda externa. Pero, de todas formas, las cifras publicadas constituyen un sinceramiento valioso.

Intentamos una visión más totalizadora, y por lo tanto más compleja, de la crisis y de la inflación. No desconocemos que la emisión monetaria sin freno y sin respaldo provoca deterioro en el valor y las funciones de la moneda generando enormes transferencias de recursos y el perjuicio de millones de argentinos que pagan con el deterioro de sus condiciones de vida.

Pero sabemos que en esa enorme transferencia de recursos está la instrumentación de las políticas aplicadas que llevaron a la emisión monetaria desenfrenada. Ninguna institución burocrática, y en especial una de la importancia del Banco Central, se maneja por sí sola. Existen, en todo momento, políticas que se aplican. Por ello es que pretender atribuir los actos del Banco Central a conductas emanadas de su carácter de ente administrativo, es intentar diluir la responsabilidad por las políticas diseñadas en quince años de hecatombe financiera nacional.

Juan B. Justo, a principios de este siglo, debemos recordar que su vida se apagó en 1928, no tenía una buena opinión de los gobiernos de la América latina de su época. Criticaba la corrupción de la moneda pero no la percibía como una fatalidad sin origen, sino como la acción deliberada de los gobiernos: "... Estados que están ellos mismos cargados de deudas. Y cuando las turbias finanzas de la política criolla no proporcionan otros recursos, lo que sucede casi siempre, se recurre sin empacho, para tener qué prestar, a las emisiones de papel moneda y depreciado, verdaderas confiscaciones de la propiedad de los grandes y pequeños tenedores de numerario. Como la acuñación de moneda feble, recurso fiscal de reyes semibárbaros, el envilecimiento del papel moneda por medio de emisiones excesivas deprime los salarios reales, y es por esto uno de los métodos favoritos de los gobiernos sudamericanos para aumentar las ganancias de los empresarios, aunque trastorna los principios de la misma economía burguesa. Complementa este sistema de gobierno, tendiente a la producción de ganancias y la acumulación de capital, una vasta red de impuestos indirectos que retiene en sus mallas gran parte de los salarios, al convertirse éstos en artículos de consumo para el trabajador. Gabelas sobre todo lo que necesita el pueblo para vivir costean en estos Estados el servicio de las deudas públicas, los favores y despilfarras de la oligarquía, los rumbosos presupuestos, y así quedan casi intactos por el fisco las ganancias de capital, la renta de la tierra, el enorme incremento del valor del suelo". (*Teoría y práctica de la historia*, 1ª edición, 1909. Texto según 2ª edición de 1915. Tomado de la 4ª edición,

Editorial La Vanguardia, Buenos Aires, Rivadavia 2150, 1938, página 225).

En el envilecimiento de la moneda veía una forma más de la explotación de los trabajadores y afirmaba la necesidad de vincular el salario a los artículos necesarios para la vida: "Lo que nos importa son los recursos de que dispone el trabajador, los medios de vida que consigue. Sería erróneo medirlos por la cantidad de moneda que recibe, por su salario nominal. En manos de gobiernos corrompidos e ineptos, los signos monetarios suelen envilecerse hasta representar un valor mucho menor.

"Un salario de 3 pesos papel moneda argentino en el año 1891, bajo la presidencia de Pellegrini, era muy inferior a uno de 2 pesos cuatro años antes. Ni la expresión de los salarios en oro puro daría la medida exacta de su poder adquisitivo, porque, como medida de los valores, el oro mismo no es constante; según los lugares y los tiempos, los precios en oro de los mismos artículos son muy diferentes. Para apreciar la verdadera recompensa del trabajo asalariado, el salario real, es preciso relacionar la expresión monetaria del salario o salario nominal, con los precios de los principales artículos y servicios que el trabajador necesita o desea" (página 239).

Al preguntarnos por qué un país puede hacer política económica, nos encontramos que se pueden manipular instrumentos de política económica en tanto ese país posea su propia moneda y ésta sea aceptada.

En primer lugar, la posibilidad de hacer política económica reside en una moneda propia no vinculada legalmente a un esquema de moneda internacional. En segundo lugar, ese esquema monetario no existe sólo porque así lo defina un gobierno soberano. Es necesario que la sociedad esté dispuesta a mantener sus tenencias líquidas en ese tipo de moneda.

Hoy se encuentra vigente la Ley de Convertibilidad pero creemos que la legislación que estamos tratando reviste características de fondo, más duraderas, y por lo tanto debe estar por encima de la transitoriedad de otras disposiciones y no limitar sus propias atribuciones.

II. El dictamen de mayoría

1. Objeto

Se plantea como función primaria y fundamental preservar el valor de la moneda, unilateralizando el objeto del Banco Central, limitándolo al asignarle una función pasiva que deja en manos del mercado la responsabilidad respecto del desarrollo económico y el aspecto social. Se han eliminado los párrafos que fijaban el objetivo de crear condiciones que permitieran mantener un desarrollo ordenado y creciente, con sentido social y con un alto grado de ocupación.

2. Dependencia

Se plantea que el Banco Central es una "entidad autárquica del Estado nacional" y que en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional; que no podrá asumir

obligaciones que condicionen, restrinjan o deleguen el ejercicio de sus facultades legales, salvo autorización expresa del Congreso de la Nación.

El presidente del Banco Central deberá presentar un informe anual al Congreso de la Nación sobre las operaciones del banco, e informar sobre las políticas monetarias, cambiarias y financieras a algunas comisiones del Congreso (Presupuesto y Hacienda, Economía y Finanzas).

Pensamos que el Banco Central se debe encontrar bajo la jurisdicción del Congreso de la Nación y que el proyecto no cumple con este requisito.

Son muy débiles los lazos que regulan su relación con el Congreso, el que no tiene mayores atribuciones sobre la actividad del banco y solamente recibe un informe anual de lo que éste está haciendo.

Si en el proyecto el Banco Central avanza en sus atribuciones lo hace en relación con el Poder Ejecutivo y en provecho propio, sin que tenga una intervención importante el Congreso de la Nación.

Aparece el Banco Central como un cuarto poder independiente del poder político. Pensamos que esto es inconveniente porque los organismos de la Nación deben estar sujetos de alguna manera a las disposiciones políticas, y debe serlo el Banco Central del Poder Legislativo. Ello no iría en mengua de las atribuciones para cumplir sus objetivos y no se generaría, como aparentemente sucederá, un poder autónomo.

Decimos como aparentemente sucederá porque ese pretendido poder autónomo se restringe cuando se analizan los mecanismos de remoción de los directores. El Poder Ejecutivo se reserva remover a esos miembros necesitando solamente la opinión de una comisión parlamentaria que, por sus características, será inevitablemente oficialista. Entonces la pretendida autonomía es letra muerta; únicamente será un instrumento más en manos del Poder Ejecutivo con la ficción de que el Parlamento tiene atribuciones sobre el Banco Central.

Esta situación puede hacer responsable ante la opinión pública al Congreso de la Nación cuando, en realidad, sus atribuciones en la materia serán prácticamente nulas.

3. Directorio

Se plantea un directorio compuesto por diez personas: un presidente, un vicepresidente y ocho directores.

Todos ellos durarán seis años, se renovarán por mitades y podrán ser designados nuevamente.

Son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y su remoción es atribución del Poder Ejecutivo, debiendo contar para ello con el previo consejo de una comisión integrada por el presidente de la Cámara de Senadores y los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Senado, y Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados.

4. Superintendencia de Entidades Financieras

El dictamen de mayoría crea la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias como órgano "desconcentrado" del Banco Central, dependiendo directamente del presidente de la entidad.

El superintendente y el vicesuperintendente son designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del presidente del banco, duran cuatro años en su cargo y es atribución del Poder Ejecutivo removerlos.

Las funciones y facultades del superintendente son muy amplias y llegan hasta disponer la suspensión de las actividades de las entidades financieras por un plazo de hasta 30 días.

En realidad el superintendente logra una cierta independencia del directorio, pero no del presidente del Banco.

Pensamos que la superintendencia debe quedar dentro del Banco Central dándole nivel gerencial y con reporte al directorio.

5. *Financiamiento al gobierno*

El dictamen de mayoría prohíbe al Banco Central conceder préstamos al gobierno nacional, a los bancos oficiales, provincias y municipalidades. Solamente se autoriza a financiar al gobierno nacional a través de la compra, a precios de mercado, de títulos negociables emitidos por la Tesorería de la Nación.

El crecimiento de las tenencias de títulos públicos por parte del Banco Central no podrá ser superior al 10 % por año calendario, o sea que la ampliación está limitada a un 10 % anual del total de los títulos que el Banco tiene en su poder, y hasta el límite del artículo 33.

Este último establece que las reservas de libre disponibilidad que el Banco Central debe mantener como respaldo de la base monetaria (artículo 4º de la Ley de Convertibilidad), y que se integran en oro, divisas y títulos, tendrán un tope máximo en cuanto a su integración en títulos públicos, y los sitúa en una tercera parte.

Esto significa que el Banco Central podrá tener en su poder títulos del gobierno nacional como respaldo de la base monetaria hasta una tercera parte de ésta. Lo que significa que el crédito total que el Banco puede extender al gobierno nacional mediante la compra de títulos públicos llega al 33 % del total de la base monetaria.

Existe una verdadera obsesión por limitar drásticamente el financiamiento del Banco Central al gobierno y esto parte de interpretar que la inflación ha sido consecuencia de ese financiamiento. Esto no es absolutamente cierto. La inflación reconoce causas estructurales y el financiamiento de los déficits exagerados del Estado deben ser analizados desde la óptica de un Estado con falencias democráticas que fue utilizado en forma arbitraria por los intereses económicos que lo asaltaron, lo dominaron y lo manejaron. La inflación en nuestro país es producto de la no democratización del poder económico, y de la utilización del Estado y del Banco Central para la generación de lucros privados en beneficio de grupos económicos concentrados.

Además, y en las últimas hiperinflaciones, se debe tener en cuenta la exagerada emisión monetaria que se utilizó para comprar las divisas que se utilizaron para pagar intereses de la deuda externa y satisfacer a los acreedores titulares de esos créditos, y la desatada emisión monetaria producto de las capitalizaciones de deuda externa y del mecanismo *on lending*.

Hoy se plantea una utópica solución técnica como si un semialejamiento del Banco Central del poder político fuese la garantía de la no emisión y de la no existencia de inflación.

La solución pasa por una mayor democratización de la economía y de la integración de un Banco Central democrático, regionalizado y participativo en ese esquema.

No es a través de una dictadura tecnocrática del Ministerio de Economía, y de un banco central tecnocrático y semiautónomo, como se podrán abordar los grandes problemas que existen en nuestra economía, latentes hoy pero presentes siempre. Las conducciones tecnocráticas y centralizadas terminan siendo usadas por los poderes económicos concentrados y son arrojadas a un costado cuando ya no les son de utilidad.

Creemos que el financiamiento al gobierno nacional debe ser decidido por el Congreso de la Nación a través de la Ley de Presupuesto, y de las ampliaciones que sean necesarias, pero siempre a través del debate y decisión propio del Poder Legislativo.

6. *Prestamista de última instancia del sistema bancario*

La función de prestamista de última instancia del sistema financiero permite accionar en función de la estabilidad del mismo ante situaciones de corridas bancarias, que pueden tener variados orígenes.

En el dictamen de mayoría se limita esta función drásticamente dado que sólo se autorizan redescuentos y adelantos por plazos mínimos e insuficientes (15 días).

Estas restricciones se fundamentan en el temor que la función de prestamista de última instancia pueda afectar la estabilidad del valor de la moneda, por las importantes sumas que pueda ser necesario prestar a las entidades con dificultades.

En realidad se está actuando en perjuicio de las instituciones bancarias más pequeñas, dado que son las que menos posibilidades tienen de soportar turbulencias en el sistema financiero.

Las grandes instituciones, y en especial las extranjeras, tienen otros recursos, por ejemplo su prestamista de última instancia son sus casas matrices del exterior.

Por ello es que no podemos estar de acuerdo con esta desaparición de una función del Banco Central que es imprescindible para la banca pequeña y mediana de nuestro país.

7. *Eliminación de la garantía de los depósitos*

El artículo 19, inciso k) del dictamen de mayoría elimina la garantía de los depósitos.

La utilización ilimitada y descontrolada de esta función del Banco Central ha sido una fuente de enriquecimiento privado y de la socialización de esas pérdidas, pero debemos recordar que la época en que se generó dicha maniobra fue la de la dictadura de la cual Martínez de Hoz era ministro de Economía.

Creemos que la desaparición de la garantía de los depósitos opera en perjuicio de las entidades pequeñas y medianas, y favorece a las grandes, especialmente a las extranjeras.

Nos pronunciamos por la existencia de un sistema obligatorio, oneroso —con cargo a las entidades— y con un tope significativo para los pequeños y medianos usuarios del sistema.

8. *Disolución y liquidación de entidades financieras*

Se plantea que si el banco revoca la autorización para funcionar a alguna entidad, a partir de allí interviene el juzgado comercial competente en el proceso de liquidación. Actualmente las liquidaciones las realiza el propio Banco Central.

En este punto, como en los demás que impulsan modificaciones parciales de la ley 21.526 (de entidades financieras), reiteramos que consideramos necesario el tratamiento integral de dicha ley. En cuanto al tema en sí pensamos que hubiera sido conveniente contar con una evaluación precisa de si el Poder Judicial se encuentra en condiciones operativas para absorber la carga de tareas que significa entender en las liquidaciones de las entidades financieras.

III. Nuestra propuesta

Creemos que es necesario efectuar modificaciones en las normas que regulan la existencia y el funcionamiento del Banco Central, siendo lo esencial de nuestra propuesta lo atinente a una democratización en la conducción que posibilite una correcta utilización de sus atribuciones y cumplimiento de sus responsabilidades, y no un debilitamiento de esta institución —o limitación de sus funciones— bajo la excusa de atribuirle la responsabilidad por la inflación.

Nos oponemos a una modificación del rol del Banco Central que se produciría en beneficio de las estructuras financieras más grandes y poderosas, especialmente las extranjeras, y en perjuicio de las más pequeñas. Creemos necesario actuar para evitar las situaciones y las conductas monopólicas en el sector financiero y para la protección de los derechos de los pequeños y medianos usuarios del sistema financiero.

Planteamos la democratización de nuestro Banco Central y la regulación antimonopólica del sector financiero. Esto requiere no sólo de las modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Central sino también de una nueva ley de entidades financieras.

Nuestra propuesta se fundamenta en la Constitución Nacional al establecer que el Banco Central se encuentra bajo jurisdicción del Congreso de la Nación.

El banco mantiene su característica de entidad autárquica pero se rescata las atribuciones del Congreso de la Nación determinadas en los incisos 5º, 6º y 10 del artículo 67 de la Constitución Nacional, que plantean:

"5º Establecer y reglamentar un banco nacional en la capital y sus sucursales en las provincias, con facultad de emitir billetes.

"6º Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.

"10. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras."

El objeto del banco es regular el crédito y los medios de pago creando condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente,

con sentido social, y el poder adquisitivo de la moneda. También debe emitir moneda de acuerdo con la política que determine el Congreso de la Nación y actuar concentrando y administrando las reservas de oro y divisas y otros activos externos del país.

La cantidad de moneda está determinada por las necesidades de la economía y los mecanismos de creación de moneda están fundamentados en el ingreso de oro y divisas, el financiamiento al Estado y el otorgamiento de préstamos —redescuentos— a los bancos.

En nuestro proyecto, en el artículo 3º, inciso b), los límites a la creación monetaria son dictados por el Congreso de la Nación. En el artículo 41 se determinan las responsabilidades del Congreso respecto del régimen y tipos de cambio. El financiamiento al sector público, a través de sus varias opciones, encuentra sus límites en las disposiciones del Congreso respecto de la compra de títulos públicos (artículo 23 inciso f), adelantos transitorios (artículo 35), valores públicos en cartera (artículos 35 y 58) y redescuentos (artículo 35).

Aunque no figura en el proyecto, por no ser tema de él, es necesario recordar que a través del presupuesto el Congreso tiene la facultad de establecer límites precisos al déficit y a la necesidad de financiamiento del Estado.

También es importante en este aspecto el rescatar para el Parlamento la atribución de entender en lo atinente a la deuda externa.

O sea que el banco mantiene sus características, pero en las decisiones tales como límites a la emisión monetaria, política cambiaria, relaciones con instituciones monetarias internacionales, aprobación del presupuesto anual del banco, límites al financiamiento del Estado, y deuda pública interna y externa, la política es dictada por el Congreso de la Nación.

Las relaciones del Banco con el Congreso se establecen a través de una comisión bicameral permanente integrada por un legislador representante permanente de cada una de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía y de Finanzas de ambas Cámaras.

El domicilio del Banco queda fijado en la capital de la República y se impone la obligación de contar con una sucursal en cada provincia, pudiendo utilizar para ello a otros bancos oficiales.

Se rescata la concepción de que el objeto del Banco se refiere a la regulación del crédito y los medios de pago a fin de crear condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, y el poder adquisitivo de la moneda.

Pensamos que es una posición equivocada el pretender unilateralizar el objeto al limitarlo exclusivamente al mantenimiento del valor de la moneda porque se le asigna al banco una función pasiva pretendiendo dejar en manos del equilibrio del mercado la responsabilidad respecto del desarrollo económico sostenido y el sentido social. Esa propuesta, en realidad, transfiere posibilidades de acción a los grandes grupos económicos y financieros que dominan los mercados en nuestro país. Destruir la capacidad regulatoria del Estado es beneficiar al privilegio económico.

Defendemos una moneda sana porque sabemos de los perjuicios que su envejecimiento provoca a los sectores

populares y a los trabajadores, pero no aceptamos que con el pretexto de cuidar del valor de la moneda se limite la capacidad regulatoria del Estado, se le niegue a la Nación la posibilidad de utilizar herramientas económicas, se transfiera la soberanía monetaria al exterior, se facilite el accionar de los grandes bancos extranjeros y se perjudique a los pequeños y medianos bancos de nuestro país.

Proponemos una democratización en cuanto al gobierno del Banco Central que contemple la federalización a través de los directorios regionales y de la participación de los sectores interesados.

Tal como lo expresa el doctor Julio Olivera en su trabajo *Descentralización geográfica de la banca central* (Buenos Aires, 1986), nuestra extensa área geográfica plantea el problema de cuál es el grado óptimo de centralización territorial.

El desafío es diseñar un esquema que permita la máxima centralización a los efectos de que las orientaciones básicas de la regulación monetaria sean uniformes y que, por otra parte, posibilite la máxima cercanía al usuario de la provisión de asistencia financiera y de los demás servicios de la banca. Incorporar regionalmente a personas representativas de los sectores que configuran la realidad local, que conozcan profundamente la realidad en sus aspectos económicos y sociales, permitiendo a través de los directorios regionales su participación en el diseño y ejecución de las medidas.

Esta descentralización fortalece el federalismo, ampliando y afianzando su base de sustentación económica.

Creemos, señor presidente, que día a día debe acrecentarse en todos la convicción de la necesidad urgente e insoslayable de proceder a reales procesos de descentralización que posibiliten la participación de los usuarios, del pueblo, en el contralor y decisión, en todo el universo de los servicios y de las formas de gobierno. Estamos convencidos los socialistas de que sólo a través de ese camino se logrará recuperar la eficacia y la transparencia en la función pública en todas las áreas, y al mismo tiempo ir superando el divorcio existente en-

tre lo social y las instituciones que se profundiza, peligrosamente, día a día. Continuar proyectando instituciones centralizadas y no participativas es posibilitar su fracaso en el presente y su inexistencia en el futuro.

Apuntalamos la estabilidad de las autoridades del Banco mediante su nombramiento con acuerdo del Honorable Senado de la Nación y la remoción a través del procedimiento de juicio político.

Creemos que las condiciones actuales de nuestro país aconsejan un período no muy extenso de los mandatos y por ello los fijamos en cuatro años, estableciendo la renovación por mitades cada dos años.

Planteamos la necesidad de que la política del Banco sea trazada y ejecutada con independencia de las entidades financieras privadas y por ello incorporamos la imposibilidad de desempeñarse como directores a aquellas personas que se hubiesen encontrado relacionadas con esas entidades durante los cuatro años inmediatos anteriores a su nombramiento, y se prohíbe dicha relación durante los cuatro años inmediatos posteriores al cese de sus funciones.

La retribución del presidente del Banco se fija en una suma similar a la dieta de un diputado nacional.

Se mantienen dentro del banco las funciones de superintendencia, jerarquizándolas a nivel gerencial y con reporte directo al directorio nacional del Banco.

Se mantienen las atribuciones del Banco respecto de la intervención y liquidación de entidades financieras.

Se incorporan a la supervisión del Banco todas las entidades de ahorro y préstamos que recauden fondos del público.

Es necesario tener en consideración que el sistema financiero de un país constituye un delicado instrumento que puede ayudar a mantener y acrecentar la riqueza de ese país o, por el contrario, convertirse en un canal por el cual se escapa hacia el exterior el trabajo de sus habitantes. Debilitar el instrumental económico y de control financiero de un país significa desprotegerlo frente a la especulación internacional y a la violencia de las crisis económicas, renunciando a la construcción de una Nación independiente y solidaria que los socialistas creemos posible.

4

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GARCIA (P.A.)

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y modificación de la Ley de Entidades Financieras

El bloque del Partido Intransigente adhiere a esta iniciativa que valoramos como un medio de enfrentar la situación de emergencia provocada por la inconsulta decisión del Poder Ejecutivo de transferir compulsivamente los servicios ferroviarios a las provincias; lo que implica en casi la mayor parte de los casos su desaparición.

Decimos que la loable actitud del diputado Pepe, que evidentemente va a tener una sanción favorable de esta Cámara tal como lo han expresado los diputados preopinantes, sirve en la actual situación pero, lamentablemente, no alcanza a resolver la cuestión de

fondo que, a nuestro criterio, debiera contemplar la sanción de una ley específica. Coincido en ello con las expresiones del diputado Clérico, pero dicha ley debiera ser la consecuencia de un profundo debate que ubique en su justa medida hasta dónde esta Cámara va a permitir que el carácter economicista del plan de gobierno atente contra las necesidades de la población y, como en este caso, contra las ya castigadas economías provinciales.

Pasando al tema de fondo debo decir que a nuestro criterio el transporte ferroviario tiene un impacto más amplio y significativo, ya que constituye un indispensable instrumento de cualquier política de desarrollo, indispensable para la canalización del proceso productivo; desde esta óptica su déficit debe ser analizado en el contexto general de dichas políticas, pero el plan económico de este gobierno no contempla tal situación.

Al igual que en el caso de los hospitales y de la educación pública a cargo de la Nación, el camino elegido por el Poder Ejecutivo ha sido sacarse de encima el supuesto déficit de estos servicios con las consecuencias que en cada caso todos conocemos.

El mundo desarrollado, al que nos dicen hemos ingresado, otorga un papel preponderante al transporte ferroviario, prueba de ello son las experiencias puestas en marcha en países como los Estados Unidos, Francia, España, Portugal, Dinamarca y Suecia, o más cercanas como las hermanas México y Colombia, donde las acciones emprendidas reconocen un común denominador: la inversión estatal en infraestructura y en servicios para aumentar la presencia del tren en el transporte de pasajeros.

Ello no es casual, como no lo es el déficit económico que en la materia afecta a los servicios ferroviarios, son consecuencias de décadas de políticas de destrucción del Estado llevadas adelante por gestores del interés privado nacional o no.

Revertir esta situación es dar verdadera respuesta a ésta y a otras similares planteadas.

En definitiva, estamos convencidos que la solución real al grave problema del transporte ferroviario se inscribe, ineludiblemente, en la adopción de una política económica que apunte al desarrollo del sistema productivo, articulando al capital privado de inversión y a la capacidad instalada del Estado; lo que tenemos hasta aquí es sólo una despolija —para decirlo superficialmente— gestión de desgüace del patrimonio nacional o la lisa y llana eliminación de servicios no definidos por su capacidad de producir riqueza, sino por la de atender las necesidades de la gente.

5

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MOLINAS

Informe producido por la comisión investigadora creada por decreto 1.901/90: pérdidas del Banco Central de la República Argentina de 67.500 millones de dólares, durante el período 1980/1989

INDICE

1. Origen de la investigación, sus objetivos y metodología de trabajo.

2. Conclusiones obtenidas.

2.1. Limitaciones de cálculo e información.

2.2. Se puede suponer que las "pérdidas" han sido de mayor magnitud.

2.3. Transferencias al sector privado a través del déficit fiscal y la política financiera y cambiaria.

2.4. Las autoridades que se desempeñaron en el período.

3. Estudio de los principales rubros.

3.1. Regulación monetaria:

3.1.1. Breve reseña histórica de su funcionamiento.

3.1.2. Su incidencia en los balances de Banco Central de la República Argentina y las entidades financieras.

3.1.3. Efectos monetarios.

3.1.4. Metodología de cómputos.

3.1.5. Resumen y conclusiones.

3.2. Operaciones de cambio.

3.3. Liquidación de entidades.

3.4. Banco Hipotecario Nacional.

3.5. Banco Nacional de Desarrollo.

3.6. Financiamiento al gobierno.

3.7. Crédito a países:

3.7.1. Evolución histórica.

3.7.2. Estimación de la pérdida.

3.7.3. Características de la operatoria.

3.7.4. Distribución por países.

3.7.5. Responsables y beneficiarios.

3.7.6. Composición de las exportaciones.

4. Recomendaciones para continuar la investigación.

5. Anexos*.

A: Decreto 1.901/90, publicado en el Boletín Oficial el 25-9-90.

B: Notas enviadas requiriendo información al Banco Central de la República Argentina y otras dependencias públicas.

C: Informe de los comentarios sobre el proyecto oficial de reforma orgánica del Banco Central de la República Argentina presentada por el doctor Roque Fernández (director de dicha entidad) el 30-8-90 en el Simposio "La reforma estructural del Banco Central de la República Argentina" organizado por ADEBA.

D: Informe del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre la estructura de los estados contables del Banco Central.

E: Regulación monetaria:

1. Ley 21.526 y modificatorias.

2. Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

3. Ley 21.572.

4. Saldos adeudados al Banco Central de la República Argentina.

5. Principales deudores.

F: Liquidación en entidades (2 tomos):

1. Deudas de entidades financieras en liquidación.

2. Estado de situación cartera créditos.

3. Principales deudores.

4. Cancelaciones de deudas financieras en liquidación con el Banco Central de la República Argentina.

5. Endeudamiento principales clientes sector privado.

* Los anexos no forman parte de la presente publicación.

8. Convenios de administración de carteras.
9. Listado de directivos de entidades financieras en liquidación.
10. Entidades financieras en proceso de liquidación.
11. Destino de entidades intervenidas.
12. Entidades con sumarios en trámite.
13. Adelantos de fondos.
14. Ventas de bienes.
15. Inventario de inmuebles de entidades en liquidación.
16. Causas judiciales en curso vinculadas con liquidaciones de entidades.
17. Entidades intervenidas.

G. Operaciones de cambio:

1. Saldo deudores por rubro y por año.
2. Saldo por diferencias de contabilización.
3. Variaciones mensuales de saldos.
4. Normas legales sobre el régimen cambiario.
5. Comunicaciones del Banco Central de la República Argentina para operaciones cambiarias.
6. Tabla de coeficientes diarios para cancelación anticipada de seguros de cambio.

H. Financiamiento al gobierno:

1. Cuenta de ahorro-inversión y financiamiento del sector público.
2. Financiamiento del Banco Central de la República Argentina al gobierno nacional.
3. Crédito neto del Banco Central de la República Argentina al sector público.
4. Uso del crédito del gobierno nacional (en moneda nacional y en moneda extranjera).

I. Crédito a países (2 tomos):

1. Cuba.
2. Bolivia.
3. Perú.
4. Polonia.
5. Uruguay.
6. Nicaragua.
7. República Dominicana.
8. Senegal.
9. Honduras.
10. Chile.
11. Haití.
12. El Salvador.
13. Guatemala.
14. China.
15. Guinea Ecuatorial.
16. Costa Rica.
17. Guayana.
18. Guinea.
19. Centro Africa.
20. México.
21. Benín.
22. Checoslovaquia.
23. Zaire.
24. Panamá.

J. Información complementaria.

Directorios de las principales entidades bancarias:

- Banco Central de la República Argentina.
- Banco Hipotecario Nacional.
- Banco Nación.
- Banco Ciudad de Buenos Aires.
- Caja Nacional de Ahorro y Seguros.
- Banco Provincia de Buenos Aires.
- BANADE.
- Banco de Galicia.
- Banco Río.
- Banco Boston.
- Banco de Crédito Argentino.
- Banco Quilmes.
- Banco Lloyds.
- Banco Londres.
- Banco Francés.
- Banco Credicoop.
- City Bank.
- Banco Español.
- Banco de la Provincia de Córdoba.
- Banco de la Provincia de Santa Fe.
- Banco de la Provincia de Entre Ríos.

1. Origen de la investigación. Sus objetivos y metodología de trabajo.

Esta investigación tiene su origen en lo establecido por el decreto 1901/90 del Poder Ejecutivo nacional, cuya copia se adjunta en el anexo A, surgido a partir de lo expuesto por el señor director del Banco Central de la República Argentina, doctor Roque Fernández, en un documento en el que difunde un proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

Los objetivos propuestos en este informe son:

1º — Suministrar algunos métodos de análisis comparativos que permita una mejor evaluación de lo definido como "pérdidas del Banco Central de la República Argentina" con respecto al déficit fiscal, la emisión monetaria, la deuda externa, etcétera.

2º — Conciliar las cifras expuestas por el doctor Roque Fernández, en sus diversos rubros.

3º — Definir con la mayor precisión posible la composición de los resultados de cada una de las cuentas mencionadas.

4º — Explicitar su origen legal y su funcionamiento dentro del marco general de la política económica vigente en el periodo.

5º — Identificar el destino de los mencionados fondos y las entidades o empresas supuestamente beneficiadas.

6º — Individualizar los casos remitidos a la justicia y conocer su estado de evolución.

Para poder solventar con el mayor rigor posible estos conceptos se ha requerido información al Banco Central de la República Argentina, a la Tesorería y Comptaduría General de la Nación, a la Fiscalía General, a la Inspección General de Justicia, Banco Hipotecario

Nacional, BANADE, etcétera. En el anexo B se adjuntan las copias de las notas requiriendo las correspondientes informaciones.

Todavía no se dispone de la totalidad de la información solicitada debido no sólo a las dificultades de recopilación que tienen las entidades consultadas; sino a que muchas de ellas han sido requeridas a medida que fue avanzando la investigación.

Atentos a la restricción temporal que dispone el mencionado decreto, en esta etapa se han estudiado especialmente los rubros de mayor magnitud y durante los períodos en que éstos se manifestaron o crecieron con mayor notoriedad.

La metodología empleada fue la de investigar en forma simultánea los diversos aspectos (generales, particulares, legales y económicos) interactuando entre las hipótesis propuestas al inicio y la información disponible.

En cada uno de los capítulos se adjuntan los anexos que contienen las fuentes de información usadas para el análisis.

Respecto de la metodología usada por el doctor Roque Fernández para expresar en valores monetarios actuales los montos de las cuentas que originariamente fueron expresadas en diferentes monedas nacionales, y durante un período de 10 años, optamos por no emitir juicios de valor sobre la misma, sino simplemente aceptar el método utilizado.

La cantidad de variantes técnicas existentes sobre los sistemas de actualización y las correspondientes críticas que se pueden emitir justificadamente sobre cada una de ellas, harían de la investigación.

A los casos específicos, que se analicen a nivel individual, ya sea en la fiscalía o en la justicia, se le aplicarán criterios específicos para actualizar montos de deuda o cuantificar eventuales perjuicios.

2. Conclusiones obtenidas

A pesar de los cambios de orden político, de los relevos de funcionarios dentro de cada uno de los gobiernos, y de la vigencia de planes con diferentes denominaciones, durante el período considerado el plan económico no sufrió variantes fundamentales en lo que se refiere a:

— Haber mantenido altas tasas de inflación, emitiendo dinero descontroladamente y sin aumentar la producción.

— Haber incentivado la cultura de la especulación y la corrupción, que no sólo destruyó la moral del hombre sino también la estructura productiva.

— Haber cargado los costos de esta política a la gran mayoría de los argentinos, a través de la inflación, la concomitante distribución regresiva de los ingresos y la desocupación.

— Haber beneficiado a pequeños grupos que se apropiaron de la gran parte del déficit fiscal y de las ganancias extraordinarias (lícitas, ilícitas o inmorales) que generaban las transacciones financieras.

La cuantificación de esta enorme pérdida que sufrió la Nación y que en gran parte figura en la contabilidad del Estado nacional es muy difícil de mensurar.

2.1. Limitaciones de cálculo e información

El objeto de vincular el monto expuesto por el doctor Roque Fernández con otras variables económicas obedece a que:

a) El propio autor del informe expresa que sólo presenta "algunas de las pérdidas más notables", y que es "una primera aproximación muy limitada correspondiente a previsiones por incobrabilidad" (anexo C). Prueba de ello, es que los valores expuestos en algunos rubros no comprenden a la totalidad del período considerado.

b) Existen dificultades metodológicas y estadísticas para efectuar un adecuado análisis cuantitativo. Por ejemplo:

— Diferencias en los sistemas de contabilidad de los diferentes organismos del Estado (presupuesto nacional, cuenta de ahorro-inversión de la Contaduría General y contabilidad del Banco Central de la República Argentina).

— Debilidades técnicas en los sistemas de registración contable. El Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas expresa terminantemente que los balances del Banco Central de la República Argentina carecen de validez técnica desde el punto de vista de la medición de patrimonio y resultados (anexo D).

— Imposibilidad de homogeneizar las cifras expresadas en valores monetarios, cuando existieron tan abruptas variaciones de precios y tasas de cambio durante los diez años analizados, sobre todo cuando en algunos casos se disponen de saldos contables anuales, y en otros, saldos mensuales o diarios. Adicionalmente existe una disparidad de opiniones respecto a los criterios a emplear para efectuar los cálculos de actualización.

— Dificultades para disponer de la información necesaria en el tiempo estipulado para emitir este informe. Todavía varias entidades no han podido responder a lo requerido por esta comisión o lo han hecho parcialmente.

2.2. Se puede suponer que las "pérdidas" han sido de mayor magnitud

Del análisis del comportamiento de algunas otras variables macroeconómicas vinculadas a este tema durante ese mismo período, se puede inferir que las pérdidas han sido aun mayores a las expuestas "tentativamente" por el doctor Roque Fernández.

— Si el Banco Central de la República Argentina hubiera comprado dólares en el momento que emitió cada austral o peso argentino durante esos años, hubiera obtenido alrededor de 95.000 millones de dólares (calculando el incremento de la base monetaria convertida al tipo de cambio de cada momento en que se aumentaba).

Si a esa cifra le agregamos la diferencia entre el patrimonio neto del Banco Central de la República Argentina entre el principio y el final del período, esa cifra llegaría a 105.000 millones de dólares.

Ese monto es el que, de una u otra manera, desapareció. Ello no sólo surge de algunos "caprichos" de la

contabilidad, sino que significó un fuerte empobrecimiento de la mayoría de nuestro pueblo y de nuestro Estado beneficiando a pequeños sectores privilegiados, que usufructuaron lícita o ilícitamente de la especulación permitida por la tolerancia del sistema.

— Si consideramos que la tasa de inversión respecto al PBI en el período fue de aproximadamente la mitad de la que resultó en países de normal desenvolvimiento de su economía, resulta evidente que existió aproximadamente un 9 % de ahorro generado y no invertido. La distribución regresiva de los ingresos y la recesión en la producción, hacen lógico suponer que la disminución de la tasa de inversión no se trasladó al consumo.

Dado que el PBI del período fue de aproximadamente 650.000 millones de dólares, y que es de opinión dominante y de relativa fácil comprobación empírica que existió por lo menos un 30 % de economía negra (o sea no incluida en la contabilidad pública); significa que existieron ingresos negros por aproximadamente 280.000 millones de dólares. En consecuencia el total de ingresos del período (sumando blanco y negro) fue de 930.000 millones de dólares.

Aplicando el 9 % de ahorro no invertido sobre los ingresos en blanco y un porcentaje algo mayor sobre los ingresos en negro, resulta también una cifra similar a la anterior: 10.000 millones de dólares. Este es el monto del ahorro generado en el país y que no fue invertido en la Argentina.

La existencia del mencionado porcentual del mercado negro respecto a lo contabilizado en las cuentas nacionales está justificado en que no muchas de las mesas de dinero, ni muchas operaciones de comercio exterior, ni los fondos sustraídos de las entidades financieras liquidadas, ni las operaciones corruptas con contratistas del Estado figuran en ningún balance ni documentación utilizada para el cómputo del ingreso nacional.

Es probable que esas sumas sustraídas del patrimonio nacional tengan similitud con las que existen depositadas o convertidas en activos en el exterior, en caías de seguridad, o en pagos de personal o compra de bienes o servicios en negro.

— El déficit fiscal del período puede calcularse aproximadamente en un 10 % del PBI, o sea, alrededor de 70.000 millones de dólares. Ese déficit fue financiado por parte de la deuda externa, la deuda interna, y la emisión monetaria que efectuó el Banco Central de la República Argentina, y que aparece contabilizada en diversos rubros.

El déficit fiscal se produce básicamente por: 1) Un elevado índice de evasión impositiva: altísimas tasas de presión tributaria de acuerdo a la legislación vigente, y muy bajos niveles relativos de recaudación; 2) Una extraordinaria sangría originada en el irregular manejo de la relación entre el Estado (organismos centralizados, descentralizados, empresas públicas, municipios y provincias) y sus proveedores y contratistas; 3) Una ineficiente participación del Estado en actividades que no le son propias y 4) Una distorsión política de subsidios canalizada hacia la actividad financiera, determinadas actividades industriales amparadas en regíme-

nes de promoción industrial y agropecuaria, empresas estatales deficitarias y la desocupación o subocupación generada por la progresiva recesión.

— Es conveniente también recordar que solamente en el período 1983-1989 la deuda externa argentina aumentó el 33 % mientras que el PBI creció solamente el 9 %. Solamente para pagar los intereses de la deuda externa (aproximadamente 4.600 millones de dólares anuales), se requería casi el 6 % del PBI anual y equivalente al alrededor del 22 % del gasto público. Durante ese período los servicios de la deuda superaron el flujo de nuevos préstamos: la deuda aumentó 22.000 millones de dólares y los servicios devengados fueron de 25.000 millones de dólares. Las exportaciones anuales promedio fueron de 10.000 millones de dólares y las importaciones de alrededor de 6.000 millones de dólares anuales por lo tanto el saldo promedio del balance comercial anual fue de 4.000 millones de dólares. Este saldo fue menor que el monto de los servicios de la deuda externa.

Deuda externa - Principales deudores del sector privado al 22-1-85

Cogasco S.A.	1.347.930.000
Autopistas Urbanas S.A.	951.184.000
Celulosa Argentina S.A.	836.243.000
Acindar S.A.	649.149.000
Banco Río	520.112.000
Alto Paraná S.A.	424.835.000
Banco de Italia	388.000.000
Banco de Galicia	293.328.000
Bridas S.A.P. y C.	238.290.000
Alpargatas S.A.	227.438.000
City Bank	213.000.000
Cía. Naviera Pérez Companc	210.599.000
Dálmine Siderca	186.000.000
Banco Francés	184.200.000
Papel de Tucumán	176.037.000
Juan Minetti S.A.	172.596.000
Banco Mercantil Argentino	167.000.000
Aluar	162.811.000
Banco Canadero	157.390.000
Celulosa Puerto Piray	156.433.000
Banco Crédito Argentino	152.898.000
Banco Comercial del Norte	137.030.000
Banco de Londres	135.395.000
Banco Torquinst	134.247.000
Banco Español	134.000.000
SADE	125.000.000
Sevel	124.142.000
Banco Quilmes	123.425.000
Parques Interama	119.087.000
Cía. de Perforaciones Río Colorado ..	118.980.000
Swift Armour	114.747.000
IBM	108.513.000
Banco Sudameris	107.000.000
First National Bank of Boston	103.000.000
Astra - A. Evangelista S.A.	102.646.000
Mercedes Benz	92.122.000
Banco de Crédito Rural	92.000.000
Deutsche Bank	90.000.000
Industrias Metalúrgicas Pescarmona ..	89.940.000
Banco Roberts	89.000.000

Banco General de Negocios	87.290.000
Afanza Naviera Argentina	81.943.000
Propulsora Siderúrgica	80.723.000
Ford	80.420.000
Astilleros Alianza S.A. de Construc- ciones	80.024.000
Massuh S.A.	79.677.000
Continental Illinois National Bank ...	75.933.000
Banco Shaw	72.875.000
Pirelli	70.400.000
Deere and Company	68.826.000
Cemento NOA	67.022.000
Banco Superville	65.200.000
Alimentaria San Luis	65.149.000
Loma Negra	61.758.000
Selva Qil Incorporated	61.438.000
Macrosa	60.975.000
Sideco Americana	60.751.000
Chase Manhattan Bank	60.499.000
Bank of America	59.353.000
Astra Compañía Argentina de Petróleo	58.888.000
Deminex Argentina	57.190.000
Industrias Pirelli	56.074.000
Eso	54.506.000
La Penice S.A.	53.397.000
Manufacturers Hanover Trust	53.089.000
Petroquímica Comodoro Rivadavia ...	52.240.000
Compañía General Fabril Financiera ..	51.479.000
Pandile Argentina	51.202.000
Fiat	51.000.000
Banco Provincia de Buenos Aires ...	50.000.000
Otros	11.116.052.000
Total	23.000.000.000

2.3. Transferencias al sector privado a través del déficit fiscal y la política financiera y cambiaria.

Quiénes perdieron todo este dinero fue el conjunto del pueblo argentino a través del proceso inflacionario.

Creamos más moneda que riqueza y esa diferencia la pagamos a través del aumento de precios, entre los que se incluyen las tarifas y los impuestos.

Subsidiamos a un sector público y a un sector financiero que, amparados en la "legalidad" creada por las normas de la política económica entonces vigente, transfirieron esos fondos (a través de mecanismos espurios) a grupos privilegiados del sector privado.

El destino de ese dinero fue:

a) El financiamiento del déficit fiscal:

El Estado financió su descontrolado déficit con emisión de deuda externa, interna y de billetes.

La aplicación de políticas económicas perversas instrumentadas por medio de procedimientos apoyados en preceptos jurídicos dictados a esos efectos, "legitimizaron" la corrupta transferencia de recursos a la llamada "patria contratista", ya sea con los sobreprecios pagados a los proveedores y contratistas del Estado, por vía de regímenes inadecuados de promoción industrial y de pago de avales otorgados a empresas privadas.

Este fenómeno se manifestó tanto en las empresas públicas, organismos centralizados y descentralizados del Estado nacional, provincias y municipios.

El Banco Central de la República Argentina financió aproximadamente un 50 % de este déficit a través de emisión monetaria: adelantos a Tesorería, financiamiento directo al gobierno en australes y tomando crédito internacional.

b) El subsidio al sistema financiero

El Banco Central de la República Argentina, también bajo una adecuada cobertura legal creada por los diseñadores de la política económica de ese período, transfirió recursos al sector privado, subsidiando al sistema financiero público y privado.

Se permitió que el sistema financiero generara negocios espectacularmente beneficiosos para el sector privado. La realización de los mismos generó el peligro del derrumbe del sistema, el cierre de entidades en cadena, las escapadas de las tasas de interés o de la tasa de cambio. Frente a estas situaciones y para evitar el pánico o las "corridas", el Banco Central de la República Argentina continuaba aplicando políticas de subsidio generando así una espiral expansiva.

Los mecanismos fueron varios: 1) La cuenta de regulación monetaria (remuneración de depósitos inmovilizados); 2) La regulación del mercado cambiario; 3) El 100 % de garantía sobre los depósitos; 4) La autorización para el sobredimensionamiento de algunas entidades y la creación de muchas nuevas; 5) La falta de control sobre los niveles de endeudamiento de las entidades; 6) El otorgamiento del 100 % de aval a exportadores de regímenes especiales, etcétera.

El Banco Central de la República Argentina permitió que las entidades financieras pagaran tasas mensuales exorbitantes sobre depósitos captados de particulares. Resulta obvio que sólo lo pudieron hacer apoyadas en una política de subsidios, ya sea remunerando depósitos inmovilizados, garantizando la devolución de los certificados pactados u otros similares. Muchos de estos mecanismos, por sus características técnicas disimularon sus verdaderos objetivos, mientras que otros mecanismos produjeron similares resultados independientemente de la intencionalidad con que fueron concebidos.

El Banco Central de la República Argentina controló a su costo el "supuesto" equilibrio del mercado de cambio, ya sea subsidiando exportaciones privilegiadas a algunos sectores o países, o comprando divisas cuando eran caras y vendiéndolas cuando eran baratas con el objeto de regular un mercado, que era esencialmente especulativo y típicamente oligopólico.

El Banco Central de la República Argentina —apoyándose en sus propias normas entonces vigentes— autorizó la apertura de una gran cantidad de entidades nuevas o a expandir indiscriminadamente la apertura de sucursales de las ya existentes, solicitudes que obedecían a la altísima rentabilidad que ellas proveían a sus propietarios. Esto no sólo generó muy buenos negocios para las entidades fuertes, sino que el Banco Central de la República Argentina tomó a su cargo

el riesgo de solventar las liquidaciones de cientos de entidades a las que ni dejaba de pagarles puntualmente por la inmovilización parcial de los depósitos que declaraban de "buena fe", pero sin tomar previamente las precauciones necesarias para controlar las garantías de los créditos o la solvencia de sus beneficiarios.

No sólo la aplicación de aquella legislación fue de resultados perversos, no sólo la dictaron y la ejecutaron determinados grupos de poder que se beneficiaron con ella, sino que crearon un mercado para-financiero —mesas de dinero, extrabursátiles, etcétera— donde sin control se trasladaron recursos financieros que debieron permanecer en el circuito bancario si se los hubiera controlado debidamente.

c) Subsidios a los negocios de comercio exterior:

Las sobre o subfacturaciones en las compraventas con el exterior y las consecuentes operaciones en negro distorsionaron el mercado cambiario y fueron alimentando el seguimiento de un mercado especulativo que generaba bruscas variaciones en la tasa de cambio. Esas desmedidas variaciones nada tenían que ver con las relaciones de costos comparativos en el plano internacional, ni con los precios relativos en el mercado interno.

Todas las pérdidas ocasionadas por las diferencias de cambio o por ingreso de divisas en negro a través del mercado libre (muy superiores a las del mercado oficial), las abonó el Banco Central de la República

Argentina o se fugaron al exterior. Así se produjeron estrangulamientos, que indirectamente también terminó pagando el Banco Central de la República Argentina, agotando así sus reservas en divisas o emitiendo dinero en exceso.

Las cuentas con la metodología con que han sido presentadas, y si nos aten mos a su denominación, demuestran que una cuarta parte de esa pérdida se destinó a financiar al sector público y tres cuartas partes al sector privado.

Del análisis de estas cuentas, tal cual están expuestas, surge que la emisión monetaria se transfirió casi íntegramente al sector privado. Sólo quedaron a cargo del Estado los costos de su ineficiencia administrativa y de su incursión en actividades que no le eran propias.

A partir de estimaciones provisionales, tentativamente podemos decir que aproximadamente el 40 % del total fue transferido a través del déficit fiscal; un 45 % a través del subsidio al sistema financiero (25 % a los bancos oficiales y 20 % a los bancos privados nacionales y extranjeros), y el 15 % restante a los operadores de cambio y comercio exterior.

Cabe aclarar que en los cálculos efectuados se han excluido los efectos generados por la emisión de deuda interna y externa que efectuaron los gobiernos nacional, provinciales y las empresas públicas.

2.4. Las autoridades que se desempeñaron en el período fueron:

Año	Presidente	Ministro de Economía	Banco Central de la República Argentina
1980	General Videla	Martínez de Hoz	Adolfo Diz C. Zimmermann A. Reynal E. Folcini F. Soldati
1981	General Viola	Sigaut	Julio Gómez Martín Lagos
1982	General Galtieri	Roberto Alemann	Egidio Iannella H. Giménez Zapiola Domingo Cavallo R. Clutterbuck
1983	General Rignone	Dagnino Pastore Whebe	J. González del Solar
	Raúl Alfonsín	Grispun	Enrique García Vázquez Marcelo Da Corte Alfredo Concepción
		Sourrouille	José L. Machuca Marcelo K'guel Daniel Marx
		Pugliese	E. García Vázquez Pedro C. López
		Jesús Rodríguez	

En el anexo J se adjuntan los directorios de los principales bancos oficiales y privados.

Los beneficiarios se irán identificando en cada capítulo del presente estudio de acuerdo a lo que se ha podido investigar hasta el momento.

En el anexo F se detallan todos los casos de entidades liquidadas que se encuentran en trámite judicial, así como la totalidad de dichas entidades y los principales deudores de las mismas.

3. Estudio de los principales rubros

3.1. Regulación monetaria

Significa el 50 % del total de la deuda declarada en el informe.

Cobra especial significación entre los años 1983 y 1989. Los adelantos a la cuenta regulación monetaria en millones de u\$s fue la siguiente:

1980	1.377 de superávit
1981	195
1982	398
1983	4.357
1984	3.800
1985	3.667
1986	3.211
1987	4.658
1988	8.179
1989	6.591

3.1.1. Breve reseña histórica de su funcionamiento

Hasta la puesta en marcha de la reforma financiera de 1977 el sistema financiero venía operando bajo el régimen de centralización de depósitos; en este contexto los bancos y demás entidades financieras transferían al Banco Central de la República Argentina los depósitos captados del público y recibían de la autoridad monetaria adelantos para satisfacer la demanda de crédito de sus clientes. Asimismo, las tasas de interés eran establecidas por el Banco Central de la República Argentina y las entidades financieras percibían una comisión por sus servicios.

La reforma de 1977 se propuso, entre otras cosas, restituir a las entidades el pleno ejercicio de su función de intermediación, en un contexto que le permitiera a la autoridad monetaria efectuar el control de la cantidad de dinero en un ámbito de libre determinación de las tasas de interés. A tal efecto se dictaron leyes y otras normas que dieron el sostén legal para tratar de cumplir dicho objetivo.

Por la ley 21.572 se creó la llamada Cuenta de Regulación Monetaria el 6 de mayo de 1977, coincidente con el lanzamiento de la reforma al sistema financiero argentino cuya piedra basal fue la Ley de Descentralización de Depósitos 21.495 y la Ley de Entidades Financieras 21.526.

Dicho dispositivo consistió esencialmente en la remuneración de encajes por parte del Banco Central de la República Argentina de los depósitos a plazo y en la aplicación simultánea de un "tributo" o cargo sobre la capacidad prestable originada en los depósitos a la vista por parte de las entidades del sistema.

Una de las consideraciones más importantes tenidas en cuenta para la implementación de dicha reforma financiera fue la de diseñar el régimen de efectivo mínimo. En este sentido las decisiones sobre encaje debían satisfacer las siguientes condiciones básicas:

- a) Permitir un adecuado control monetario;
- b) Posibilitar que las entidades financieras pudieran operar en un marco de competencia;

c) Eliminar la fijación de tasas de interés reguladas procurando que las mismas fueran determinadas por el propio mercado.

Por lo tanto la Cuenta de Regulación Monetaria tenía por objeto compatibilizar todos estos objetivos, y fue en definitiva una herramienta fundamental de la reforma financiera de 1977. Se trató de lograr la neutralidad monetaria inicial a partir de la reforma y realizar una efectiva programación y seguimiento monetario.

El objetivo que perseguía la Cuenta de Regulación Monetaria era fortalecer y estimular el ahorro interno, y que su formación fuera hecha esencialmente por las instituciones financieras.

El 1º de julio de 1982 se produjo una importante reforma en el funcionamiento del sistema financiero argentino. El país terminaba de perder la guerra con Gran Bretaña, institucionalmente se producía un nuevo recambio gubernamental, la crisis económica comenzaba a perdurar más allá de lo previsto, por lo que la reforma financiera ensayada apuntaba fundamentalmente a evitar una quiebra en masa de muchísimas empresas privadas y por ende de gran parte de las entidades financieras.

El nuevo sistema dividía a los depósitos en dos segmentos: uno a tasa regulada, fijada y compensada por el Banco Central, y otro a tasa libre, originalmente a 90 días de plazo mínimo, fijada libremente por cada entidad y con cargo propio.

En el año 1985 se produjo una nueva reforma en el funcionamiento del sistema financiero, que básicamente consistió en una flexibilización del segmento de tasa libre, ya que a través de la comunicación "A" 613 se estableció que a partir del 1º de abril de 1985 las entidades financieras podrían captar depósitos a plazo fijado a la tasa que libremente convengan por períodos no inferiores a 7 días. Estos depósitos no debían guardar exigencia de efectivo mínimo y los intereses que devengaban serían a cargo de cada entidad.

Si bien se mantuvo el funcionamiento del segmento a tasa regulada, la modificación descrita en el párrafo anterior, junto con las líneas de depósito ajustables por índice de precios, obligaron al Banco Central de la República Argentina a arbitrar medios de regulación de la fuerte liberación de capacidad prestable, derivada del brusco descenso de los niveles de encaje.

Nacen así los "depósitos indisponibles", sumas que las entidades financieras debían depositar en el Banco Central por determinado período de tiempo y por las cuales dicha entidad abonaba una remuneración (intereses y/o ajuste) mensualmente.

A los depósitos indisponibles le sucedieron y/o superpusieron un sinnúmero de activos inmovilizados, muchos de los cuales fueron devueltos al poco tiempo de su creación.

3.1.2. Su incidencia en el balance del Banco Central de la República Argentina y en los balances de las entidades financieras.

El flujo de ingresos y egresos de la Cuenta de Regulación Monetaria tenía íntima vinculación con los permanentes movimientos producidos en la composición de los depósitos del sistema financiero.

Si el Banco Central de la República Argentina compensa o remunera los depósitos a plazo en cartera como consecuencia de la observación de encajes, se produce un incremento de la captación de ese segmento. "La cultura del plazo fijo" que embrionariamente aparece con la reforma de 1977, toma pleno auge en los años 80. Se produce entonces una especialización en la banca: el negocio del depósito a plazo. En tal sentido se orientaba el *marketing* bancario, las campañas publicitarias y la estructura de las entidades financieras. Prueba de ello es el aumento de sucursales o casas bancarias en esa época, pues a mayor cantidad de sucursales mayor captación a plazo, lo que significaba a la postre mayor remuneración o compensación por parte del Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central de la República Argentina contabilizó en el activo los adelantos que otorgaba el sistema por aplicación de la Cuenta de Regulación Monetaria (así lo estipulaba la ley 21.572): es decir que "...sus saldos deudores puedan ser cubiertos de inmediato por el Banco Central de la República Argentina adelantando los recursos necesarios, sin afectar por ello los topes de endeudamiento del gobierno nacional con esa institución. De igual modo sus saldos no podrían ser utilizados por el Tesoro nacional para cubrir sus gastos corrientes" (artículo 5º, ley 21.572).

Si bien se preveían saldos desfavorables en la cuenta, ello sería para un horizonte de tiempo no más allá del inicio de su implantación. Los saldos que arrojó las cuentas fueron desfavorables sin solución de continuidad, o sea que siempre el Banco Central adelantó fondos.

El Banco Central contabilizó en el activo los saldos de esta cuenta de acuerdo a la establecida en el artículo 1º de esta ley, por la cual se crea un artilugio contable al decir que la Cuenta de Regulación Monetaria será administrada por el Banco Central de la República Argentina por cuenta del gobierno nacional y figurará en el balance de la institución.

Es decir, el Banco Central de la República Argentina registró en el activo los adelantos sobre la base de la ficción de que el gobierno nacional se lo debía y algún día procedería a su cancelación, caso contrario, el Banco Central de la República Argentina tendría que haber registrado en "resultados" bajo el concepto de "pérdida" y hoy el patrimonio del Banco Central podría llegar a tener saldo negativo.

Cotejadas las memorias y balance anual del Banco Central de la República Argentina desde 1977 a 1986, se obtiene el siguiente cuadro:

Año	Cuenta	Rubro	Importe en * valor histórico *	% partici- pación del total del activo
1977	Adelanto para la cuenta de regulación monetaria	Créditos al gobierno nacional	26.000	4,6
1978	Idem	Idem	169.200	17
1979	Idem	Idem	291.200	13,65
1980	Idem	Idem	118.900	2,4
1981	Idem	Idem	472.523	5
1982	Idem	Idem	774.336	2
1983	Idem	Idem	29.313.893	8
1984	Idem	Idem	423.611.689	20
1985	Idem	Otras cuentas del activo	2.282.628.864	15
1986	Idem	Idem	5.488.726.432	17

* Información que surge del balance anual del Banco Central de la República Argentina.

Por la mecánica de la liquidación de la cuenta, la contrapartida de la misma se hacía en forma casi automática, ya que las entidades cuyas liquidaciones arrojaban saldo a favor de la Cuenta de Regulación Monetaria debían formular orden de débito sobre la cuenta corriente que mantenían en la institución, y cuando las mismas daban saldo a favor de las entidades, el Banco Central de la República Argentina procedía dentro de las 48 horas de la recepción a acreditar el importe correspondiente en la cuenta corriente que la entidad tenía abierta en esa institución.

Como consecuencia de esto, en los balances de las entidades se registraba en la cuenta Compensación

Cuenta Regulación Monetaria el importe devengado por tal concepto, con la correspondiente acreditación de los numerales en la cuenta corriente que mantenían en el Banco Central de la República Argentina.

Se vislumbra una verdadera traslación de fondos del sector público al sistema financiero constituyendo la Cuenta de Regulación Monetaria una suerte de subsidio a este sector.

Pero no solamente hubo transferencia de fondos a través de este mecanismo, ya que el porcentaje de recursos que los bancos debían dejar indispensables por el total de captación de los depósitos a plazo a manera de encaje, no lo constituían en el Banco Cen-

tral de la República Argentina, sino que las mismas entidades manejaban su inmovilización. Este procedimiento dio lugar a un sinnúmero de operaciones que se realizaban con esa masa de recursos que se declaraba como no sujeta a encaje (operaciones de *Call Money*, *Overnight*, etcétera). Estas operaciones son de difícil comprobación pero en la realidad de los hechos se multiplicaron y fueron práctica usual en todo el sistema.

Los eventuales saldos acreedores de la Cuenta de Regulación Monetaria no podían ser utilizados por el Tesoro nacional para cubrir sus gastos corrientes ya que así lo estipulaba la ley, con lo cual se puso en evidencia el carácter extrafiscal de la Cuenta de Regulación Monetaria, de allí el denominado déficit cuasifiscal que perturbó tan notoriamente a la economía argentina.

La no remuneración de las reservas por depósitos a la vista y simultáneamente el cobro de una base comparable a la de la inflación por la capacidad prestable emanada de las entidades financieras implicaba, de hecho, la centralización de la percepción del impuesto inflacionario por parte del gobierno.

Técnicamente, en términos financieros, el Tesoro se beneficiaba por el efecto que sobre los depósitos produjo la inflación al resultar que los adelantos que percibía no eran ajustables.

3.1.3. Efectos monetarios

El efecto monetario de la Cuenta de Regulación Monetaria surge de la diferencia entre las compensaciones y los cargos. El efecto monetario puede ser expansivo o contractivo según la diferencia entre los agregados de compensaciones y cargos.

Esto último tiene especial influencia sobre lo que ocurrió con la expansión de la base monetaria. En el año 1981, dentro de los factores de expansión, la Cuenta de Regulación Monetaria tuvo una importante incidencia (equivalente a A 333.440) y los aumentos fueron como consecuencia del constante incremento de la tasa de efectivo mínimo.

Durante 1982, y como consecuencia de que a partir del 1º de julio de 1982 se fijó un nivel de encaje de 100 % para los depósitos regulados, la Cuenta de Regulación Monetaria compensó a través de la tasa efectivamente pagada la totalidad de los intereses que el sistema financiero abonaba por los depósitos, por lo tanto se generó un efecto monetario expansivo por el pago de las compensaciones.

En el año 1983 también se produjo un crecimiento del efecto monetario de la Cuenta de Regulación Monetaria. Ello se debió a los altos niveles nominales de las tasas de interés para los depósitos regulados y los ajustes que se pagaron por distintas imposiciones, debido al incremento de la tasa de inflación en 1983. Además, aumentó el volumen en términos reales de los depósitos ajustables por índice de precios, y a partir de abril aparecieron los concertados con cláusula dólar.

En el año 1984 la Cuenta de Regulación Monetaria registró un considerable incremento en términos nominales a lo largo del año. A dicho crecimiento contribuyeron los elevados niveles nominales de tasa sobre de-

pósitos regulados y los ajustes pagados por distintas imposiciones, debido a los altos registros inflacionarios del año. La Cuenta de Regulación Monetaria contribuyó en ese año a la expansión de la base en una tasa de 3,5 % durante el primer trimestre, marcó un brusco incremento de 115,20 % en el segundo y continuó creciendo a las elevadas tasas del 79,20 % y 94,1 % durante el tercero y cuarto trimestre, respectivamente. Para ese año, la expansión de la base monetaria por este concepto fue de 671 %.

A principios de 1985 el Banco Central de la República Argentina dejó de acreditar los fondos generados por el devengamiento de las compensaciones de la Cuenta de Regulación Monetaria, y en cambio devengaba contablemente los intereses por la constitución de los depósitos indisponibles. De esta manera la transferencia de fondos no era concomitante sino que se producía en forma gradual.

Las reformas introducidas en el sistema permitieron reducir el impacto expansivo de la Cuenta de Regulación Monetaria sobre la base monetaria por el pago de las compensaciones, no obstante haber tenido dicha cuenta una significativa variación.

En el año 1986, y ya disuelto el mecanismo de la Cuenta de Regulación Monetaria, se profundizó la reforma del sistema iniciada en 1985. Contablemente se interrumpió un ciclo, pero continuaron los efectos de la cuenta, pues gran parte de lo que captaban las entidades financieras lo constituían en el Banco Central de la República Argentina, ya que ésta era la inversión más segura y más rentable. De esta manera los bancos mostraban una situación de aparente equilibrio y balances sanos, sin entrar a considerar la disparidad (descalce) producida en razón de las políticas crediticias, que concentraban el crédito en grupos económicos con cierto grado de vinculación.

En resumen, en el período que va desde 1981 a 1986, el efecto monetario de la Cuenta de Regulación Monetaria fue altamente expansivo, medido en términos de crecimiento de la base monetaria. Esto trajo aparejado serias distorsiones a nivel de la economía en general como consecuencia de la inflación no deseada.

Los trastornos que siguió produciendo y producirá la Cuenta de Regulación Monetaria en nuestra economía no son una afirmación caprichosa. El Plan Bonex de final de 1989 quiso "barrer" todos los resabios contables que quedaban del déficit cuasi fiscal (generado precisamente por la cuenta objeto del presente estudio). Al no poder hacer frente el gobierno nacional a dicho déficit, pospone su resolución financiera por el lapso de 10 años. Hasta que el Estado proceda al rescate de los Bonex Serie 1989, no se sabrá si la Cuenta de Regulación Monetaria habrá dejado de hacer daño a la maltrecha economía nacional.

3.1.4. Metodología de cómputo

La metodología utilizada por el doctor Roque Fernández para expresar la pérdida que afronta el Banco Central de la República Argentina en los últimos diez años, consistió en convertir "el flujo mensual en moneda local a dólares USA, al tipo de cambio promedio del mercado libre". La variación que mes a mes se

producía en la Cuenta de Regulación Monetaria se la convertía en dólares de ese período utilizando un promedio del mercado libre. No aclara si el índice construido es el promedio de las cotizaciones que tuvieron los dólares a lo largo del mes o el promedio de las distintas cotizaciones que ofrecía el mercado a fin de cada mes.

A los dólares así obtenidos se los actualizó a diciembre de 1989 "utilizando un índice compuesto por 50 % precios mayoristas y 50 % precios minoristas". Esta metodología ha sido técnicamente cuestionada por diversos motivos, ya que también se podría haber actualizado la variación mensual que arrojaba la cuenta por el índice de precios al por mayor nivel general que elabora el INDEC (índice que utilizan la totalidad de las empresas en nuestro país para actualizar sus estados contables) al 31 de diciembre de 1989 y posteriormente convertir a la totalidad de australes en dólares de esa fecha utilizando el tipo de cambio vigente.

Otra apreciación técnica a la metodología utilizada por el doctor Fernández consiste en discernir entre la deuda devengada y la efectivamente pagada, debido al efecto monetario que esto genera y las distintas evoluciones que muestra la cotización del dólar. Al respecto, es importante aclarar que dicha discriminación es válida a partir de 1985 ya que hasta entonces los saldos de la Cuenta de Regulación Monetaria reflejaban exclusivamente lo pagado a las entidades. Con posterioridad a 1985, si bien se comienza a devengar los ajustes por depósitos indisponibles que no son pagados simultáneamente, no es correcto afirmar que la totalidad de la variación corresponde a devengamientos, ya que muchos depósitos indisponibles son cancelados en periodos breves de tiempo, y los cancelables a largo plazo se amortizaban en cuotas mensuales.

En definitiva, toda conversión de la pérdida del Banco Central de la República Argentina a dólares estadounidenses podrá ser cuestionada desde distintas ópticas, ya que la cotización del dólar en nuestro país no ha tenido una evolución similar a la inflación. Como existieron periodos de adelanto y periodos de atraso con respecto al valor del resto de los bienes de la economía, siempre se podían obtener importes distintos en dólares según la fecha de conversión y la metodología utilizada.

B.1.5. Resumen y conclusiones.

— La Cuenta de Regulación Monetaria fue un instrumento monetario no convencional creado por decreto ley 21.572 el 6-5-77.

— Fue concebida como herramienta idónea para el diseño del régimen de efectivo mínimo, pieza clave en la reforma financiera de 1977.

— Sus objetivos fueron distorsionados con el correr del tiempo.

a) Se propugnaba la programación, el seguimiento y control monetario, mas nada de ello ocurrió,

pues sus efectos monetarios fueron siempre expansivos respecto de la base monetaria (desde el 77 al 79 y del 81 en adelante);

b) El fortalecimiento del ahorro interno fue una mera ilusión.

— Los objetivos de preparar un adecuado menú financiero y crear condiciones de maximización de beneficios para las entidades del sistema, fueron los únicos alcanzados, ya que la gama de negocios creados a partir de la Cuenta de Regulación Monetaria y su rentabilidad así lo demuestran.

La Cuenta de Regulación Monetaria estimuló y subsidio al sistema financiero desde su creación y hasta la extinción del mecanismo (en diciembre de 1989 con la implementación del Plan Bonex) produciendo así una considerable transferencia de fondos del sector público al sector financiero.

— Se creó la "cultura del plazo fijo" con efectos hasta nuestros días.

— Se fomentó el sobredimensionamiento del sistema financiero por el aumento de sucursales bancarias, dando paso al llamado "sucursalismo".

— Los saldos favorables, proyectados en principio para la etapa inicial de la cuenta, lo fueron sin solución de continuidad, debiendo el Banco Central de la República Argentina adelantar los fondos necesarios.

— Si el Banco Central de la República Argentina hubiera considerado estos adelantos como una pérdida, su patrimonio neto podría arrojar saldo negativo.

— Se produjo un campo propicio para la realización de operaciones al margen del circuito financiero institucional, lo que dio lugar al enquistamiento de la "patria financiera" y al desarrollo constante de una cultura al servicio de la especulación.

— Con la Cuenta de Regulación Monetaria comenzó el déficit cuasi fiscal que fue uno de los grandes males de nuestra economía en los últimos quince años. En los hechos los devastadores efectos de este mecanismo fueron de tal magnitud que la actual conducción económica tuvo que diseñar un plan (el Plan Bonex) específico para contrarrestar en parte sus secuelas.

— En forma sistemática, año tras año, los balances de las entidades financieras arrojaron cuantiosos saldos en concepto de la Cuenta de Regulación Monetaria que incidieron favorablemente tanto en el activo como en el estado de resultados.

— Según las conclusiones de nuestro análisis, es dable pensar que la participación en el total de los depósitos del sistema fue la que le correspondió a cada entidad en la transferencia de recursos al sector privado. Por lo tanto, la composición del saldo de la Cuenta de Regulación Monetaria, según los porcentajes obtenidos, permiten demostrar en qué medida las entidades financieras contribuyeron a la "pérdida", o bien dicho en otras palabras, en cuánto se han "beneficiado" con dicha cuenta.

La información suministrada por el Banco Central de la República Argentina de los bancos de mayor captación de depósitos es la siguiente:

- Nación.
- Provincia de Buenos Aires.
- Nacional de Desarrollo.
- Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
- Galicia y Buenos Aires
(Escasany-Bullrich-Zimmerman).
- Río de la Plata (Pérez Compané).
- Boston (Sacerdote-Correa Urquiza).
- Provincia de Córdoba.
- Ciudad de Buenos Aires.
- De Crédito Argentino
(Cairolí-Kulish-Eugenio Blanco).
- Quilmes (Fiorito).
- Londres-Lloyds.
- Hipotecario Nacional.
- Provincial de Santa Fe.
- Citibank (Handley-Miró).
- Comercial del Norte (Zorroaquin).
- Francés (Otero Monsegur-Gamboa-Clutterbuck).
- Credicoop (Girigaldi-Cooperativo).
- De Entre Ríos.
- Español (Zorroaquin-Terán Nougués).

Los saldos se pueden clasificar, a la vez de la siguiente manera:

Bancos	Importe en millones de dólares
Oficiales de la Nación	5.775,91
Oficiales de provincia	8.681,87
Oficiales de municipalidad	1.023,83
Privados nacionales	12.049,57
Extranjeros	4.735,23
Nacional de Desarrollo	959,84
De Inversión	20,21
Hipotecario	1.198,96
Caja de Ahorro	1.252,85
Diferencia de redondeo	19,51
Pérdida por Cuenta de Regulación Monetaria según informe del doctor Roque Fernández	33.678,76

En el anexo E figura el listado de los 20 principales clientes de cada una de las entidades mencionadas.

Con la documentación que consta en dicho anexo se han elaborado los cuadros siguientes que expresan el listado de los mayores deudores de las principales entidades.

BANCOS

Prov. de Bs. As.	Nación Argentina	Ciudad de Bs. As.	Caja Nac. de Ahorro y Seguro	Quilmes S.A.	Entre Ríos	Gallito y Bs. As.	Lloyds Bank Limited	Crédito Argentino S.A.	First Nat. Bank of Boston	Citibank N.A.	Francés Río de la Plata	Provincia de Córdoba	Provincial de Santa Fe	Río de la Plata	Credicoop Coop. Ltda.	Total por empresa
---------------------	---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------	------------	----------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------

Dirección de Energía de la Provincia de Bs. As.	3.869																				3.869
Dirección de Vialidad de la Prov. de Bs. As.	1.532																				1.532
Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado	267	899	103																		1.269
Gas del Estado Sociedad del Estado		1.035	198																		1.233
Empresa Nacional de Telecomunicaciones ...		997	79																55		1.131
Comando en Jefe de la Armada Argentina ..		919																			919
Gobernación Prov. de Santa Fe Rentas Grales.																			738		738
Junta Nacional de Granos			657																		657
Dirección General de YPF		540	43																39		622
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ...	533																				533
Empresa Ferrocarriles Argentinos		533																			533
Hidronor S.A. Hidroeléctrica Norpatagónica ..		518																			518
Sociedad Mixta Siderurgia Argentina S. A. ..	66	233		17	11		18	21		21											387
Comando en Jefe Fuerza Aérea Argentina ...		383																			383
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires ..		275	42	43															10		370
Dirección Nacional del Antártico		295																			295
Yacimientos Petrolíferos Fiscales		209																			209
Fuerza Aérea Argentina Com. de Mat. Córdoba		208																			208
Empresa Subterráneos de Buenos Aires			158																		158
Cinturón Ecológico Area Metropolitana	70		79																		149
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba																			88		88
Obras Sanitarias de la Nación			77																		77
Ministerio de Salud de la Prov. de Bs. Aires	73																				73
Comisión Nacional de Energía Atómica		73																			73
Dirección General de Fabricaciones Militares			66																		66
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires		63																			63
Municipalidad de Córdoba																			53		53
Gob. Pcia. de Santa Fe - Direcc. Gral. Vialidad																			43		43
Superior Gobierno Provincia de Entre Ríos ..								37													37
Empresa Provincial de Energía de Córdoba ..																			34		34
Municipalidad de Resistencia (Chaco)			33																		33
Gob. Pcia. Santa Fe - Dir. Serv. Aéreos L.A.S.																			29		29
Dirección Provincial de Vialidad																			26		26
Total por Bancos	6.410	7.044	838	893	11	37	18	21	0	21	0	0	201	860	94	16	16.458				
Subtotal empresas públicas	16.458																				

MAYORES DEUDORES DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES

EMPRESAS	BANCOS																Total por empresa
	Prov. de Bs. As.	Nación Argentina	Ciudad de Bs. As.	Caja Nac. de Ahorro y Seguro	Quilmes S.A.	Entre Ríos	Galicia y Bs. As.	Lloyds Bank Limited	Crédito Argentino S.A.	First Nat. Bank of Boston	Citibank N.A.	Francés Río de la Plata	Provincia de Córdoba	Provincial de Santa Fe	Río de la Plata	Creditoop Coop. Ltda.	
Equitel S.A.							67	90		180	191	16			141		685
Parques Interama S.A.			187	332													519
Sade SACCIFIA y de Mandatos		228					26	50		24	47						375
Techint S.A.							19								343		362
Federación Argentina de Coop. Agrarias	87	220													43		350
Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. ..		200	45	33			12			23							313
Esso S.A. Petrolera Argentina					9		27			56	34	47				82	255
Astilleros Argentinos Río de la Plata S.A. ...		250															250
Autolatina Argentina S.A.	99				11		16			18						38	232
IBM Argentina S.A.							16			133	33					48	230
Cargill S.A.		175					19									35	229
Siderca S.A.I.C.							13	25		56						129	222
Pecoa Nec S.A.		217															217
Bridas S.A.P.I.C.		138							13		26						177
Constructora Embalse Casa de Piedra S.A. ..	47											109					156
Saab Scania Argentina S.A.					75					67							142
El Hogar Obrero Coop. de Cons. Edif.					22						82					37	141
Transax S.A.C.I.F.															139		139
Astilleros Corrientes S.A.											137						137
Siemens S.A.I.C.F.I. y de Mandatos											133						133
Autopistas Urbanas S.A.			129														129
Canteras Cerro Negro S.A.	127																127
Aceitera Chabas S.A.I.C.												22	75	21			118
Oleagínosa Oeste S.A.	100											16					116
Aceitera General Deheza S.A.I.												13	90				103
Unión Constructores Argentinos S.A.												103					103
Frigorífico Regional Santa Elena						102											102
Iglys S.A.			79						10			12					101
Forja Argentina S.A.C.I.F.			101														101
Ventura Mar del Plata S.A.C.I.F.M.	100																100
Sevel Argentina S.A.	73				24												97
Roque Vassalli S.A.				15												78	93
Oleagínosa Río Cuarto S.A.									19				73				92
Arcor S.A.I.C.											38	18	34				90
Arpemar S.A.P.C.I.	87																87
Asociación de Cooperativas Argentinas									15						66	5	86

[illegible]

MAYORES DEUDORES DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES

EMPRESAS	BANCOS																Total por empresa
	Prov. de Bs. As.	Nación Argentina	Ciudad de Bs. As.	Caja Nac. de Ahorro y Seguro	Quilmes S.A.	Entre Ríos	Galicla y Es. As.	Lloyds Bank Limited	Crédito Argentino S.A.	First Nat. Bank of Boston	Citibank N.A.	Francés Río de la Plata	Provincia de Córdoba	Provincia de Santa Fe	Río de la Plata	Creditoop Coop. Ltda.	
Montedison Farmacéutica S.A.C.I.F.I. y A.												37					37
Compañía Emiliana de Exportación S.A.															36		36
Disco S.A.											34						34
Friar S.A.														33			33
S.A. Genaro García Limitada C.I.F. e I.					15			19									33
Cooperativa de Vivienda La Naval Arg. Ltda.				32													32
Expreso Maipú S.A.C.I.F.														32			32
Dagsa S.A.													31				31
Ingenio La Esperanza S.A.I.C.A.S.				31													31
Transporte Mediterráneo S.A.													31				31
Energosachexport																31	31
Cargill S.A.										30							30
Serono Argentina S.A.							28										28
Industrias de Maíz S.A.											28						28
Frigorífico Minguillón S.A.C.I.				27													27
Bunge y Born Comercial S.A.										27							27
Manuel San Martín S.A.I. y C.							27										27
Wuthrich S.A.															27		27
Mani Ar. S.A.C.I.															26		26
Capdel S.A.															26		26
Frigorífico Rioplatense S.A.I.					14				12								26
Frigorífico Carcarañá S.A.C.I.															25		25
Sánchez Graña Ingeniería S.A.				25													25
Banelco S.A.																	24
Industrias Frigoríficas Nelson S.A.C.I.A.									24								24
Fábrica Cerámica Alberdi S.A.															24		24
Florencia S.A.C.I.F. e I.															24		24
Polisur S.M.												24					24
Frocecor S.R.L.													23				23
Coop. de Viv. Cons. Créd. y Serv. S. Alborada				23													23
F.V. S.A.										23							23
Scinca S.A.I.C.															23		23
Cía. Elaboradora de Productos Animales S.A.								23									23
Dezatex S.A.															22		22
Fábril Sport S.A.C.I.F.															21		21
S.A. Nestlé de Productos Alimenticios															21		21

Total general 27.499

3.2. Operaciones de cambio

Este concepto participa con el 6,3 % del total de la deuda expuesta.

En este rubro se registran las diferencias emergentes por la compraventa de divisas que realiza el Banco Central de la República Argentina.

En virtud del decreto ley 4.611 (ratificado por ley 14.467) del año 1958, no deben contabilizarse afectando los resultados del Banco Central de la República Argentina.

En esta cuenta, de acuerdo con los antecedentes legales y normativos citados, se registran por cuenta del gobierno nacional los siguientes conceptos:

1) Las diferencias en australes provenientes de las modificaciones en el valor del oro y de las divisas, ya sea que estuvieran en poder del Banco Central de la República Argentina o en poder de las instituciones autorizadas.

2) Las operaciones provenientes de regulaciones cambiarias o de operaciones de compra y venta a distintos tipos de cambio.

3) Los intereses cobrados por colocaciones realizables en divisas y por líneas de crédito o convenios internacionales.

4) Los intereses pagados por préstamos recibidos del exterior.

5) Los resultados de revaluaciones establecidas por los organismos internacionales o disposiciones especiales, etcétera.

En el caso de que las pérdidas de cambio transformen el saldo de esta cuenta pasiva en deudor, se procede a la absorción del mismo contra la cuenta activa "Saldo deudores de la cuenta resultados de operaciones de cambio".

En el anexo G se adjunta fotocopia del decreto ley 4.611/58.

Hasta ahora el saldo deudor de la cuenta Resultados de Operaciones de Cambio no ha conseguido tener ningún régimen cancelatorio por parte del gobierno nacional.

De no modificarse sustancialmente el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina, el resultado de esta cuenta será positivo siempre que el tipo de cambio al que se compran las divisas sea menor al tipo de cambio al que se venden las mismas.

Del mismo modo, el resultado de esta cuenta será negativo siempre que el tipo de cambio al que se compran las divisas sea superior al tipo de cambio al que se venden.

Conceptualmente, una explicación muy simple del resultado negativo de esta cuenta es que una o las dos situaciones siguientes se habrían presentado:

a) El Banco Central de la República Argentina, en pocas de control de cambios, ha comprado dólares en

el mercado financiero a un tipo de cambio caro, para venderlos en el mercado comercial a un tipo de cambio más barato;

b) El Banco Central de la República Argentina, en épocas de tipo de cambio fijo, ha comprado dólares luego de una devaluación a un tipo de cambio caro, para reponer los dólares que había estado vendiendo previamente para sostener el tipo de cambio barato.

Ambas explicaciones, en distintos momentos y circunstancias, son aplicables al período sobre el cual se llevó a cabo el estudio.

En forma indirecta, el Banco Central de la República Argentina subsidió la especulación de ciertos sectores privados que operaban aprovechando la vigencia del doble mercado cambiario, y especialmente quienes a través de las sobre y subfacturaciones en las operaciones de comercio internacional, incidían fuertemente en el desequilibrio entre el mercado cambiario oficial y paralelo.

3.3. Liquidación de entidades

Este ítem significa el 15 % de la deuda total expuesta, del cual el 45 % fue en concepto de pago por régimen de garantía de los depósitos y el 55 % restante pertenece sustancialmente a las deudas que las entidades mantenían con el Banco Central de la República Argentina al momento de su liquidación y el correspondiente devengamiento en concepto de ajustes e intereses.

El 90 % de estos montos se produjeron entre los años 1980 y 1982.

Principales entidades financieras en liquidación según la significatividad de las carteras crediticias al

31-12-89

- Banco del Oeste.
- Banco de Intercambio Regional.
- Banco de Los Andes.
- Banco del Iguazú.
- Banco Crédito Rural Argentina.
- Banco de Italia.
- Banco Sidesa.
- La Inversora Bahiense.
- El Trust Viviendas.
- Banco del Centro Cooperativo Limitado.

Según las deudas con el Banco Central de la República Argentina

- Banco de Los Andes S.A.
- Banco de Intercambio Regional S.A.
- Banco del Oeste S.A.
- Banco Oddone S.A.
- Banco Sidesa S.A.
- Permanente Compañía Financiera S.A.

- Banco de Crédito Rural S.A.
- Banco Agrario Comercial e Industrial S.A.
- Nuevo Banco Santurce S.A.
- Banco Hispano Corfín S.A.
- Banco de Italia y Río de la Plata S.A.
- Cooperativa Sáenz Peña de Crédito Ltda.
- La Agrícola Cía. Financiera S.A.
- Banco del Acuerdo S.A.
- Río Paraná Cía. Financiera S.A.

Existen al 31-12-89: 59.540 deudores, 33.513 comerciales y 26.027 personales. 1.000 deudores concentran el 92 % de los créditos de las entidades en liquidación y sólo 214 de ellos representan el 76 % de la cartera actualizada.

Principales deudores (representan el 37 % del total de la deuda)

- Norvick Insausti S.A.
- Carra, Salvador
- El Molle S.R.L.
- Piñero Pacheco Agropecuaria
- Frigorífico Gualaguaychú
- Britos.
- Traballoni, Pedro
- Metasa S.A.
- Cooperativa Crédito Luz y Fuerza.
- Vanini Desmontes.

Se anexa al presente capítulo el resumen de la situación de carteras de crédito para diez actividades selec-

cionadas, y la cantidad de clientes por tramo de las principales entidades.

Existen 194 entidades con pedido de quiebra y 159 de ellas con quiebra firme. En el anexo F se detallan aquellas que mantienen sumarios en trámite y las 64 causas judiciales en curso, vinculadas con liquidación de entidades.

Dentro de las principales causas que generaron la liquidación de entidades financieras por parte del Banco Central de la República Argentina se pueden enumerar a modo de síntesis, las siguientes:

- Abuso deliberado en el manejo de operaciones de prefinanciación de exportaciones, consistente en la obtención de asistencia crediticia sin la concreción de la exportación previamente comprometida.

- Creación de "carpetas fantasmas", empresas inexistentes o insolventes, autopréstamos a través de empresas vinculadas, etcétera.

- Existencia de mesas de dinero hacia donde se desviaban los recursos de la entidad (captación marginal de fondos).

- Falsificación de solicitudes de créditos y de los saldos de cuentas corrientes.

- Certificados de depósitos a plazo no contabilizados o registrados regularmente.

- Compra-venta de inmuebles con grandes pérdidas para la entidad.

Resulta evidente advertir que se cometieron toda clase de ilícitos al amparo de una débil legislación, donde los lentos procedimientos judiciales aún no han producido la determinación de las responsabilidades penales y su correspondiente punición.

Asimismo el dictado de medidas cautelares judiciales que se mantiene indefinidamente, traba el normal desarrollo de los procesos liquidatorios y concursales con el consiguiente perjuicio que traen aparejado.

RESUMEN DE LA SITUACION DE CARTERA DE CREDITOS PARA 10
ACTIVIDADES SELECCIONADAS

60 130 I
CONCEPTO: TOTAL
PROCESO: 31-12-89

—Importes en miles de australes—

E = Total de cartera de créditos del
sistema en liquidación,
231.545.353 miles de australes.

Actividades	En situación normal		Con arreglos		Con atrasos		En gestión judicial		En quiebra o liquidación		Total A	% sobre tot. cart. A/E	Riesgo de insolvencia B	% sobre total B/A
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%				
06 - Vid (viticultores) .	9.343	0,33	19.081	0,68	1.714.780	61,28	1.049.282	37,50	5.869	0,21	2.798.360	0,99	2.301.593	82,25
15 - Explotación agrícola-ganadera	175.955	0,70	3.645.763	14,46	4.986.043	19,78	16.250.468	64,46	152.623	0,61	25.210.852	8,95	21.482.802	85,21
18 - Pesqueras	391.697	13,46	1.114.672	39,31	1.191.952	42,03	91.902	3,24	55.538	1,96	2.835.761	1,01	1.374.346	48,46
22 - Industria-Bebidas .	3.642	0,06	339.590	5,62	3.137.841	51,95	2.557.622	42,34		2,15	3.687.412	2,15	3.687.412	61,05
50 - Construcción	899.736	4,16	834.643	3,86	5.672.608	26,23	13.895.344	64,24	328.116	1,52	21.630.447	7,68	15.348.712	70,96
60 - Comercio mayorista	2.387.358	20,79	643.085	5,60	2.615.082	22,77	5.689.081	49,53	150.848	1,31	11.485.454	4,08	5.123.684	44,61
65 - Comercio minorista	939.175	1,66	172.383	0,30	49.201.212	87,02	6.221.627	11,00	5.854	0,01	56.540.251	20,08	6.430.171	11,37
72 - Otros servicios ...	6.497.316	32,40	2.345.844	11,70	3.876.054	19,33	7.325.725	36,53	11.427	0,06	20.056.366	7,12	10.179.829	50,76
81 - Otros	2.496.509	22,56	692.746	6,26	2.029.476	18,34	5.700.350	51,52	146.034	1,32	11.065.115	3,93	5.485.905	49,58
82 - Familias y personales	4.300.841	30,87	226.752	1,63	2.629.169	18,87	6.751.425	48,46	22.636	0,16	13.930.823	4,95	5.006.230	35,94
TOTALES: ...	18.091.577	10,54	10.034.559	5,85	77.054.217	44,92	65.532.826	38,19	880.243	0,51	171.593.422	60,95	76.420.684	44,54

CANTIDAD DE CLIENTES POR TRAMO Y POR ENTIDAD
REFERIDA A LA MUESTRA DE PRINCIPALES ENTIDADES¹ AL 31-12-89

Entidad	Intervalos					Total
	999.999.999 5.000.000	4.999.999 2.500.000	2.499.999 500.000	499.999 1	0.999.999 0.1	
1. Banco del Oeste S.A.	61	17	15	319	27	439
2. Banco de Intercambio Regional S.A.	315	136	443	233	224	1.351
3. Amersur Compañía Financiera S.A.	60	6	13	7	13	99
4. Banco de Los Andes S.A.	131	52	104	167	68	522
5. Banco del Iguazú S.A.	105	63	214	614	35	1.031
6. Banco de Crédito Rural Argentino	49	12	34	169	45	309
7. Banco de Italia y Río de la Plata	73	51	212	338	26	658
8. Banco Sidesa S.A.	37	10	28	65	110	248
9. La Inversora Bahiense S.A.	43	15	25	20	0	103
10. El Trust Viviendas S.A.	72	31	21	27	15	166
11. Banco del Centro Cooperativo Limitado	46	26	72	324	311	779
12. Dar de Ahorro y Préstamo	50	4	9	22	11	96
13. Banco Regional del Norte Argentino	49	3	15	15	49	131
14. Patrimonio Desaf, N° 3	29	2	13	31	59	134
15. Compañía Financiera SIC S.A.	52	21	73	175	5	326
Totales:	1.172	449	1.289	2.524	938	6.432

¹ Excluidos los correspondientes a préstamos personales.

3.4. Banco Hipotecario Nacional

De acuerdo al informe del doctor Roque Fernández, su incidencia es del 6,3 % sobre el total de la deuda expuesta.

No se dispone todavía de la información del Banco Central de la República Argentina ni del Banco Hipotecario Nacional sobre el detalle, cronograma ni operatorias vinculadas con los 4.286 millones de dólares entregados por esa institución al Banco Hipotecario Nacional durante el período 1985/89 ni sobre los montos operados en la etapa 1980/85.

De los datos conocidos la secuencia de los préstamos del Banco Central de la República Argentina al Banco Hipotecario Nacional han sido:

1985	585 millones de dólares
1986	1.168 millones de dólares
1987	2.200 millones de dólares
1988	299 millones de dólares
1989	33 millones de dólares

De los datos obtenidos se observa que el 80 % de los mismos fueron efectuados en los años 1986 y 1987.

El presidente del Banco Hipotecario Nacional durante ese período fue Luis Aníbal Reynaldo, su vicepresidente fue Horacio T. Gorosito y su síndico Amadeo Di Fonzo. En el anexo J figura detalladamente el conjunto de los miembros del directorio.

La información suministrada por el Banco Central de la República Argentina es que, conforme con lo establecido por los decretos del Poder Ejecutivo nacional 1.319/90 (artículo 11) y 866 (artículo 9°), se dispuso la cancelación, con valor al 30-6-89, de las deudas que mantiene con esta institución el Banco Hipotecario Nacional. Los saldos registrados a esa fecha son de \$ 137.000 millones (o sea un equivalente a u\$s 25 millones).

Dicha deuda responde a asignaciones de fondos otorgadas para el financiamiento de operatorias "Individuales" y "Obras masivas", estas últimas correspondientes a obras reprogramadas con convenios firmados por empresas constructoras y entidades intermedias, en los términos del Acta de Entendimiento y su adecuación, firmada entre dicho Banco y la Cámara Argentina de la Construcción.

La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas ha informado que sobre el tema existen dictámenes y se encuentra actuando la Justicia Federal (expediente 9.715 de dicha Fiscalía). También se está investigando la operatoria de la circular 830, donde se asignaban préstamos personales en forma arbitraria y sin respetar el espíritu de la misma.

El 12-10-90 se cursó nota al Banco Hipotecario Nacional para que suministre la información faltante, con similar detalle a lo solicitado al Banco Central de la República Argentina, sin haber logrado todavía ninguna respuesta.

3.5. Banco Nacional de Desarrollo

El documento presentado por el doctor Roque Fernández acusa un endeudamiento del BANADE con el Banco Central de la República Argentina equivalente a 246,6 millones de dólares, considerando únicamente la deuda devengada durante el último semestre de 1989.

La información suministrada por el Banco Central de la República Argentina es que conforme con lo establecido por los decretos del Poder Ejecutivo nacional 1.319/90 (artículo 11) y 866 (artículo 9°) se dispuso la cancelación con valor al 30 de junio de 1989 de las deudas que mantiene con esta institución el Banco Nacional de Desarrollo. Los saldos registrados a esa fecha son de australes 137.000 millones (o sea un equivalente a u\$s 25 millones).

Las operatorias que dieron origen a la deuda citada anteriormente correspondientes al BANADE se refieren a:

1. Préstamo consolidado (comunicación "A" 243).
2. Refinanciación pasivos empresas del sector azucarero.
3. Apoyo a empresas comprendidas en el decreto 271/85.
4. Construcción de buques.
5. Empresas frigoríficas de exportación.
6. Financiamiento de empresas industriales y mineras.
7. Intereses de operaciones avaladas por la Secretaría de Hacienda.
8. Pago de intereses al exterior (resolución 547/86).
9. Atender necesidades de capital de trabajo de pequeñas y medianas empresas industriales y mineras.
10. Línea adicional (comunicación "A" 1.184).
11. Bienes de capital de pequeñas industrias.
12. Financiar construcción y equipamiento de hoteles.
13. Préstamo a pequeña y mediana empresa otorgado por el BIRF.
14. Entidades sin fines de lucro.
15. Refinanciación de deudas para regularizar situación financiera.
16. Refinanciar inversiones destinadas a incrementar producción de bienes regionales exportables.
17. Recuperos producidos entre el 1º de marzo de 1989 y el 30 de diciembre de 1989, no imputados a los destinos previstos en la resolución 425/89.

Cabe señalar, respecto del BANADE, que con posterioridad a la firma del decreto del Poder Ejecutivo nacional 866/90 se le habilitaron nuevos fondos por lo que la deuda global existente habría que incrementarla conforme al siguiente detalle:

— Australes 224.000 millones para atender retiros voluntarios de personal.

— Australes 31.751 millones con destino a financiar a entidades sin fines de lucro.

Estos valores equivalen a 46 millones de u\$s (al 31 de julio de 1990 la entidad sólo había usado australes 16.000 millones según cronograma de uso aprobado). En ambos casos, las cifras consignadas son a valores de julio de 1990.

La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas informa que sobre un monto importante respecto a las cifras expuestas por el doctor Roque Fernández (247 millones de dólares) existen dictámenes que obran en su poder, pero hasta el presente no los ha puesto a nuestra disposición.

Según su opinión, los casos no investigados son fundamentalmente refinanciaciones de avales pagados y cuyos recuperos no han sido percibidos.

Hasta el presente el Banco Central de la República Argentina no ha suministrado ninguna información adicional ni sobre el período faltante 1980/junio 1989, ni sobre los conceptos por los que se operaron dichas transferencias.

Se cursó nota al BANADE para que también suministre la información faltante, con igual detalle a lo solicitado al Banco Central de la República Argentina

el 12 de octubre de 1990, sin haber obtenido hasta el presente ninguna respuesta.

Cabe mencionar, que durante el mencionado período participaron del directorio del BANADE: Rafael Antonio Vila, Mario Broderhson, Marcelo Kiquel, Crystian Colombo, Hugo R. Avellaneda y el síndico fue desde 1984 a 1988 Carlos Aníbal De Grossi.

En el anexo J se detalla el conjunto de los miembros de los distintos directorios.

3.6. Financiamiento al gobierno

En este rubro, que significa el 18,7 % del total del cuadro presentado, se han incluido:

1) Las letras que ha emitido el gobierno nacional como contraparte del financiamiento del déficit fiscal que le ha ido otorgando por el Banco Central de la República Argentina a la Tesorería. Según el informe del doctor Roque Fernández el saldo acumulado a fines de 1989 por este concepto es de casi 5.000 millones de dólares.

2) Los fondos que ha tomado el Banco Central de la República Argentina de organismos internacionales para prestárselos a la Tesorería a los mismos efectos. También según el mencionado informe, el saldo acumulado a diciembre de 1989 ascendía a casi 7.000 millones de dólares.

En un estricto sentido contable estas letras figuran como un activo del Banco Central de la República Argentina. En los hechos las letras emitidas por el gobierno nacional sufren sucesivas renovaciones a sus correspondientes vencimientos, no existiendo ninguna perspectiva real de que sean pagadas cuando la Tesorería disponga del superávit necesario para hacerlo.

También debe tenerse en claro que en general las letras emitidas en australes sufrieron sustanciales depreciaciones en el tiempo, no tuvieron el correspondiente ajuste contable, ni tampoco el ajuste de su supuesto valor real de recupero.

Por lo tanto estos conceptos también han significado emisión monetaria, que "de alguna manera" se consumió a través del déficit fiscal.

Se adjuntan cuadros demostrativos y detallados de los dos conceptos mencionados: letras emitidas y fondos tomados de organismos internacionales.

Se debe tener en cuenta que éstos no son los únicos conceptos a través de los cuales el Banco Central de la República Argentina ha financiado el déficit de la Tesorería.

Se aguarda información de la Contaduría General de la Nación sobre detalles de los rubros que han conformado la financiación del déficit fiscal durante el período 1987/1989, pues suponemos que el monto de estas cuentas para el total del período son superiores a las expuestas en el informe del Banco Central de la República Argentina.

Con los datos disponibles se estima que el total del financiamiento que ha provisto el Banco Central de la República Argentina al gobierno en el período 89/89, en forma directa, por diversos conceptos ascende aproximadamente a 70.0 millones de dólares (no se computan en este cálculo los financiamientos otorgados por entidades financieras ni entidades o bancos internacionales a organismos o empresas del Estado).

LETRAS EMITIDAS

Financiamiento en moneda extranjera al gobierno nacional

Resol.	N. Hac.	Fecha	Dólares	Australes	Precio	Vto.	Observaciones
Vs./87		30-12-87	1.852.115.630	6.963.954.770	3,76	30- 6-90	
Saldo acumulado año 1987			1.852.115.630	6.963.954.770			
10/141	97	31- 3-88	839.062.500	4.078.147.450	4,860362	30- 6-90	
554	423	31- 3-88	581.800.000)	(2.187.568.000)	3,76	—	Cancelación parcial letras 87
606	330	30- 8-88	500.000.000	6.000.000.000	12,00	30- 8-90	
619	406 B	20-10-88	400.000.000	4.916.000.000	12,29	20-10-90	
Saldo acumulado año 1988			3.009.378.130	19.770.534.221			
40	2 B	2- 1-89	1.200.000.000	16.116.000.000	13,43	2- 1-90	
190	94	11- 4-89	400.000.000	8.060.000.000	20,15	11- 4-90	
469	215	17- 7-89	(*) 200.000.000	131.000.000.000	655,00	17- 7-90	
537	259	1- 9-89	(*) 30.000.000	19.650.000.000	655,00	1- 9-90	
559	259	1- 9-89	(*) 170.000.000	111.350.000.000	655,00	1- 9-90	
595	259	13-10-89	50.000.000	32.750.000.000	655,00	13-10-90	
626	303	1-11-89	15.000.000	9.825.000.000	655,00	1-11-90	
			(300.000.000)	(30.680.910.000)	102,2697	—	(*) Cancelación letras anticipadas
662	344	6-12-89	150.000.000	98.250.000.000	655,00	6-12-90	
Saldo acumulado año 1989			4.924.378.130	416.090.624.221			

Departamento de Financiación del Sector Público.
Gerencia de Finanzas Públicas.

FONDOS TOMADOS POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA FINANCIAR DEFICIT DE TESORERIA

Financiamiento externo al gobierno nacional

Resol.	N. Hac.	Fecha	Dólares	Australes	Precio	Vto.	Observaciones
553/88	423	30- 6-89	5.110.900.000	19.216.984.000	3,76	30- 6-90	Letras renovadas vencidas año 87
553/88	423	30- 6-89	1.300.000.000	1.741.350.000	1,3395	30- 6-90	Letras renovadas vencidas año 88
554/88	423	31- 3-88	581.800.000	2.187.568.000	3,76	30- 6-90	Letras renovadas adquiridas año 87
Saldo acumulado año 1989			6.992.700.000	23.145.902.000			

Departamento de Financiación del Sector Público
Gerencia de Finanzas Públicas.

3.7. Crédito a países

Equivale aproximadamente a un 2,5 % del total de la deuda declarada.

3.7.1. Evolución histórica

A comienzos de la década del 70 el Estado argentino desarrolló líneas de créditos llamadas bilaterales, también conocidas con el nombre de créditos país-país.

Estas se concedieron a determinados países para que adquirieran productos originados en la Argentina. Generalmente se establecieron condiciones favorables para el país receptor, permitiendo el pago en un período muy largo y con un interés menor a los vigentes en los mercados internacionales.

Durante la década de los 70 la Argentina advirtió las dificultades generadas por la concesión de créditos bilaterales a países con grandes dificultades de pago.

Para 1983 ya había suficiente experiencia para demostrar que los 500 millones de dólares concedidos en los años anteriores eran prácticamente incobrables.

La situación de esos países estaba agravada por la crisis de la deuda externa, los altos intereses y exigencias del sistema financiero internacional. Era previsible para cualquier observador especializado que conceder créditos a largo plazo a esos países era aún más riesgoso que en el pasado.

Sin embargo, a partir de ese año se reanuda con énfasis el financiamiento a países que claramente presentaban graves dificultades de pago, a través de la concesión de nuevos créditos y de la activación de líneas ya acordadas pero que no estaban operativas.

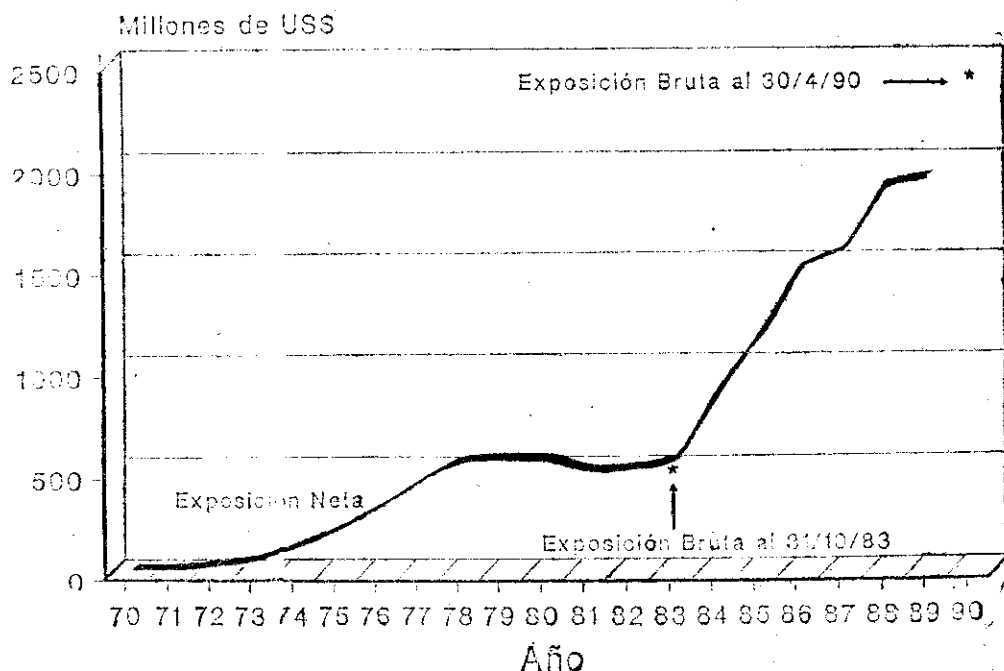
Además de considerar el monto actual de la exposición de la Argentina por este tipo de créditos, es de fundamental importancia su evolución en el tiempo.

Hasta el presente la única fuente de datos (que no es oficial) está constituida por una serie sobre los créditos otorgados por la Argentina a otros países durante el período 1970/1989. Debe notarse que son valores netos, es decir, que se han restado los créditos recibidos por la Argentina de esos mismos países.

EXPOSICIÓN NETA ARGENTINA POR CREDITOS BILATERALES

En millones de dólares, a fin de cada año

Períodos							
I		II		III		IV	
1970	18,9	1973	62,1	1977	457,9	1984	866,6
1971	16,8	1974	12,78	1978	546,0	1985	1.146,8
1972	36,0	1975	215,1	1979	552,7	1986	1.484,0
		1976	320,0	1980	545,9	1987	1.566,7
				1981	497,0	1988	1.887,9
				1982	505,9	1989	1.926,3
				1983	541,4		



Puede apreciarse que nace con valores prácticamente nulos en 1970 y comienza a incrementarse en 1973. Precisamente en ese año se modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina por ley 20.539. A partir de este instrumento legal se puso de manifiesto en forma explícita la decisión política que permitió al Banco Central de la República Argentina conceder créditos bilaterales sin tener en cuenta la solvencia del deudor, ya que no se exigían garantías.

En 1978 el nivel de exposición se estabiliza en alrededor de 550 millones de dólares, y permanece en ese nivel hasta 1983. A partir de ese momento la exposición argentina neta comienza a elevarse rápidamente.

Es decir que las tres cuartas partes de la exposición actual corresponde a créditos otorgados en el período 1984-89.

B.7.2. Estimación de la pérdida

De tal manera, el riesgo del gobierno argentino entre 1983 y 1989 se incrementó en casi u\$s 1.500.000.000.

Del análisis del estado de los financiamientos otorgados por el Banco Central de la República Argentina a otros países surge que el total desembolsado al 30 de abril de 1990 asciende a 3.117 millones de dólares.

La mitad debió refinanciarse ante la imposibilidad de ser cobrada, y el resto aún no venció o está atrasada su cobranza, sin acuerdos de refinanciación.

Si se incluyen los intereses devengados y no cobrados, la exposición actual de la Argentina por este concepto es de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Las tres cuartas partes de ese monto corresponden a créditos otorgados en el período 1983/1989.

Dado el grado de insolvencia de los países beneficiarios, y la cotización que registran en los mercados internacionales su correspondientes títulos de deuda, el valor como activo de ese stock de crédito ascendería aproximadamente a 240 millones de dólares.

Esto implica una pérdida implícita para la Argentina de alrededor de 2.200 millones de dólares.

RESUMEN DE LA SITUACION AL 30-4-90 (en millones de dólares)

Monto de créditos efectivamente desembolsados	3.117,5
Más:	
Intereses devengados	334,8
Menos:	
Montos cobrados	976,3
Resultado:	
Exposición total (no incluye OPRAC)	2.476,0
Menos:	
Valor de mercado	240,0
Resultado:	
Pérdida estimada	2.236,0

B.7.3. Características de la operatoria

La operatoria en general se desarrolló de la siguiente forma: 1) A través de acuerdos firmados por la Cancillería Argentina y a veces juntamente con la Secretaría de Comercio Exterior, se firmaban convenios con las correspondientes autoridades gubernamentales de otros países; 2) Con esta documentación firmada, el Banco Central de la República Argentina tenía facultades para otorgar el crédito correspondiente por una simple reso-

lución de directorio (artículo 19, inciso d) de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, ley 20.359); 3) Las condiciones significaban privilegios para el país deudor, ya sea en plazos, tasas de interés, periodos de gracia, etcétera; 4) Estos acuerdos permitían al exportador argentino a que, una vez efectuada la exportación, presentaba la documentación al Banco Central de la República Argentina y éste le pagaba de inmediato el valor de la misma en australes.

A pesar de que estos convenios hayan permitido efectuar algunas exportaciones, no han generado efectivos ingresos de divisas al país. Resultaron ser "regalos", emitiendo dinero a través del Banco Central de la República Argentina, y generando bienes que tampoco se incorporaron al país, ni como bienes de capital para encadenar un proceso de reactivación de la producción, ni produciendo bienestar a través del mayor consumo de nuestros habitantes.

Muchos países financian sus exportaciones mediante líneas de créditos a largo plazo y bajo interés. De esta manera contribuyen al aumento de sus exportaciones, sobre todo las de aquellos productos que otros países ofrecen en mercado internacional en condiciones similares. En algunos países, estas líneas de créditos son instrumentadas por los respectivos bancos centrales. En otros existen instituciones financieras estatales, mixtas o privadas, que proveen el financiamiento.

En la Argentina el financiamiento de las exportaciones estuvo a cargo del Banco Central de la República Argentina, el que instrumentó las diversas líneas a través de circulares concedidas normalmente como líneas OPRAC. La diferencia fundamental entre esta línea de crédito para financiar exportaciones y los créditos bilaterales o país-país es que, en las primeras, la responsabilidad por el incumplimiento de los pagos la asumen las empresas intervinientes y no el Banco Central de la República Argentina.

Así, en una exportación normal hecha con financiamiento OPRAC, la firma exportadora y el banco comercial interviniente respaldan el crédito que otorga el Banco Central de la República Argentina. Este, antes de otorgarlo, exige la correspondiente documentación firmada por el importador, quien deberá pagar las cuotas del crédito. El importador además deberá estar avalado por un banco comercial de su país. Finalmense se contrata un seguro que cubre el eventual riesgo del cliente y del país receptor de la mercadería. De esta manera, el Banco Central de la República Argentina ofrece un financiamiento a plazos y tasas favorables, pero se asegura el cobro de las cuotas correspondientes al crédito que otorgó.

3.7.4. Distribución por países

Del análisis de los créditos bilaterales otorgados por la Argentina, aproximadamente el 92 % del volumen total están concentrados en seis (6) países: Cuba (36 %), Bolivia (35 %), Perú (10 %), Polonia (4,8 %), Uruguay (3,9 %) y Nicaragua (2,8 %).

El 8 % restante se distribuye entre 15 países (ver cuadros anexos). El Banco Central de la República Argentina nos suministrará próximamente información respecto a los convenios celebrados con Uruguay.

Un solo país, Checoslovaquia pagó los montos desembolsados de acuerdo a las cláusulas convenidas(sólo utilizó el 12 % de los montos acordados), y tres países, Hungría, Panamá y Zaire no utilizaron los créditos otorgados.

**ESTADO DE LOS CREDITOS BILATERALES OTORGADOS POR EL
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA**
(en millones de dólares) al día 30-4-90

País	Monto acordado	Operaciones aprobadas	Monto efectivamente desembolsado	Amortización (neta de refinanciación)	Atrases		Intereses por mora	Exposición bruta total
					Capital	Intereses		
Cuba	1.589,1	1.230,1	1.230,1	407,0	101,0	65,0	7,0	895,1
Bolivia	170,0	124,0	773,0	52,2	0,0	149,4	6,1	876,3
Perú	350,0	323,2	311,9	83,1	50,3	1,2	0,0	241,3
Polonia	245,0	202,6	197,3	83,5	0,0	0,0	0,0	119,1
Uruguay	120,0	101,3	71,2	5,8	0,0	0,0	0,0	95,5
Nicaragua	51,0	50,8	54,8	0,1	18,0	10,2	4,2	69,1
República Dominicana	53,8	46,4	32,3	21,7	16,8	6,3	8,0	39,0
Senegal	20,0	18,2	18,0	-1,4	2,6	2,1	0,3	22,0
Honduras	15,0	15,0	17,0	3,8	6,9	3,2	1,2	17,6
Chile	210,0	164,8	150,0	149,1	0,0	0,0	0,0	15,7
Haití	34,0	34,0	34,0	24,0	9,9	0,8	5,1	15,1
El Salvador	25,0	23,5	24,8	11,7	5,0	1,3	0,5	14,9
Guatemala	25,0	14,1	11,6	4,5	1,4	0,5	0,1	10,2
China	300,0	135,4	135,1	125,7	0,0	0,0	0,0	8,7
Guinea Ecuatorial	5,0	5,0	5,4	-3,3	2,6	1,8	0,7	7,9
Costa Rica	15,0	10,6	7,6	4,3	0,3	0,1	0,0	6,4
Guyana	5,0	4,5	5,1	0,6	0,6	1,2	0,2	5,9
Guinea (Conakry)	10,0	9,9	10,6	0,0	3,3	2,9	1,2	5,2
República Centroafricana	10,0	9,7	10,4	0,0	3,1	2,4	0,7	4,1
México	50,0	2,9	4,1	0,7	0,0	0,0	0,0	3,4
Benin	10,0	10,0	10,8	0,0	1,1	1,3	0,1	2,5
Checoslovaquia	20,0	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Zaire	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panamá	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hungría	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totales	3.392,9	2.538,4	3.117,5	976,3	222,9	249,7	35,4	2.476,0

NOTA: La exposición total es igual al importe aprobado o al desembolsado, el que fuere mayor, menos la amortización neta de refinanciación, más intereses atrasados y morosos.

CUBA

Fecha otorgamiento del crédito	Monto acordado (millones u\$s)	Grado de utilización del crédito	Observaciones
24- 8-73	200	n/d.	Productos promocionados.
26- 6-74	400	Al 30-6-83 se habían usado u\$s 464,6 millones.	Productos promocionados.
7- 4-83	67,5	n/d.	Productos agroalimentarios.
30- 6-83	600	Al 30-6-84 se habían utilizado u\$s 473 millones.	Se prorroga el plazo de uso en un año.
16- 8-84	600	Al 31-12-86 (fecha de su vencimiento) se habían usado u\$s 102,5 millones.	Productos promocionados.
12- 7-85	154	Al vencer se habían utilizado u\$s 425, dado su carácter rotativo.	Ampliación de la línea número 3
23-10-87	97,6	Al 31-5-89 se habían usado u\$s 100,8 millones.	Créditos desembolsables contra los pagos efectuados por Cuba.
23-10-87	11,8	Al 31-5-89 se habían usado u\$s 11,8 millones.	Créditos desembolsables contra los pagos efectuados por Cuba.
27- 4-88	102	Se usaron u\$s 102 millones hasta su vencimiento.	Créditos desembolsables contra los pagos efectuados por Cuba.
27- 4-88	10,7	A su vencimiento se habían usado u\$s 2,2 millones.	Créditos desembolsables contra los pagos efectuados por Cuba.
20- 1-89	90	n/d.	Productos agroalimentarios.
20- 1-89	10	n/d.	Productos promocionados.

Total efectivamente utilizado en el período: u\$s 1.218 millones. — Exposición total al 30-4-90: u\$s 895 millones.

BOLIVIA

Fecha otorgamiento del crédito	Monto acordado (millones u\$s)	Grado de utilización del crédito	Observaciones
18- 3-77	50	n/d.	Productos promocionados.
10- 4-79	50	n/d.	Se renueva Nº 1 por ampliación del plazo de uso en 2 años.
8- 9-80	50	A su vencimiento se habían utilizado u\$s 50 millones.	Crédito destinado a productos tradicionales.
13- 4-81	50	Al 30-6-84 Bolivia había utilizado u\$s 48 millones.	Se renueva Nº 2 por otros 2 años.
14- 7-83	20	A su vencimiento se habían utilizado u\$s 17,9 millones	Productos tradicionales.
3-11-83	100		Se amplía Nº 4 y se lo promueve por 2 años.
14-10-85	150	Al 20-5-87 el monto de utilización era de u\$s 106 millones.	Se amplía el crédito Nº 6 (de 100 a 150) y se lo renueva por 2 años.

Total efectivamente utilizado en el período: u\$s 173,9 millones.

Exposición total al 30-4-90: u\$s 876,3 millones (no incluye OPRAC). Esta exposición incluye otros financiamientos otorgados por el BCRA, el Banco de la Nación Argentina y el Banco Provincia de Buenos Aires.

PERU

Fecha otorgamiento del crédito	Monto acordado (millones u\$s)	Grado de utilización del crédito	Observaciones
1- 4-80	30	Al 30-6-83 se habían utilizado u\$s 20 millones.	Productos tradicionales.
4- 9-81	30	Al 31-5-89 se había utilizado totalmente.	Productos tradicionales. Vencido y cancelado.
23- 2-82	300	n/d.	Se amplía un crédito anterior y se renueva su plazo de uso por cinco años.
15-12-86	100	n/d.	Productos tradicionales.
15-12-87	100		Renovación.
15-12-88	100	Al 31-5-89 se habían aprobado u\$s 97,5 millones.	Renovación.
23- 2-87	200	Al 20-5-87 se había utilizado u\$s 191 millones.	Se renueva Nº 3 por ampliación del plazo de utilización en 1 año. Se descuentan u\$s 100 millones destinados a material ferroviario por no haber sido utilizados.
23- 2-88	200	Al 31-5-89 se había usado u\$s 193,4 millones.	Se renueva Nº 7 por ampliación del plazo de utilización en 1 año.
10-12-89	50	Al 31-5-89 se habían aprobado u\$s 23,4 millones.	Productos promocionados

Total efectivamente utilizado en el período: u\$s 365 millones.

Exposición total al 30-4-90: u\$s 241,3 millones (no incluye OPRAC).

POLONIA

Fecha otorgamiento del crédito	Monto acordado (millones u\$s)	Grado de utilización del crédito	Observaciones
6.10-81	20	Al 31-10-83 (fecha de vencimiento) se habían utilizado u\$s 19 millones.	Productos promocionados.
16-10-81	185	Al 31- 8-89 se habían utilizado u\$s 177 millones.	Crédito destinado a la adquisición de buques.
12- 3-86	40		Productos promocionados.
27- 6-88	40		Se renueva el plazo de utilización del crédito N° 3 por 6 meses.
30- 5-88	40	Al 31-12-89 se habían utilizado u\$s 0,5 millones	Se renueva otra vez el plazo.

Total efectivamente utilizado en el período: u\$s 196,5 millones.

Exposición total al 30- 4-90: u\$s 119,1 millones.

NICARAGUA

Fecha otorgamiento del crédito	Monto acordado (millones u\$s)	Grado de utilización del crédito	Observaciones
2- 3-83	15		Línea de crédito destinada a la compra de productos promocionados.
10- 8-84	45	Al 30- 6-84 se habían utilizado u\$s 12 millones.	Se amplía el crédito anterior y se extiende el plazo de utilización a 2 años.
8- 6-86	51	Al 20-5-87 los montos aprobados ascendían a u\$s 44,5 millones.	Se amplía el crédito anterior y se extiende el plazo de uso (1 año).

Total efectivamente utilizado en el período: u\$s 54,8 millones.

Exposición total al 30-4-90: u\$s 69,1 millones (incluyendo intereses).

3.7.5. Responsables y beneficiarios.

En la concesión de estas líneas de créditos bilaterales hubo diversos grupos de interés que resultaron beneficiados: 1) Los propios países beneficiarios de los créditos, que de esta manera se vieron en la posibilidad de incrementar sus importaciones sin necesidad de desembolsar. 2) Las empresas que, mediante este tipo de financiamiento tuvieron la posibilidad de exportar sus productos desentendiéndose del riesgo de la operación derivado de la insolvencia de su cliente o del país destinatario.

Las principales empresas exportadoras que han participado del régimen de financiación con líneas de crédito otorgadas a otros países son las siguientes, por orden de importancia, de acuerdo a lo informado por el Banco Central de la República Argentina:

- Astilleros Alianza S. A.
- FIAT Vehículos Industriales.

- Siderca S. A. I. C.
- Soinco S. A.
- Mercedes Benz S. A.
- Acindar S. A.
- Ford Motor S. A.
- José Cartellone Construcciones S. A.
- Industrias Pirelli S. A.
- Kracia S. A.
- Sercoplan S. A.
- Trovato Construcciones S. A.
- Fabricaciones Militares.

Las exportaciones están en general bastante diversificadas, y salvo el caso de los buques enviados a Polonia, el mayor porcentaje lo absorbieron los productos deri-

vados de la agroindustria, sector que se caracteriza por la gran diversidad de oferentes.

A su vez, hay casos difíciles de identificar, por cuanto en algunas oportunidades los créditos fueron otorgados por bancos privados, avalados por el Banco Central de la República Argentina. Esto implicó que en la práctica fuera el Banco Central de la República Argentina quien asumió, aunque indirectamente, el riesgo de incobrabilidad.

Estas líneas de crédito tuvieron su origen en acuerdos llevados adelante por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y el financiamiento otorgado aparece vinculado a lograr fines políticos respecto de los países beneficiarios.

Si bien el Banco Central de la República Argentina tiene la autorización legal para conceder créditos a otros países a través de convenios con los respectivos bancos centrales, sin más requisitos que la aprobación por parte del directorio, en la práctica, y dado los cuantiosos fondos que se asignaban a través de estos créditos y las implicancias que tenían en la política exterior argentina, el Banco Central de la República Argentina sólo instrumentaba créditos que se decidían en el Ministerio de Economía de la Nación y en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Formalmente, la concesión de un crédito bilateral suele comenzar con una nota muy simple en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina informa al embajador del país beneficiario que la Argentina ha decidido concederle un crédito. Generalmente esa nota sólo incluye el monto y las respectivas cantidades a ser utilizadas en la adquisición de bienes promocionados y no promocionados. El país beneficiario acusa recibo de la nota y acepta el crédito.

Notificado de las "Notas reversales", el directorio del Banco Central de la República Argentina emite una circular en la que se especifican los detalles del crédito (tasas de interés, plazos, período de gracia, tipo de bien que se podrá exportar con cargo a ese crédito, etcétera). Luego va autorizando cada una de las operaciones que los exportadores presentan, hasta agotar el monto del crédito, o en su defecto hasta que expire el plazo de utilización concedido, aunque muchas veces se renovaba a su vencimiento.

Una consideración especial merece la comparación de los créditos bilaterales que otorgó la Argentina con los recibidos de parte de Italia y España.

Una diferencia fundamental es que en esos países los créditos concedidos a la Argentina fueron aprobados por los respectivos Parlamentos. En nuestro país no es legalmente necesario que el Parlamento apruebe un crédito bilateral porque la autoridad legal para concederlo la detenta el Banco Central de la República Argentina.

Otra diferencia importante es que los créditos de España e Italia son canalizados a través de instituciones bancarias que exigen avales y garantías a las

empresas argentinas que los reciben. Así, el riesgo de incobrabilidad para el país prestamista es prácticamente nulo.

Un país que quiere tener su finanzas públicas bien organizadas, no debería permitir que ningún ente del Estado tenga la autorización para conceder créditos sin las suficientes garantías de solvencia del deudor, y además debería anotar como un gasto la previsión por incobrabilidad. Así, ese gasto quedaría registrado en el presupuesto nacional, y recibiría la autorización del Parlamento Nacional.

Si se hubieran tomado estas medidas, le hubiera quedado claro al Parlamento y a toda la sociedad, si era preferible invertir ese dinero en salud, educación, seguridad, justicia, o en "regalar" productos a determinados países y llenar los bolsillos de nuestros empresarios.

Las actuales autoridades de los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores y Culto como las del Banco Central de la República Argentina han suspendido el otorgamiento de nuevos créditos bilaterales.

El Poder Ejecutivo nacional ha enviado al Parlamento Nacional (Cámara de Diputados, Trámite Parlamentario No 66 del 31 de julio de 1990) el proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. En la propuesta de reforma el artículo 19, inciso d), donde antes se lo autorizaba a conceder créditos a otros bancos centrales sin garantías, ahora no lo autoriza a realizar este tipo de operaciones.

Evidentemente pudo haber servido para la política del canciller Caputo para obtener la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cabe destacar que también aparece como muy notoria la intervención del secretario de Comercio Exterior, señor Campero, en muchos de los acuerdos. Durante los años 1984/1988, en los que se registraron los mayores desembolsos, los presidentes del Banco Central de la República Argentina fueron los siguientes: Enrique García Vázquez, Juan J. Concepción y José Luis Machinea, figurando en los directorios Carlos M. Da Corte, Leopoldo Portnoy, Ricardo Mazzorin, Daniel Marx y Marcelo Kiguel.

3.7.6. Composición de las exportaciones

A pesar de las limitaciones de información, respecto a la composición de las exportaciones efectuadas bajo este régimen, se puede concluir que los rubros de mayor incidencia fueron los cereales (casi 30 %), siguiendo en importancia los materiales de transporte (alrededor del 11 %), los subproductos de sustancias alimenticias (alrededor del 11 %), grasas y aceites (aproximadamente 15 %), materiales eléctricos (8,5 %), metales comunes (aproximadamente 7,5 %). Los demás rubros, en su conjunto han incidido en no más del 20 % sobre el total de las exportaciones realizadas bajo este régimen.

A continuación se agregan los cuadros de los principales productos exportados por la Argentina a los países que tienen mayor incidencia en este tipo de operación.

EXPORTACIONES ARGENTINAS A CUBA
PRINCIPALES PRODUCTOS
 (En millones de dólares)

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	Total
Cereales	21		35	60	89	34	40	64	40	383
Carnes				2	7	8	3			20
Hortalizas y legumbres	12		6	10	17	10	9			67
Residuos industriales y alimentarios	23	18	42	55	38	44	42	67	33	362
Grasas y aceites		17	35	68	63	43	31	47	16	320
Metales comunes				5	9	6		1		21
Material eléctrico			2	8	37	21	4	4	2	78
Material de transporte	6	6	1	15	6	5	1	3		43
Otros		1	1	3	12	7		2	3	29
Total	62	42	122	226	278	178	130	191	94	1.323

EXPORTACIONES ARGENTINAS A BOLIVIA
PRINCIPALES PRODUCTOS
 (En millones de dólares)

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	Total
Cereales	35	20		23	15	4	4		1	102
Productos de molinería	3	4	5	10	6	6			2	36
Grasas y aceites	18		5	6	5	1			1	36
Cauchos y sus manufacturas	2	2	6	9	10	1	2	2	1	35
Metales comunes	19	22	9	11	5	10	26	22	5	129
Material eléctrico	14	23	5	7	8	14	13	21	5	110
Material de transporte	14	27	3	11	7	10	21	8	1	102
Otros	5	6	4	3	4	9	13	22	10	76
Total	110	104	37	80	60	55	79	75	26	626

EXPORTACIONES ARGENTINAS A PERU
PRINCIPALES PRODUCTOS
 (En millones de dólares)

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	Total
Cereales		6	30	43	92	67	34	73	61	406
Carnes		24	10	12	7	19	15	9	1	97
Grasas y aceites		8	14	24	9	17	20	32	9	133
Metales comunes	30		6	13	25	21	9	9	2	115
Material eléctrico		19	9	15	9	20	18	14	6	110
Otros	58	29	19	9	13	39	34	30	8	239
Total	88	86	88	116	155	183	130	167	87	1.100

EXPORTACIONES ARGENTINAS A POLONIA
PRINCIPALES PRODUCTOS
 (En millones de dólares)

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	Total
Cereales				28	7	22				57
Pielés y cueros		19	14	17	13	12	14	14	4	107
Residuos industria alimentaria				3	3			37	43	91
Material de transporte				65	68	64				197
Otros	40		3	7	6	1	2	2	1	62
Total	40	19	17	120	97	99	16	53	53	514

NICARAGUA

Fecha otorgamiento del crédito	Monto acordado (millones u\$s)	Grado de utilización del crédito	Observaciones
2-3-83	15		Línea de crédito destinada a la compra de productos promocionados.
10-8-84	45	Al 30-6-84 se habían utilizado u\$s 12 millones.	Se amplía el crédito anterior y se extiende el plazo de utilización 2 años.
8-6-86	51	Al 20-5-87 los montos aprobados ascendían a u\$s 44,5 millones.	Se amplía nuevamente el crédito y el plazo de uso (1 año).

Total efectivamente utilizado en el período: u\$s 54,8 millones.

Exposición total al 30-4-90: u\$s 69,1 millones (incluyendo intereses).

4. Recomendaciones para continuar la investigación

Las dificultades generadas en obtener la información necesaria para efectuar metódicamente la investigación, de un tema de tanta complejidad en un período de tiempo tan limitado, y con tantas limitaciones en los sistemas contables de las diversas entidades públicas, agregadas a las variantes metodológicas tan diversas para efectuar cálculos de actualización de los valores monetarios, hacen recomendable que esta investigación sea continuada.

Especialmente habrá que profundizar los casos del Banco Hipotecario Nacional y Banco Nacional de Desarrollo, así como incorporar el detalle de algunos casos concretos en los que se hayan manifestado más explícitamente los beneficios generados por la aplicación de la mencionada política económica, y/o de entidades financieras o comerciales que han incurrido en maniobras ilícitas para generar sus excesivos enriquecimientos.

Lamentablemente el Banco Central de la República

Argentina no ha remitido la información solicitada formal y reiteradamente sobre los temas, ni tampoco lo han hecho las actuales intervenciones del Banco Hipotecario Nacional y del BANADE.

Para estos casos, y de continuar la investigación, se recomienda la participación de la SIGEP como miembro integrante de esta comisión.

Queda a la vez abierta la posibilidad de continuar la investigación, a través de las áreas que corresponda, de lo actuado en los diversos organismos y empresas del Estado con respecto a sus proveedores y contratistas, que generó parcialmente el desproporcionado déficit fiscal.

Adicionalmente, es recomendable propiciar la rápida modificación de la legislación vigente sobre el funcionamiento del sistema financiero (Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina), y acelerar el esclarecimiento de los casos denunciados ante la Justicia.

6

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GIOJA

Proyecto de declaración del que es coautor el señor diputado por el cual se solicita al Poder Ejecutivo la suspensión de la medida que dispone la cancelación de servicios ferroviarios

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo suspenda la decisión de cancelar los servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril, prevista a partir del 1º de agosto de 1992, hasta acordar con cada gobierno provincial el destino de los servicios prestados en su territorio,

José L. Gioja. — Carlos R. Beltrán. — Salomón A. Michette. — Jorge Machicote. — Oscar I. J. Parrilli. — Carlos A. Suciño. — Alberto Parada. — Neryel Suzaria.

— Juan H. González. — Eduardo A. Feller. — Carlos E. Soría. — Carlos E. Branda. — Carlos Manfredotti. — Silvia E. Troyano.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Las noticias sobre la supresión de los servicios ferroviarios para transporte de pasajeros de larga distancia, a partir del 1º de agosto próximo, si bien constituyen medidas que hacen a la reestructuración y privatización del sistema, como asimismo a eliminar el crónico déficit de la empresa, no es menos cierto que la fecha, indirectamente anunciada con la supresión de ventas de pasajes con fecha posterior al primero de agosto, es demasiado perentoria como para pensar en un meduloso y criterioso análisis por parte de las pro-

vincias para decidir sobre el financiamiento del déficit u optar por el incentivo de la privatización, con la coordinación interjurisdiccional o regional.

Consideramos innecesario destacar la función social de este medio de transporte, complementario de otros servicios públicos, que satisfacen demandas aisladas y cautivas en un proceso integrador. En estos casos se deja de lado el análisis microeconómico para priorizar la territorialidad, premiando la localización de contingentes humanos en lugares y zonas que no son explotadas en función de las bondades que les brinda la naturaleza por las restricciones originadas en nuestro desarrollo poblacional, constituyendo verdaderas reservas productivas para el futuro del país.

No es ético que la Nación, en su combate profundo y permanente para incrementar el superávit operativo —cristalizado el objetivo de equilibrio de las cuentas fiscales— haga uso de este procedimiento en forma unilateral, sin solucionar previamente el problema del destinamiento de los ferrocarriles que fueron administrados en forma exclusiva por el poder central.

Es lamentable que se desconozca el esfuerzo que realizan las provincias para modernizar el aparato estatal, reordenar su funcionamiento y modificar la tendencia de considerar al empleo público como la única fuente demandante de mano de obra. El nivel de sus recursos corrientes tiene históricamente un peso notoriamente inferior, dentro de los recursos totales, a los originados en el orden nacional. Esta limitación hace que las medidas tendientes a los objetivos precitados tengan una materialización más lenta y pausada que las que se reflejan en la Nación.

Transferir a las provincias la alternativa de cierre o continuidad representa lisa y llanamente ceder un problema que debió ser encarado con urgencia y asignado al resto de las actividades a privatizar. Esta si-

tuación debió ser estudiada por el poder central, dejando como última medida, en el límite de las decisiones, la transferencia de los servicios a las provincias.

El Poder Ejecutivo debe comprender que está imponiendo un elemento disociador de la manera que lo plantea. El hecho de que una provincia pueda financiar el funcionamiento, generará la idea de estados ricos y estados pobres. Hay que meditar sobre las reacciones del pensamiento en aquellas comunidades que se vean privadas del servicio. Los argentinos deben sentirse orgullosos de la nacionalidad territorial y no marginados y castigados por el lugar donde nacieron o donde residen.

Creemos que este problema debe ser resuelto en forma federal, con la participación de las provincias en un foro donde se prioricen aspectos sociales sobre las cuentas fiscales. La Nación no puede deslindar su responsabilidad en un tema que fue de su exclusiva competencia y aislarlo del marco privatizador y desregulatorio de otras actividades. Así como tomó su tiempo el llamado a licitación para la transferencia de actividades económicas en manos estatales, no se puede marginar el profundo estudio que el tema requiere y con la colaboración de aquellos que pueden —o no— ser colaboradores potenciales en su funcionamiento.

Por lo expuesto, señor presidente, es que le solicitamos la aprobación del presente proyecto.

José L. Gioja. — Carlos R. Beltrán. — Salomón A. Michitte. — Jorge Machicote. — Oscar I. J. Parrilli. — Carlos A. Sueiro. — Alberto Parada. — Neyef Sucarja. — Juan H. González. — Eduardo A. Feller. — Carlos E. Soria. — Carlos E. Branda. — Carlos Manfredotti. — Silvia E. Troyano.